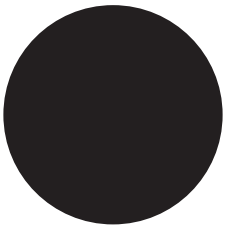
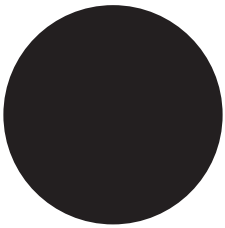




TIEMPOS DE COLAPSO II
LOS PUEBLOS ROMPEN EL CERCO

RAÚL ZIBECHI

LA PANDEMIA, EL ESTADO Y LA NORMALIZACIÓN DE LA PESADILLA

Tamara San Miguel
y Eduardo J. Almeida

EDITAN: BALADRE - Coordinación estatal de luchas contra la precariedad, el empobrecimiento y la exclusión social
C/Sant Bernat 28, Carcaixent, País Valenciá
www.coordinacionbaladre.org

ZAMBRA Iniciativas sociales
C/Francisco Cáter 1, 1º, 1ª, 29011 - Málaga
www.asociacionzambra.org

COLABORAN: Libros en Acción y CGT

DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Onintza Etxebeste
Liras / www.onintzaetxebesteliras.com

IMPRESO EN: SIGNO. S. L. L.
E-mail: 923262761@reprografiasigno.es
C/Sierpes, 1-3, 37002 - Salamanca

ISBN: 978-84-121443-7-6
DEPÓSITO LEGAL: MA 472-2021

Se permite la copia, de uno o más capítulos completos de esta obra o del conjunto de la edición, en cualquier formato, mecánico o digital, siempre y cuando no se modifique el contenido de los textos, se respete su autoría y esta nota se mantenga.

ÍNDICE

PRÓLOGO 9
Berta Iglesias Varela

INTRODUCCIÓN 13
Raúl Zibechi

PRIMERA PARTE
Las nuevas formas de dominación

1 Otoño del imperio 25

2 Pandemia y quiebre de la democracia en América Latina 28

3 Alimentación y pandemia: Diálogo con Silvia Ribeiro 32

4 Daniel Ortega aprovecha la pandemia para recomponer su régimen 37

5 Contrainsurgencia progresista 43

6 *Triage social*, el nuevo panóptico 46

7 La pandemia, el Estado y la normalización de la pesadilla 49
Tamara San Miguel y Eduardo J. Almeida

SEGUNDA PARTE
Los pueblos en movimiento rompen el cerco

8 Las mujeres zapatistas al encuentro de las rebeldías 115

9 Indígenas de Colombia: romper el cerco y derrotar a la policía 126

10 Escuchar es un aprendizaje fundamental para la masculinidad blanca patriarcal 130

11 Uruguay: Eludir a los monopolios 138

12 Brasil: *Teia dos Povos* (Red de los Pueblos) 144

13 La derrota del racismo en Bolivia 153

14 El pueblo mapuche resiste la guerra 159

15 Argentina: Masiva toma de tierras de los sin techo 165

16 El mundo nuevo ya existe en el corazón de los movimientos 171

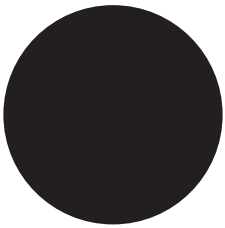
TERCERA PARTE
Tendencias y dificultades abajo y a la izquierda

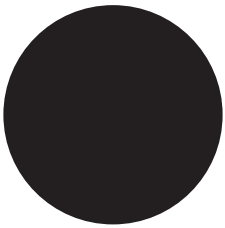
17 Las mujeres zapatistas al encuentro de las rebeldías 185

18 Estallidos o levantamientos 194

19 Pensamiento crítico y pandemia 197

20 Posdata: Los mundos nuevos que nos orientan 200





PRÓLOGO

Berta Iglesias Varela

Últimamente me cuesta luchar contra el desaliento. Será porque pensaba que, con esto de la pandemia, los seres humanos nos habríamos dado cuenta de una vez por todas de nuestra interdependencia, y de nuestra ecodependencia. Que nos necesitamos unas a otras, y que todas necesitamos la casa común. Pero no, ni con pandemia, ni confinamiento, ni con la enésima ola. Ni con el enésimo naufragio en el Mediterráneo.

No rectificamos, y no le plantamos cara al poder ecocida que aprovecha cualquier resquicio para restar derechos y sumar beneficios. Como en la doctrina del *shock,* nos han limitado al máximo la posibilidad de encontrarnos, de socializar, de enredarnos. Esa es la base de cómo nos relacionamos entre distintos movimientos sociales, entre distintas personas que nos apreciamos, que nos seguimos la pista de las reflexiones, de los avatares de la vida… Sin eso, es fácil desalentarse.

Sin embargo, aquí está este libro. Si no podemos juntarnos, abrazarnos, idear planes conjuntos para tumbar al capitalismo y al heteropatriarcado, al menos, gracias a Baladre y a la editorial Zambra, podemos leernos. Que no es poco.

Nos queda la palabra escrita, que nos habla de las otras, de sus miedos y pesadillas. De las matanzas en Cauca, de cómo la policía es la variable que incrementa las agresiones en las favelas, de cómo las comunidades zapatistas se ven atosigadas por paramilitares y el ejército. Nos cuenta de las huelgas de hambre de las presas y los presos mapuches, de la represión. De las depresiones, el aumento del consumo de drogas duras en las grandes ciudades. De la violencia estructural. ¿Leer eso evita el desaliento? No. ¡Claro que no! Leer eso provoca la rabia justa para reconectar con las ganas de luchar, de juntarse y plantar cara.

Las palabras de este libro nos hablan también de los sueños de las otras, de cómo rompen el cerco que les impone el Estado. La nación Wampi, en Perú, se

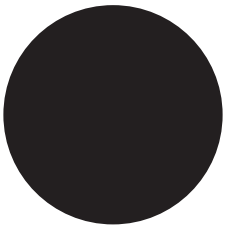
declara autónoma y defiende su territorio. En Uruguay, el Mercado Popular de Subsistencia autogestiona los suministros de muchísimas personas y no deja de crecer. En Brasil, se organiza una red de pueblos, A Teia dos Povos, que recupera la tradición histórica de resistencia desde abajo. Bolivia afronta cambios esperanzadores, después del gobierno golpista. En Argentina se producen ocupaciones colectivas de tierras en las ciudades y sus inmediaciones. La gente se organiza, resiste, y crea. Leer eso sí que combate el desaliento. Nos presenta horizontes posibles, porque ya están sucediendo.

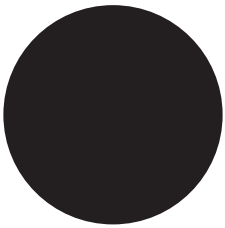
Los textos de Raúl Zibechi, de Tamara San Miguel y Eduardo J. Almeida siembran mucho debate, porque recogen debates y palabras de muchas otras personas, personas que están generando discurso mediante la práctica. Son debates profundos, que interpelan. La esclarecedora diferencia entre estallido y levantamiento, por ejemplo. O la diferencia entre soberanía y autonomía alimentaria. La tercera parte del libro plantea cuestiones de esas que apetece discutir durante horas, con los oídos y el corazón bien abiertos. ¿Para cuándo una escuela o unas jornadas de movimientos sobre estos temas?

Este es un libro necesario, que combate el desaliento. Nos anima a la acción reflexiva y comunitaria. Las propuestas que expone son siempre colectivas. No habla de líderes, ni de cabecillas. Habla de comunidades, de barrios, de redes, de pueblos. A ver si tomamos nota de esto por estas latitudes.

Así que, en este momento de alejamiento físico, la palabra escrita es un abrazo. Este libro es un abrazo. Y siempre da gusto abrazar a Zibechi y a las gentes de Baladre.

Berta Iglesias Varela
Ecologistas en Acción





INTRODUCCIÓN

Raúl Zibechi

> *Es tiempo de nuevo para que bailen los corazones, y que no sean ni su música ni sus pasos, los del lamento y la resignación.*
>
> Subcomandante Insurgente Moisés

En un reflejo primario elemental, los movimientos y los pueblos enfrentaron la pandemia con un giro interior, volcándose hacia sus territorios y espacios, tanteando la nueva situación, buscando seguridad en los pliegues más profundos de las relaciones cotidianas, convertidas en refugios ante las incertidumbres. Ese impulso primario a protegerse del afuera, garantizando la alimentación de cuerpos y espíritus, a través de la intensificación de los cultivos y de la ritualidad circular de las asambleas junto a lagunas y sitios sagrados, sucedió aproximadamente entre marzo y julio, y lo he recopilado en el libro *Tiempos de Colapso. Los pueblos en movimiento*.

El momento del repliegue fue importante para salvaguardar la salud colectiva y comunitaria, evitar contagios masivos en los territorios de los pueblos y fortalecer las autoridades propias. Las guardias de autodefensa comunitaria jugaron un papel decisivo, ya sea en áreas rurales como urbanas, destacando entre éstas los controles realizados en ciudades como Cherán y en espacios como la Comunidad Acapatzingo en Iztapalapa, en Ciudad de México.

Si no lo hubieran hecho así, sobreponiéndose a la violencia estatal y paraestatal, especialmente mortífera en regiones de mayorías indígenas, negras, campesinas y en las periferias urbanas, hubieran sufrido una severa desestabilización interna. Esa fue la condición para acotar daños y el paso previo a retomar la iniciativa hacia afuera.

Con el paso de los meses consiguieron estabilizar la situación, mejoraron la alimentación y las relaciones entre sus miembros, ganaron en calidad. Comenzaron a conocer los modos de lidiar con los más diversos virus, desde los invisibles microparásitos (como el Covid-19) hasta los terribles y temibles macroparásitos (policías, militares y paramilitares). Entendieron que existe

un vínculo entre ambos, como nos enseñara William McNeill en sus dos obras maravillosas, *Pueblos y plagas* y *La búsqueda del poder*.

En la primera indaga sobre las enfermedades epidémicas y el papel que tuvieron en el devenir de civilizaciones y pueblos, destacando que "las vidas humanas están atrapadas en un precario equilibrio entre el microparasitimso de organismos que producen enfermedades y el macroparasitismo de los depredadores mayores, entre los cuales han sido importantes los seres humanos" (McNeill, 1984:5). Entre éstos, anota el papel de la conquista como empresa militar y política. Llega a una conclusión asombrosa, pero acertada: "Las primeras civilizaciones fueron construidas sobre la posibilidad de arrebatar sólo una parte de las cosechas a las comunidades sometidas, dejando lo suficiente para que la comunidad despojada sobreviviera indefinidamente, años tras año" (ídem:6).

En su segunda obra, McNeill voltea su interés hacia el macroparasitismo, "hombres que, al especializarse en la violencia, se muestran capaces de asegurarse la vida sin tener que producir por sí mismos el alimento y otros géneros que consumen" (McNeill, 1988:VII). Pero la obra tiene su máximo interés en los vínculos y mestizajes que introduce entre micro y macro parásitos. En su opinión, las alteraciones en el armamento "se parecen a mutaciones genéticas de microorganismos en el sentido de que pueden, cada tanto, abrir nuevas zonas geográficas de explotación, o destruir antiguos límites mediante el ejercicio de la fuerza dentro de la propia sociedad que los cobija" (ídem.).

Si en el lugar del armamento colocamos los dispositivos de dominación ("la pandemia como política", en palabras de Agamben), podemos comprender cómo los virus han permitido el despliegue de formas viejas y nuevas de control de las poblaciones para consolidar y ampliar la dominación del 1% más rico. Aquí se yuxtaponen los hombres armados y las redes digitales, la fuerza bruta del "palo y tente tieso" y los flujos instantáneos de información y datos centralizados por grandes empresas de las comunicaciones.

Comprender las formas de dominación desplegadas durante la pandemia seguirá siendo un esfuerzo de todas las que deseamos traspasar y neutralizar las múltiples mallas del "capitalismo de control", pero requerirá de tiempo y sobre todo de palpar los muros virtuales y reales que nos inmovilizan. En algún momento deberemos comprender la importancia de los pequeños grupos

y del cuerpo, en el sentido que da Miguel Benasayag a la experiencia directa. Como consecuencia de la digitalización (a la que considera la tercera revolución antropológica), el 95% del conocimiento que tenemos sobre el mundo y sobre nosotros mismos se vuelve indirecto, pero este conocimiento desterritorializado no se suma al conocimiento del cuerpo, lo reemplaza y lo cancela, porque "aleja al hombre del mundo y de su poder de actuar" (Benasayag, 2015).

Pese a todas las dificultades que los pueblos y los movimientos afrontamos en estos tiempos, parece evidente que la salida masiva de sus espacios, ordenada y resuelta, ha sido la condición que nos ha permitido sostenernos como sujetos y sujetas colectivas para continuar desafiando la dominación. Como señalo en uno de los últimos apartados, los estallidos de rabia por justificados que estén, no pueden ser el camino para superar esta situación. Por el contrario, pueden reforzar el ya importante respaldo social de las ultraderechas. Luego del estallido, finalmente una explosión social violenta e intempestiva, retorna la calma, luego de que los furiosos hayan sido diezmados por cuerpos represivos dispuestos a romperles los huesos.

- - -

A partir de mediados de 2020 los pueblos y movimientos comenzaron a salir de sus territorios, no sólo físicamente, y esa salida representa el momento de la ruptura del cerco mediático y militar que pendía sobre sus comunidades. Es un momento importante, necesario para seguir existiendo, pero riesgoso ya que un mal paso puede tener consecuencias nefastas y forzarnos a reemprender la marcha en peores condiciones. Sin embargo, son riesgos necesarios para quienes queremos terminar con el capitalismo.

Creo que la ruptura del cerco no es ni puede ser un hecho definitivo, sino un proceso extenso en el tiempo que supone varios desafíos. El primero, es afrontar las reacciones inevitables de quienes se vieron desbordados, que continuarán su acoso y persecución en nuevas condiciones. El segundo, es qué caminos tomar una vez traspasados los cercos, hacia dónde caminar, qué construir en los nuevos espacios. La experiencia histórica nos dice que estos procesos de ruptura del cerco pueden ser un parteaguas para las fuerzas del cambio, porque

pueden desplegar sus iniciativas en condiciones más favorables. Pero pueden, también, caer en nuevos cercos, no tanto militares como políticos. La cooptación de las fuerzas rebeldes es una de las más conocidas, que la podemos interpretar como meter en una jaula inmaterial a quienes habían conquistado su libertad.

Dos ejemplos me vienen a la mente. Uno es la conocida Larga Marcha de los comunistas chinos, cuando el cerco del ejército nacionalista estaba agotando sus resistencias. Durante un año recorrieron 12 mil kilómetros desde el centro del país hasta el norte remoto y casi despoblado. La retirada fue un éxito que logró salvar apenas al 10% de los combatientes del ejército rojo que se pusieron en marcha, porque la fuerza política consiguió sobrevivir y en su interior se produjeron cambios de orientación que permitieron un crecimiento notable. La larga retirada fue el precio de romper el cerco, pero esto les permitió a la larga ganar la guerra contra Japón y contra los derechistas chinos. Después de este notable éxito, comenzarían otros desafíos, mucho más complejos aún, que pueden sintetizarse en un capitalismo de Estado autoritario y patriarcal.

El segundo ejemplo es el feminismo. En la década de 1960, las feministas eran apenas un puñado en todo el mundo. Fueron acosadas por la iglesia católica y por las derechas, por sus propias familias y por la mayoría de la sociedad. Fueron ignoradas por las izquierdas políticas y sociales, se las acusaba de dividir a la clase trabajadora y en algunas ocasiones fueron expulsadas de sus organizaciones. Decirse feminista en aquellos años era estar condenada a sufrir un cerco social, cultural y político. Ni qué hablar de quienes se reivindicaban gais o mostraban opciones sexuales diferentes. Sin embargo, persistieron, realizaron miles de talleres, de reuniones y encuentros. En cierto momento, el aislamiento comenzó a ceder y en los últimos años, por lo menos en América Latina, millones de mujeres se nombran feministas, salen a las calles, realizan huelgas de mujeres y un sinfín de actividades que muestran que salieron del cerco (o del armario). Los riesgos ahora son distintos. Quizá el principal es la división del movimiento y la cooptación de una parte importante por partidos y Estados, con el objetivo de restaurar la dominación patriarcal-capitalista, aunque ahora con más apoyos y legitimidad.

Sin pretender agotar todas y cada una de las iniciativas que están rompiendo el cerco, me parece importante destacar las acciones del pueblo mapuche en el sur de Chile, de los pueblos originarios, negro y campesino del Cauca en Colombia, del

zapatismo en Chiapas y hacia el mundo, además de importantes movilizaciones en Perú, Chile, Bolivia y Guatemala.

En el mes de julio la huelga de hambre de 27 presos mapuche sacudió a las comunidades del sur de Chile que comenzaron una oleada de movilizaciones en apoyo a los detenidos en las cárceles de Temuco, Lebu y Angol. Los huelguistas demandaban el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT que les permite cumplir la condena en sus comunidades, algo necesario en tiempos de pandemia, que se revise la prisión preventiva y para denunciar las condiciones denigratorias en las cárceles.

En los primeros días de agosto se produjeron masivos bloqueos de carreteras en Bolivia en al menos 70 puntos, por la postergación de las elecciones por el gobierno golpista de Jeannine Añez. Los bloqueos fueron levantados cuando el gobierno aceptó celebrar elecciones el 18 de octubre, que ganó ampliamente el MAS con más del 55% de los votos, superando con holgura el cuestionado resultado de un año atrás. La masiva votación que recibió el MAS fue un rechazo a un gobierno de ultraderecha, represivo y privatizador surgido de un golpe para instalar un gobierno anti-popular.

El 30 de setiembre comenzaron manifestaciones en Costa Rica contra un acuerdo con el FMI, que implica aumento de impuestos y una mayor austeridad en el gasto público. Ante la oleada de protestas, el 4 de octubre el gobierno anunció la suspensión de la negociación para abrir un ámbito de diálogo y rever la postura.

El 5 de octubre el EZLN emitió el primer comunicado desde que cerró los caracoles por la pandemia, el 16 marzo de 2020. Informan que en ese lapso fallecieron 12 personas por coronavirus y asumieron la responsabilidad, a diferencia de lo que hacen los gobiernos, y que decidieron "enfrentar la amenaza como comunidad, no como un asunto individual". Apuestan a la movilización global contra el capital e informan que en junio de 2021 comenzarán una primera gira por Europa, que luego extenderán a otros continentes, con una amplia delegación integrada mayoritariamente por mujeres.

La ruptura zapatista del cerco militar, paramilitar y político que le impone el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, está teniendo consecuencias muy

duras para las bases de apoyo. En agosto de 2019, el EZLN había roto el cerco una vez más, con la creación de siete nuevos caracoles (antes sólo había cinco) y enseñando nuevos municipios autónomos que elevaron los centros zapatistas a 42 espacios de resistencia autónoma. En marzo pasado, anunciaron la intención de romper el cerco informativo con el viaje a Europa.

La reacción paramilitar inducida por el gobierno de México y del estado de Chiapas, consiste en atacar a las bases de apoyo del EZLN en la región Moisés Gandhi y en la comunidad Nuevo San Gregorio. Se trata de una guerra de desgaste sumamente cruel que pretende asfixiar y rendir por hambre a las comunidades y regiones más jóvenes, cercando fuentes de agua, tierras de pastoreo y centros de salud y educación (Zibechi, 2021). Rompieron el cerco, pero no llegaron a ningún paraíso sino que la resistencia se debe intensificar para afrontar los nuevos desafíos.

A fines de octubre de 2020 en Colombia se realizó la *Minga Indígena*, *Negra* y *Campesina*, que arrancó en el suroccidente, recorrió varias ciudades y pueblos para llegar ocho días después a Bogotá. En todo su recorrido, la *minga* (trabajo comunitario o tequio) dialogó con poblaciones que comparten sus mismos dolores, en un país que se desangra por la violencia narco-militar-paramilitar, con cientos de líderes sociales asesinados.

El núcleo de la resistencia colombiana son los pueblos originarios del Cauca, agrupados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), fundado en 1971 en el marco de una vasta lucha por la recuperación de tierras, que se saldó con la expropiación y dispersión de los grandes terratenientes. El pueblo nasa con sus "proyectos de vida", lanzados en la década de 1990, es uno de los mejor organizado de Colombia.

La Minga hacia Bogotá, en la que participaron ocho mil miembros de pueblos originarios, negros y campesinos, fue escoltada por la Guardia Indígena, la Guardia Cimarrona y la Guardia Campesina, con especial protagonismo de las mujeres y los jóvenes. Fue recibida y acompañada por miles de personas que vienen luchando contra la represión de cuerpos militarizados, contra los que se levantaron en las jornadas memorables del 9 al 11 de setiembre, en las que ardieron o fueron vandalizadas decenas de dependencias policiales.

En Colombia ya hay más de 70 mil guardias de autodefensa de los pueblos. Cada pueblo cuenta con sus propios territorios: palenques (quilombos) negros y zonas de reserva campesina se suman a los resguardos indígenas, conformando un tapiz multicolor de resistencias y dignidades.

El 18 de octubre, a un año del inicio de la revuelta social de 2019, miles de chilenos volvieron a las calles de Chile en conmemoración de aquella protesta. Ese día hubo 580 detenidos y un muerto tras la represión de Carabineros.

El 25 de octubre el pueblo chileno desbordó las urnas en el referendo para redactar una nueva Constitución que sustituya a la heredada por la dictadura militar de Pinochet. El 80% de los votantes aprobaron el inicio de un proceso constituyente, cuando se esperaba un resultado de un 60% a favor de la iniciativa. La movilización popular por el referendo es una clara continuación de la revuelta iniciada en octubre de 2019 que le cambió la cara al país, deslegitimando la política oficialista neoliberal y represiva.

Finalmente, en Perú se produjo una notable movilización popular a raíz de la destitución ilegítima del presidente Martín Vizcarra, instalando en su lugar un gobierno corrupto considerado golpista por la población, ya que la mayoría absoluta de los parlamentarios tienen acusaciones de corrupción. Una semana de gigantescas manifestaciones, que representan "un antes y un después, un punto de inflexión" en la política peruana, como señaló el antropólogo Rodrigo Montoya (Montoya, 2020), forzó al gobierno golpista a abandonar la presidencia abriendo una coyuntura inédita en el país.

- - -

La masiva respuesta de los pueblos, es el único modo de impedir que el capital mafioso y los Estados puedan diseñar la coyuntura de la pandemia a su medida. Por eso transitaremos durante un tiempo por la cornisa de la ingobernabilidad, de la que pueden sacar partido las derechas más autoritarias o los movimientos anticapitalistas, si se muestran capaces de evitar errores que han neutralizado su capacidad de transformación.

Mientras redacto esta introducción, se está produciendo una pulseada difícil en Ecuador para los pueblos originarios, las mujeres y los jóvenes de las ciudades y las áreas rurales, a raíz de las elecciones presidenciales. En Chile, salvando las distancias, se registra una situación similar ante la convocatoria de la Asamblea Constituyente.

En Ecuador, los movimientos se decantaron por el apoyo a la candidatura del movimiento Pachakutik que llevaba a Yaku Pérez como candidato a la presidencia, quien finalmente no pudo pasar a la segunda vuelta por un puñado de votos pero cosechó el mayor apoyo para un candidato indígena, superando el 40% en las provincias de la selva y en la mayoría de las de la sierra. Sin embargo, el parlamento indígena y de los movimientos sociales ya no está funcionando y en el corto plazo no se prevé que vuelva a reunirse.

En Chile, buena parte de la energía social colectiva se ha volcado en candidaturas alternativas y de base para elegir a los miembros que redactarán la Constitución pos pinochetista. Estos meses las asambleas territoriales que habían nacido durante la revuelta, languidecen, se han volcado en apoyo de algún candidato de base o se dispersaron.

Lo común en ambos casos, es que las organizaciones que se habían puesto en pie durante la revuelta chilena y el levantamiento ecuatoriano, casi simultáneas en el tiempo, se han disuelto durante las campañas electorales. A mi modo de ver, esto es un retroceso importante. La potencia de los sujetos colectivos no debe desvanecerse, porque es la base material y espiritual de su existencia. Si se quiere participar en elecciones, del tipo que sean, eso no puede ser excusa para disolver la organización territorial y social, porque entramos en una etapa de enorme debilidad.

El levantamiento de octubre en Ecuador alcanzó para revertir el paquete neoliberal, pero fue insuficiente para deslegitimar el neoliberalismo. La continuidad de aquel movimiento no puede buscarse en las elecciones, ni en las pasadas, ni en las futuras. El propio levantamiento marcó el rumbo: su principal creación fue el Parlamento Indígena y de los Movimientos Sociales, donde convergieron más de 180 organizaciones.

"Una Minga por la Vida" fue el programa elaborado por el Parlamento, que recorrió parte del país promoviendo el programa alternativo que elaboraron sus

integrantes, agrupando movimientos locales y generando debates. Comenzó a recorrer un camino, lento y trabajoso, necesario para organizar a las y los de abajo hasta que la campaña mediático-electoral desplazó los problemas centrales del Ecuador.

El futuro no va a emerger de las urnas sino de la capacidad de los movimientos y de los pueblos de seguir transitando por las brechas abiertas por el levantamiento, profundizarlas hasta neutralizar un modelo de muerte, de expropiación del agua y la tierra. No hay argumentos válidos para dejar de sostener las creaciones colectivas.

En general, en el continente podemos observar que el capital y el extractivismo han seguido avanzando durante la pandemia, con más despojo, apropiación de tierras, aguas y bienes comunes. Ellos no se detienen y aprovechan la pandemia para seguir acumulando riqueza. Por eso, desorganizarse es tanto como dejarles el camino despejado. Es un problema de cultura política. Aunque los movimientos feministas y antipatriarcales han mostrado enorme energía, consiguiendo la aprobación de la ley que despenaliza el aborto en Argentina, y los movimientos indígenas y anticoloniales muestran siempre su disposición a resistir el modelo en curso, cada vez que se convocan elecciones las miradas se vuelven una y otra vez a las urnas.

Es cierto que la credibilidad en las instituciones y en el camino electoral se están debilitando. Pero ante las dificultades, sectores importantes de los pueblos vuelven una y otra vez a lo conocido: los caudillos, las instituciones, el Estado. Algo ha cambiado, empero. Quienes estamos para construir desde abajo, no para llegar arriba sino para construir abajo, somos minoría pero ya **no somos marginales**. Este es un cambio fundamental que nos anima a pesar de las enormes dificultades.

- - -

Este trabajo tiene tres partes. La primera está dedicada a las nuevas formas de dominación. Entre los artículos destaca el trabajo de Tamara San Martín y Eduardo Almeida, dos compañeros de Puebla que analizan lo que llaman

triage social, que interpreto como el nuevo panóptico de control de masas. La segunda parte está dedicada a los pueblos que han comenzado a romper el cerco en América Latina, con artículos que han aparecido en diversos medios y algunos inéditos. En la tercera esbozo algunas tendencias en los movimientos actuales y a la vez registro algunas dificultades notables que debemos superar para seguir siendo y creciendo. Todos los artículos, salvo el mencionado arriba, son de mi autoría y cuando no figura lugar de publicación es porque son inéditos.

Agradezco a las compas de Baladre, de Desdeabajo, bajo Tierra y Quimantú, por el esfuerzo de publicar esta segunda parte de *Tiempos de Colapso* que, espero, pueda servir para seguir profundizando debates y tejiendo redes de resistencia por un mundo nuevo y diferente. Y agradezco sobre todo la disposición y confianza de las organizaciones y movimientos que aparecen en este trabajo, por seguir adelante pese a todo y por confiarme tiempos y relatos que enriquecen estas páginas.

Montevideo, marzo de 2021

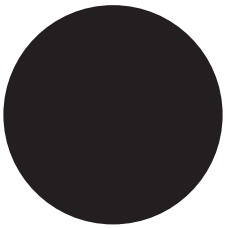
TEXTOS CITADOS:

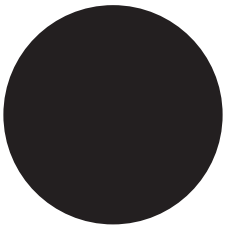
Benasayag, Miguel (2015) *El cerebro aumentado, el hombre disminuido*, Buenos Aires, Paidós.

McNeill, William (1988) La búsqueda del poder, México, Siglo XXI.

Montoya, Rodrigo (2020) "La calle: por ahí pasan la esperanza y el futuro", *Servindi,* 15 de noviembre en https://www.servindi.org/15/11/2020/la-calle-por-ahi-pasan-la-esperanza-y-el-futuro (consulta, 22/02/2021).

Zibechi, Raúl (2021) "Guerra de desgaste contra las comunidades zapatistas", *El Salto*, 5 de febrero en https://www.elsaltodiario.com/mexico/guerra-de-desgaste-contra-las-comunidades-zapatistas (consulta 23/02/2021).





PRIMERA PARTE
Las nuevas formas de dominación

1
El otoño del imperio

La Jornada, 6 de noviembre de 2020

En períodos de honda confusión como el que vivimos, agudizada por un tsunami de informaciones que nubla la comprensión, conviene fijar la atención en aquellos datos que no dependen de los antojos del momento y encarnan tendencias profundas. No deberíamos limitarnos a los datos económicos, que tienen un peso considerable pero no definitorio.

Quiero desplegar algunos elementos para llegar a la conclusión de que la decadencia imperial es inevitable, más allá de quien esté al frente de la Casa Blanca. Trump o Biden pueden acelerar o enlentecer dicha decadencia, pero en modo alguno pueden evitarla. Del mismo modo, el ascenso de China y de Asia-Pacífico no dependen de factores de coyuntura, aunque no vislumbro una hegemonía china sino un mundo multipolar.

La tendencia primordial es la que denomino el "factor humano", el estado de la población. La china es una sociedad floreciente, la población se ha visto beneficiada por el desarrollo, ha mejorado su nivel de vida y todo

indica que seguirá haciéndolo. Los habitantes de Estados Unidos están divididos, una mitad odia a la otra mitad, una porción están enfermos y dependen del consumo de drogas legales.

China ha creado el mayor sistema de seguridad social del mundo, con un seguro médico básico que cubre a 1.300 millones de personas, en tanto el seguro de pensiones cubre a casi 1.000 millones. El sistema de salud en Estados Unidos no alcanza al conjunto de la población, es caro e inasequible para la mitad de menores ingresos.

En medio siglo, la mitad de "abajo" de la población estadounidense se empobreció. Pasó de un ingreso anual de 19.640 dólares en 1970 a 27.642 en 2018, un 42% más, pero por debajo de la inflación. Un dólar de 1970 equivale a 6,82 dólares de 2020.

En el extremo opuesto, el 0,1% multiplicó por cinco sus ingresos, mientras la clase media retrocedió en menor medida, según un estudio ofcial (*The Washington Post*, 9 de diciembre de 2019). Una polarización imposible de sostener. Una sociedad desquiciada, a la deriva, desprotegida, que toma las armas para defenderse.

La esperanza de vida en China es de 76,7 años, pero era de 43 en 1960. En Estados Unidos es de 78,5 años, pero está estancada desde 2010 y desciende levemente desde 2012, caso único entre los países desarrollados. Estados Unidos se coloca en el lugar 37° en el ranking mundial de esperanza de vida al nacer, por debajo de la mayoría de los países europeos y detrás de Chile, Cuba y Costa Rica.

En Estados Unidos las muertes por sobredosis de heroína se multiplicaron por cuatro desde 2002. Mientras en la década de 1960 la adicción era elevada en los guetos negros pobres, ahora los nuevos consumidores son en su inmensa mayoría blancos, según la Escuela de Medicina Boonshoft en Ohio (*El País*, 30 de abril de 2016).

Medio millón de personas de entre 45 y 54 años murieron por cirrosis, suicidios, alcohol y drogas, una situación inédita que nunca había afectado a grupos demográficos en países desarrollados, con la excepción de la

epidemia de sida, afirma un estudio de la Universidad de Princeton (*The New York Times*, 2 de noviembre de 2015.

El consumo de drogas duras se ha disparado entre las clases medias, con fuerte incidencia en las ciudades industriales en decadencia por el traslado de la industria a China, Asia y Centroamérica. Mientras el peso del sector financiero en el PIB se duplicó desde fines de los 90, la mitad de la población de 25 años vive con sus padres porque no pueden independizarse, frente a un 25% en 1999.

Los imperios colapsan por dentro y la población es el dato más importante, aunque a menudo se la desconsidera por sobreestimar la economía que, creen no pocos economistas, consiste apenas en una suma de números y estadísticas, olvidando que son las personas las que producen, consumen, gozan y sufren en los inevitables ciclos de la vida material.

Fernand Braudel dijo que "los acontecimientos son polvo", porque estaba convencido que la corta duración es el más caprichoso de todos los tiempos, que debemos dar prioridad al tiempo largo y a las continuidades, para mejor comprender los virajes. El aserto vale para evaluar los resultados electorales en Estados Unidos.

Más importante que el nombre del vencedor, es que en siete meses se han vendido 19 millones de armas, un 91% más que en el mismo periodo de 2019, y que días antes de la votación muchos comercios se protegieron con vallas por miedo a la violencia poselectoral.

El Instituto de Política Económica de Estados Unidos, asegura que las retribuciones de los CEO de las 350 principales empresas, son hoy 320 veces superiores al salario medio de un trabajador, mientras en 1989 la diferencia de ingresos era de 61 a 1. La brecha salarial creció cinco veces en dos generaciones.

Hasta la desigualdad tiene límites. A partir de cierto umbral, como debimos aprender de la historia, se convierte en una bomba de relojería.

2

Pandemia y quiebre de la democracia en América Latina

Gara, 2 de agosto de 2020

La calidad de la democracia en América Latina, salvo excepciones, siempre estuvo cuestionada. Los Estados-nación creados con las independencias mantuvieron el colonialismo interno y lo que el sociólogo peruano Aníbal Quijano denominó "colonialidad del poder". Que puede resumirse en que las repúblicas criollas dieron continuidad a las opresiones sobre pueblos y personas no blancas.

Ese sector, minoritario en la mayoría de las nuevas naciones, se reservó la propiedad de las mejores tierras, los cargos de poder en aparatos estatales destinados a conservar los privilegios, en alianza con la iglesia y las fuerzas armadas. Las oligarquías que sucedieron a la dominación española y portuguesa, agravaron incluso la situación de los pueblos originarios y negros, pero también de la amplia camada de mestizos.

A grandes rasgos, los blancos conforman las elites, los mestizos la clase media y los indígenas y negros los sectores populares. La estructura social del continente superpone clase social con color de piel, con la relativa excepción de Argentina y Uruguay.

En los países andinos, el monopolio de la representación parlamentaria perteneció hasta poco tiempo atrás a la casta blanca, así como el aparato de justicia, los grandes medios de comunicación y las burocracias estatales. En uno de los países más "democráticos" del continente, Uruguay, la minoría negra (10%) está casi ausente entre las profesiones mejor pagas, entre los parlamentarios y jueces, pero sobre-representada entre las empleadas domésticas, los obreros de la construcción y en las periferias urbanas.

Las democracias fueron apenas un ejercicio electoral que no consiguió democratizar las sociedades, menos aún en países de mayorías negras

como Brasil, donde la esclavitud se terminó recién a fines del siglo XIX, dando paso a un *apartheid* que continúa hasta hoy.

Las libertades democráticas fueron conseguidas gracias a la presión de las clases trabajadoras organizadas en sindicatos y partidos de izquierda, pero fueron brutalmente suprimidas y menoscabadas por golpes de Estado y masacres en todos los países, sin excepción.

En estos momentos vivimos un agudo retroceso de las democracias, similar al que sufrimos en las décadas de 1960 y 1970, aunque con características diferentes.

Los golpes de Estado tradicionales no son ya la norma. El último de estos golpes, el de Bolivia en 2019, es el más similar a los de viejo estilo. Pero en la mayoría de los países asistimos a una regresión democrática por la vía electoral y por la llegada al poder de personajes de la ultraderecha, digamos, de manera legal pero ilegítima.Hay cuatro procesos que están erosionando las frágiles democracias regionales.

El primero es la militarización y el aumento de la represión. El Foro Social Brasileño de Seguridad Pública señala que en abril pasado se registró un 53% de aumento en abusos policiales y militares, en comparación con el mismo mes de 2019, con 381 muertos en un mes. La institución asegura que una de las causas de esta violencia es la militarización de la policía con la lógica de "la eliminación de los enemigos de la sociedad" (*UOL*, 2 de julio de 2020).

En Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cercano al gobierno de Alberto Fernández, asegura que desde el inicio de la cuarentena, "en distintos lugares del país las policías provinciales y las fuerzas federales reiteraron prácticas violentas, algunas graves como torturas y ejecuciones. También ocurrieron muertes de detenidas en comisarías y la desaparición de una persona que fue hallada asesinada" (*CELS*, 25 de junio de 2020).

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) denuncia "golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y hasta

desaparición forzada" desde la instalación de la cuarentena en marzo. "El incremento de las detenciones, se traduce en un aumento de las denuncias por imposición de tormentos en comisarías y también se refleja en una mayor cantidad de personas muertas en dependencias policiales", con 23 casos de muertes en lugares de detención, de los cuales ocho corresponden a comisarías y 15 a cárceles de todo el país.

En Colombia la ola de violencia contra líderes sociales y ex combatientes de las FARC desmovilizados viene creciendo de forma exponencial. Indepaz presentó un informe en el que asegura que durante el confinamiento por la pandemia se han registrado 82 homicidios. Desde que se firmo la paz, en noviembre de 2016, son 971 los indígenas, campesinos, afro, sindicalistas, mujeres y ambientalistas asesinados.

La segunda cuestión es que en los gobiernos empiezan a ocupar cargos relevantes personas de la ultraderecha o vinculadas a las dictaduras. En la cuarta reestructuración de su gabinete, el presidente Sebastián Piñera entregó el gobierno a la derecha pinochetista. El ministerio del Interior recayó en un ex alcalde de la dictadura de Pinochet, Víctor Pérez, que en su primera alocución amenazó con "mano dura" contra los manifestantes y el pueblo mapuche.

La situación de Brasil es la más elocuente. En el gobierno de Bolsonaro hay 2.897 militares, un número superior al que los uniformados tuvieron en cargos oficiales durante toda la dictadura militar como señalan los profesores José Luís Fiori e William Nozaki en la página *A Terra e Redonda* (14 de marzo de 2020).

El tercer tema es el crecimiento de la desigualdad durante la pandemia, en el continente más desigual del mundo. En Brasil hay 49 millones de personas en la informalidad y 50 millones bajo la línea de pobreza, en un país de 210 millones de habitantes. De los 12 millones de desempleados, sólo 500 mil reciben seguro de desempleo.

Estas tres tendencias son estructurales: no dependen de quién o quienes ocupen los gobiernos, aunque deben establecerse matices.

Por último, la división de las izquierdas agudiza la crisis de las democracias. Este vacío lo están aprovechando las clases dominantes, las iglesias evangélicas y los aparatos represivos para imponer una dominación sin límites sobre los sectores populares.

3

Alimentación y pandemia: Diálogo con Silvia Ribeiro

Fue militante de la mítica Comunidad del Sur en Uruguay, un colectivo libertario que, adelantado a su tiempo, estaba construyendo desde la década de 1960 relaciones sociales no capitalistas ancladas en el doble hermanamiento entre las personas y la madre tierra. Durante la dictadura se exilió en Suecia y al retorno fue una de las creadoras de la organización ambientalista Amigos de la Tierra. Actualmente reside en México.

Silvia Ribeiro es directora para América Latina del Grupo ETC (dedicado a la conservación y promoción de la diversidad cultural y ecológica y los derechos humanos, a "monitorear tecnologías" y "vigilar al poder"). Es periodista y activista en defensa social y ambiental, e integra el comité editorial de la revista latinoamericana "Biodiversidad, sustento y culturas", editada por Alianza Biodiversidad en la que participan entre otros colectivos La Vía Campesina.

Una de las inspiraciones teóricas de Silvia se llama Mike Davis, urbanista estadounidense que hace una década publicó *El Monstruo ya está aquí*, un libro sobre la pandemia, los sistemas sanitarios y las desigualdades provocadas por el capitalismo. Hace una década ya aseguraba que viviremos una época de pandemias múltiples y que el sistema actual difícilmente pueda atajarlas.

Reproduzco fragmentos de una extensa conversación, en su Montevideo natal, en uno de los bares icónicos de la capital uruguaya. Sus artículos se pueden encontrar en las páginas de las publicaciones mexicanas *La Jornada* y *Desinformémonos*.

Integras colectivos que aseguran que existe una guerra contra el campesinado. ¿Se puede decir que es una guerra estructural, que el sistema no puede sobrevivir sin atacar al campesinado?

El 70% de la población del planeta basa su alimentación en los productos de la agricultura campesina, pescadores, pastores, cazadores, recolectores y agricultores urbanos, que tienen menos del 25% de los recursos de tierra y agua y consumen menos del 10% de los combustibles. Por el contrario, la agricultura industrial que abastece sólo al 30% de la población, utiliza el 70% de los recursos. Produce una gran cantidad pero desperdicia otra enorme cantidad y lo peor es que no son alimentos sino basura, comida industrializada que enferma.

¿Cómo se vincula el paramilitarismo en Colombia, en México, con esta guerra contra los campesinos?

La industria agroalimentaria para seguir creciendo debe apropiarse de las tierras campesinas e indígenas y muchas veces lo hace por la fuerza. Pero a eso se le suman todos los demás proyectos que también necesitan expandirse, como la minería, la forestación y las grandes obras de infraestructura. Entonces todos aquellos que hoy tienen territorio están siendo presionados porque tienen tierra o simplemente porque viven sobre recursos que la industria necesita.

Esa guerra está alimentada con la creencia de que la agricultura industrial es más efectiva, cosa que no es cierta. Nosotros demostramos que por cada peso que se paga a la cadena industrial, la sociedad paga dos pesos más en daños ambientales y de salud.

¿Podemos relacionar la agricultura industrial con la pandemia?

La principal causa de deforestación es el avance de la frontera agrícola-ganadera que en Brasil provoca el 80% de la deforestación, aunque el promedio global es del 70%. Pero lo grave es que la mayor parte de la deforestación es para producir pasturas o forraje para la cría industrial,

soja y maíz transgénico principalmente. Con eso se relaciona la pandemia: deforestación y grandes criaderos.

Por otro lado, la agropecuaria industrial tiene un gasto de energía demencial, en petróleo, transportes y en agrotóxicos. Del total de la energía que se utiliza para criar un cerdo, cuando te lo comes sólo estás consumiendo el 10%. El consumo de carne industrial es el que tiene la mayor huella ecológica, territorial e hídrica.

Me gustaría profundizar las relaciones entre el sistema alimentario y las pandemias.

Hay que ubicar un par de cuestiones. Un tema es la ocupación territorial como vimos recién. Pero el otro tema es comprender de qué muere la gente en el mundo. El 72% de las causas de muerte son por enfermedades no transmisibles. Cinco de las diez enfermedades por las que muere la gente están directamente vinculadas al sistema alimentario agroindustrial: diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, cánceres de colon, hígado, estómago y riñón, y las enfermedades respiratorias, porque no olvidemos que en el campo mucha gente muere por los agrotóxicos.

Además hay una epidemia global de obesidad, que no se la considera causa de muerte pero está asociada al colesterol y la hipertensión, y es un agravante de todas las dolencias mencionadas. Lo que está sucediendo es que lo que comemos ha debilitado los sistemas inmunológicos humanos. Esto lo sabe perfectamente la Organización Mundial de la Salud, ya que esto existía antes de la pandemia pero es el contexto, el ambiente en el que aterriza la pandemia.

Por desgracia no son temas de debate en los medios, pese a su gravedad. Creo que habría que aportar datos, si existieran, del período anterior al de la alimentación colonizada por la industria agropecuaria.

Hace cien años, a principios del siglo XX, sólo el 5% de la población tenía algún tipo de alergias. Actualmente más del 70% de la población

mundial tiene alguna alergia y la cifra va creciendo. Las alergias –que se han multiplicado y aparecieron algunas nuevas como intolerancias a ciertos alimentos-, son el síndrome del debilitamiento inmunológico de los seres humanos. Por otro lado, hay un crecimiento enorme de las enfermedades autoinmunes, relacionadas con el sistema inmunológico. A todos estos elementos, hay que sumar la creciente resistencia a los antibióticos, siendo el principal factor la industria pecuaria.

No existen criaderos de millones de animales sin uso abusivo de antibióticos.

El 80% de todos los antibióticos que se usan en el mundo se aplican en la cría industrial de animales. Pero la inmensa mayoría no se utilizan ante una enfermedad sino para acelerar el engorde o para prevenir las condiciones de hacinamiento de los animales. La Organización Mundial de la Salud hizo un llamado en 2017 a las industrias ganadera, porcina, piscícola y avícola para que dejen de usar antibióticos en animales sanos, precisamente por el aumento de la resistencia que se considera uno de los principales problemas vinculados a la salud, porque aparecen nuevos virus a una velocidad fuera de control.

¿Cómo relacionas el caso de los antibióticos con la pandemia?

Los animales de criadero tienen un sistema inmunológico fuertemente debilitado, porque no se mueven, les dan sólo comida industrial con transgénicos y les suministran antibióticos todo el tiempo. Lo importante es el contexto. Los virus van a seguir existiendo y el coronavirus también. Pero si llega un virus a una granja campesina que tiene cinco vacas, tal vez se le mueran las cinco, pero si llega a una granja con millones de animales la situación es grave, porque tienen una gran uniformidad genética y la expansión es inmediata.

En los criaderos empezó la gripe porcina y la gripe aviar, pero además el sistema alimentario agroindustrial es el principal factor de destrucción de la biodiversidad. Y ahí llegamos al murciélago, que en realidad provenía de

una mina. El virus estaba allí, pero tienen que migrar de su entorno por la deforestación y ahí es donde está el problema. La zoonosis (las infecciones que se trasmiten de animales a humanos) es consecuencia de la destrucción de la biodiversidad, siendo la deforestación su principal causa.

Si te sigo, hay una combinación de deforestación, cría industrial y debilitamiento de la inmunidad, como el cóctel que está entre las causas de fondo de la aparición de la pandemia.

Rob Wallace ha hecho un estudio que recomiendo, que ubica el surgimiento de las pandemias en el último siglo con el avance de la frontera agrícola, los monocultivos, la expulsión de la población del campo a la ciudad y la migración de las especies.

¿Por dónde empezarías a desmotar este sistema?

El problema es que no se están abordando ninguna de las causas de las pandemias. Hay informes interesantes de organismos internacionales sobre la deforestación, sobre los problemas de los grandes criaderos, los antibióticos y muchas de las cosas que venimos hablando, pero ninguno señala que la causa de esto es el extractivismo y el sistema alimentario agroindustrial.

Las pandemias serían mucho menos dañinas si hubiera menos desigualdad y por lo tanto sistemas de salud adecuados y de prevención. Las vacunas son una solución extraordinariamente estrecha, que se enfoca en combatir un virus y nada más. China hasta hace dos años tenía la mitad de la producción global de cerdos. Hicieron un estudio en esos gigantescos criaderos y llegaron a la conclusión, años antes de la pandemia actual, de que ya había 179 nuevos virus de gripe porcina posteriores a la gripe de 2009, y uno sólo de ellos tiene todos los marcadores que indican un potencial pandémico. Después la gripe mató la mitad del plantel de cerdos y por eso ahora decidió criar sus cerdos en otros países, como Argentina. Decidieron que no podían tener ese nivel de vulnerabilidad y por eso se llevan los criaderos al exterior.

4

Daniel Ortega aprovecha la pandemia para recomponer su régimen

Desinformemonos, 10 de junio de 2020

Mónica Baltodano fue comandante guerrillera de la revolución popular sandinista y ministra en la década de 1980. Luego asumió como diputada y durante largo tiempo fue integrante de la dirección nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Sin retórica, explica las razones por la que rompió con el actual presidente: "En 1998 me distancié de Daniel Ortega a partir del pacto de prebendas con el presidente Arnoldo Alemán y actualmente trabajo en la Articulación de Movimientos Sociales. Hemos sido víctimas de represión y durante un tiempo pasamos a la clandestinidad. Seguimos en la lucha porque Nicaragua está sufriendo una dictadura".

¿Cómo están viviendo la pandemia?

El gobierno decidió ignorarla. Llegaron a afirmar que era una enfermedad de los ricos y del imperialismo y no le dieron ninguna importancia. El 18 de marzo se produjo el primer caso y se empezaron a exigir políticas sanitarias para enfrentarla. El gobierno decidió asumir una lógica de contaminación de rebaño que supuestamente adoptaron en Suecia, en unas condiciones claramente diferentes. El gobierno impulsó las actividades masivas, mantuvo las clases, los carnavales, las fiestas y manifestaciones y promovió actividades que concentraran a la población, política que continúa hasta hoy.

Como resultado estamos viviendo una situación muy grave que según los datos del Observatorio Ciudadano tenemos una cifra muertos superior

a todos los países centroamericanos sumados. Es la propia ciudadanía la que está tomando medidas de protección, siguiendo los consejos de grupos de médicos independientes.

El biólogo molecular Jorge Huete asegura en un reciente artículo de Envío que la política del gobierno consistió en no hacer nada, no se cerraron fronteras, no se hizo nada. Las cifras oficiales son de 35 muertos y 760 contagiados sin cifras de tests.

No sólo eso, hay una política de fomentar los contactos directos y de secretismo con los datos que no se corresponde con los estándares de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De modo que con participación ciudadana se han construido estadísticas propias entre médicos, científicos y organizaciones de la sociedad civil. Una carta de 700 médicos más cinco ministros de Salud de diversas administraciones mostraron a la OPS su preocupación sobre el modo como se está tratando la pandemia, pero el gobierno ha mantenido un silencio absoluto. Este secretismo se corresponde con la lógica con la que Ortega ha tratado las estadísticas y la información en los 12 años de su gobierno.

¿Qué cifras de muertos y contagiados manejan?

Son 3.500 contagiados y 805 muertos al 27 de mayo. En toda la región centroamericana se manejaban 600 muertos. Debemos decir que esos muertos son personas que fallecieron con síntomas de coronavirus porque la gente llega al hospital y no le hacen el test. Dicen que aplicaron 5.000 test pero nunca dieron los resultados pese a que la OPS les envío 26.000 pruebas. No se sabe dónde están los focos de contagio y los epidemiólogos dicen que ahora ya no tiene sentido porque la enfermedad está absolutamente regada en todo el país con una elevada circulación comunitaria. La demanda de cuidados intensivos y de respiradores es muy alta y todo el sistema de salud está rebasado. Los privados cobran entre mil y tres mil dólares diarios, que en este país es una barbaridad. La situación es gravísima, empeorada por la crisis económica que se produjo a raíz del estallido popular de abril de 2018.

Según el gobierno de Ortega, Nicaragua cuenta con el "mejor sistema de salud de las Américas" y un exitoso sistema de salud comunitaria.

Es mentira que el sistema de salud sea bueno. Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina después de Haití y nuestro principal producto es la exportación de mano de obra y las remesas son la forma como los sectores populares sobreviven. Es evidente que el país no está preparado para la pandemia y menos para hacerlo como Suecia.

Los médicos dicen que el sistema de salud puede funcionar para algún otro tipo de enfermedades como el dengue y para campañas de vacunas, pero tratándose del Covid, en la medida que se recomienda distancia, cuarentena y equipamiento, esto no funciona. El gobierno dice que han realizado más de 4 millones de visitas a los hogares, algo que nadie les cree. Y las que se realizaron se hicieron sin ningún tipo de protección, para explicarle a las familias las medidas de protección pero sin tapabocas, sin distancia, en una estrategia totalmente equivocada.

La vicepresidenta Rosario Murillo dice que el objetivo de las visitas es "orar y pedir a Dios" y verificar prácticas de protección. Parece una visión poco científica para abordar la pandemia.

Llegó a decir que la pandemia no iba a afectar a Nicaragua porque está bendita por la virgen y sobre esa lógica impulsaron las procesiones religiosas durante semana santa. Cuando la iglesia católica las suspendió, el gobierno las impulsó a través de los gobiernos locales. Tienen una forma de pensar fanática y religiosa que la trasladan a la militancia. En todo caso, lo más terrible es que en medio de la pandemia se sigue reprimiendo, se sigue encarcelando y realizando juicios falsos contra personas que se oponen al gobierno. Han liberado 2.800 presos comunes pero ningún preso político. Ellos usan un discurso a la vez religioso y alguna retórica antimperialista con la que disimulan su falta de acción ante la pandemia.

En abril de 2020 la Universidad Nacional Autónoma despidió a toda la dirección del Centro de Investigaciones de Estudios de la Salud, incluyendo al director, porque habían dado entrevistas denunciando el mal manejo de la pandemia y recientemente a uno de los principales epidemiólogos, el doctor Quant, por ese mismo motivo.

El drama es que en vez de hacer un manejo responsable de la pandemia, dicen que las críticas son parte de un plan golpista que se inició, según ellos, en abril de 2018 con las manifestaciones contra el régimen de Ortega. Todos los cuestionamientos los llevan al terreno de la desestabilización con un lenguaje seudo izquierdista y con ese argumento llegaron a sancionar a médicos y enfermeras por usar tapabocas, porque dicen que infunden miedo. Recién ahora están permitiendo el uso de tapabocas porque el virus está afectando a su propia base social. Estos días murió el alcalde de Masaya, y han muerto incluso diputados oficialistas y ahí tuvieron que ceder y ahora llaman a usar tapabocas cuando hasta hace 15 días había sanciones incluso a personal de salud que se los ponía para atender sus pacientes.

Hay que decir que 38 asociaciones de médicos hicieron un llamado a una cuarentena voluntaria, respaldada por muchas organizaciones sociales, y ahora llamamos a que no vayan a los colegios ni a las universidades ni a los partidos de fútbol y de beisbol, porque todo eso sigue funcionando de forma muy irresponsable.

Llama la atención ese triunfalismo porque Nicaragua ha fracasado a la hora de combatir la epidemia de dengue, ya que todos los años hay casi 200 mil casos desde hace ya muchos años. O sea que la salud de la población ya viene en un situación de creciente debilidad.

En mayo comenzó el período de lluvias, hasta noviembre, cuando proliferan el dengue, la malaria y otras enfermedades endémicas que se juntan con enfermedades respiratorias agudas. Las perspectivas son muy negativas. Desde 2007 no se difunden datos fiables ni en el terreno de la salud ni en la economía, se manipulan los datos sobre muertes a raíz de aborto o de mujeres afectadas por violencia, rechazan el concepto de

feminicidio y siempre enfatizan que tienen el mejor sistema para todos los problemas.

Tú conoces bien a Daniel Ortega, a Rosario Murillo, y al Frente Sandinista. ¿Qué los lleva a impulsar esta actitud que no sólo es irresponsable sino que a mediano plazo parece una política suicida, ya que se les puede volver en contra?

Cuando estalló la pandemia el régimen estaba en una carrera desaforada para tratar de impedir el adelanto de las elecciones y reformas profundas para garantizar elecciones libres, que era resultante de la rebelión de 2018. Ahí apostamos a una salida del régimen a través de la movilización y la lucha callejera, pero al tomar el camino de la represión aplastando la rebelión, ese camino se cerró por ahora.

Pero luego vino la presión internacional y el mantenimiento de la resistencia ciudadana, que impidieron que el régimen impusiera su plan.

No pudieron recomponerse plenamente porque el impacto de la crisis económica es tremendo y vieron en el Covid la posibilidad de recomponer el régimen o desviar la atención. Ahora están asustados por el nivel de incremento de la pandemia y aún no encontraron el modo de enfrentarlo, porque sólo puede hacerse con una política radical de aislamiento y medidas de apoyo a la población con políticas paliativas. La situación nuestra es tan brutal que si organizaciones independientes quieren repartir kits de protección (tapabocas y alcohol) a la población, te capturan como si fueras delincuente porque te consideran parte de un plan de desestabilización. Lo único que puede cambiar esto es una acción concertada de toda la población, porque el régimen tiene una lógica de aplastamiento que lleva a considerar a todos los demás como enemigos.

¿Qué nivel de apoyo popular tiene el régimen?

Alrededor de un 20% según las últimas encuestas, por lo menos es lo que se mantiene desde la rebelión de 2018, la mitad de lo que tenía el

sandinismo cuando perdimos las elecciones en 1990. Es probable que con la pandemia disminuya aún más, sobre todo porque está afectando a su base social.

Buena parte de la izquierda latinoamericana sigue apoyando al régimen. ¿Cómo lo explicas?

Es la izquierda institucional vinculada a los gobiernos progresistas de América del sur o que están en los parlamentos. De todos modos algunos en privado reconocen que este régimen es una dictadura que no tiene nada que ver con los principios de la izquierda.

También es cierto que el gobierno de Estados Unidos está presionando al de Nicaragua, aunque tuvieron muy buenas relaciones hasta 2018. Eso explica que haya un sector que responde a una lógica elemental: todo lo que se opone a Estados Unidos debe ser apoyado. Que se reprima y asesine en nombre de la izquierda genera confusión y sentimientos reaccionarios. Te digo que las políticas de Ortega son muy parecidas a las de Somoza, por lo que va a ser muy difícil poner en pie una izquierda verdadera. Yo creo que lo urgente es salir de la dictadura, pero eso no me lleva a pensar que lo que venga sea extraordinariamente mejor. Después de Ortega vendrá otro régimen de derecha, pero si conseguimos abrir espacios democráticos podremos luchar mejor contra un nuevo régimen neoliberal y extractivista. Las banderas de la izquierda sandinista serán siempre de actualidad.

5

Contrainsurgencia progresista

La Jornada, 12 de febrero de 2021

Las estrategias contra-insurgentes son flexibles, se adaptan a cada tiempo y lugar, a cada sector de la población que deben combatir. Actúan con modos distintos en áreas urbanas y rurales, ante actores armados o pacíficos, despliegan en cada caso los dispositivos adecuados para cada situación.

Las estrategias contra-insurgentes son múltiples, como lo demuestra su acción durante el último siglo en América Latina. Combinan masacres con programas sociales, feroces dictaduras que en cierto momento promueven "aperturas democráticas" que se reducen a convocar elecciones.

La contrainsurgencia moderna tiene un solo objetivo: abatir a las y los diferentes, despojarlos de sus territorios, reconstruirlos para la acumulación salvaje de capital y tener a la población absolutamente controlada. En síntesis, buscan aniquilar cualquier atisbo de autonomía de abajo.

Estamos asistiendo a un despliegue feroz de la contrainsurgencia denominada "guerra de desgaste" en Chiapas, contra la comunidad Nuevo San Gregorio y la región Moisés Gandhi, en total seis comunidades autónomas zapatistas pertenecientes al municipio autónomo Lucio Cabañas del Caracol 10.

Esta guerra decidida bien arriba, se enfrenta a procesos organizativos pacíficos. En estos casos la contrainsurgencia no puede desplegar políticas como la "tierra arrasada" que se implementó en Guatemala contra los pueblos originarios de raíz maya, porque caería en la más completa deslegitimación.

Impedidos, por ahora, de arrasar comunidades a través de un genocidio, ensayan otras estrategias que persiguen exactamente el mismo objetivo, pero de manera lenta, sofocando pueblos para despojarlos y convertir sus bienes comunes en mercancías.

Desde abril de 2019, vienen atacando a las comunidades mencionadas, invadiendo y alambrando las tierras recuperadas por las bases de apoyo zapatistas, robando sus cultivos, materiales de trabajo y tiendas comunitarias. Disparan sus armas durante horas, a veces desde el amanecer hasta la noche, con agresiones físicas y verbales.

El 22 de agosto de 2020 miembros de ORCAO (Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo) incendiaron la bodega y la tienda comunitarias en el crucero de Cuxuljá, todo ello en el municipio oficial de Ocosingo. Han secuestrado comuneros y comuneras, los torturan y amenazan.

Como documentan las caravanas de solidaridad, integradas por quince colectivos y acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), a las familias zapatistas se les está haciendo imposible cultivar sus tierras[1].

Esta misma semana la última caravana constató que los paramilitares armados ingresaron a las tierra comunitarias recuperadas para sacar el ganar y quemar su leña. Antes ya habían cercado escuelas, espacios de salud, fuentes de agua y tierras donde pasta el ganado.

Como puede observarse, se trata de micro acciones contra-insurgentes que representan una guerra de altísima intensidad para las familias campesinas. Todo esto sucede con el apoyo de las fuerzas armadas, de los gobiernos estatal y federal que no han hecho nada para impedirlo.

Estamos ante una política consolidada para aislar, debilitar y ahogar toda resistencia. No se busca matar de un machetazo como en las masacres de la tierra arrasada del general Ríos Montt, sino con la exasperante gradualidad del goteo criminal, del hambre y la muerte por asfixia. Es una guerra mundial.

El 3 de febrero la comunidad de paz San José de Apartadó (Antioquia, Colombia), lanzó un comunicado donde denuncia la complicidad estatal en los acosos, violaciones y asesinatos que suceden semana tras semana desde hace 23 años. El comunicado es testimonio de que estamos ante una estrategia global contra las y los diferentes (*Desdeabajo*, 4 de febrero de 2021).

Pese a ser un grupo de campesinos sin armas, los paramilitares asesinaron y desaparecieron más de 300 personas de todas las edades, incluyendo niñas y niños por el delito de resistir la muerte, el desplazamiento y la lógica de la muerte.

"No les bastó solo con la violencia directa", luego "impidieron el paso de alimentos para la comunidad", señala el documento sobre su historia de resistencia. Con el desgaste hoy quedan 35 familias repartidas en varias veredas y 35 niños y niñas que asisten a la escuela comunitaria.

En todos los casos son varones armados contra niñas, niños y mujeres, que son la mayoría absoluta de las comunidades.

Debemos comprender el amplísimo abanico de la contrainsurgencia: desde bombardeos aéreos en Turquía, Siria y Palestina, hasta el implacable goteo cotidiano contra las comunidades zapatistas, pasando por asesinatos masivos y desapariciones como en Ayotzinapa.

El capital aprendió que los asesinatos masivos generan amplias movilizaciones de repudio, pero mediante el goteo que promueve el terrorismo de Estado progresista, puede avanzar con menos obstáculos, ahogando en vida a las comunidades. Es hora de tomar la palabra para nombrar crímenes y criminales.

NOTAS:

[1]Ver vídeo en:
https://www.youtube.com/watch?v=a4PXQ4pGNw8&feature=youtu.be

6

Triage social, el nuevo panóptico

La Jornada, 11 de setiembre de 2020

Las ciencias deberían ser un servicio a los pueblos, sobre todo los más castigados y que luchan por su sobrevivencia. Sabemos que están al servicio de la acumulación de capital y de poder. Por eso debemos congratularnos de un trabajo que echa luz sobre los nuevos mecanismos de dominación.

Me refiero al trabajo "La pandemia, el Estado y la normalización de la pesadilla", de Tamara San Miguel, estudiante de maestría de sociología jurídica, y Eduardo Almeida, estudiante de doctorado en sociología y antropología. Ambos mexicanos, de Puebla.

A mi modo de ver, el aspecto más interesante del trabajo es el que hace referencia al *triage social*, el mecanismo por el cual el sistema ordena y jerarquiza quiénes deben salvarse y quienes deben morir: si no hay respiradores suficientes, "alguien" decide quiénes tienen prioridad. Lo mismo respecto a las camas hospitalarias y a todos los servicios saturados.

Ese "alguien" son los algoritmos, definidos en este trabajo como "un sistema al que se ingresa información y del que se obtienen respuestas", en formato de instrucciones que se siguen de manera mecánica para obtener ciertos resultados. También son "una nueva ideología científica para enfrentar la incertidumbre", y a la vez reforzar la dominación.

El problema es que los algoritmos se están utilizando para enfrentar problemas y dilemas sociales y éticos, para tomar decisiones a partir de una lógica "que implica ordenar, clasificar y en última instancia discriminar lo que sirve de lo que no sirve". Cuando se abordan cuestiones éticas, el

algoritmo supone "aplicar rutas mecanizadas para tomar decisiones que afectan la vida en todos sus aspectos".

No es ninguna casualidad que el *triage* surgiera en el seno de las fuerzas armadas, al igual que el panóptico, como explicara Jeremías Bentham y desarrollara Michel Foucault. Con tanto éxito que no sólo se aplicó en el diseño de cárceles sino en las fábricas, hospitales, escuelas y en todos los espacios donde la sociedad capitalista necesitaba disciplinar a la clase trabajadora.

En efecto, el concepto de *triage* (de la palabra francesa *trier*, clasificar o separar) fue aplicado por vez primera por el jefe de la Guardia Imperial de Napoleón para "evaluar y clasificar la atención de los soldados heridos en batalla". Décadas después fue adaptado por el cirujano de la Armada británica, para "la clasificación de aquellos que no recibirían atención por no tener posibilidades de sobrevivir aún con tratamiento". De ahí se trasladó al plano de lo social y al conjunto de la sociedad.

Ahora que los poderosos decidieron gestionar la escasez, provocada artificialmente como sucede en los hospitales por la privatización o la falta de inversiones en buena parte del sistema sanitario, el *triage social* que ya se venía aplicando, cobra una dimensión nueva.

San Miguel y Almeida sostienen que así como las burocracias gestionaron quiénes eran descartables por irrecuperables durante la guerras napoleónicas, "en el triage social, a los descartables, las burocracias les sacrifican las posibilidades de acceder a los recursos; si continúan viviendo o mueren resulta irrelevante y se vuelve invisible con la excusa del "bien mayor".

Ese bien mayor puede ser, como hemos visto estos meses, considerar ciertas actividades económicas como "esenciales", decidir "qué sectores favorecer con programas públicos, es decir qué partes de la población aprovecharán mejor los recursos del Estado para favorecer los propósitos del Estado, algo muy similar a la situación pre-pandemia".

Decidir a quiénes se deja morir y qué sectores de la economía se deben sostener, no es ni más ni menos que lo que estamos viendo ante nosotros.

La pandemia permitió hacer más visible, o inocultable, este sistema de muerte que determina "quienes tienen la calidad de ciudadanos acreedores de derechos, quienes se convierten en refugiados merecedores de ayuda humanitaria, y quienes quedan como zombies, muertos vivientes, condenados a las formas más precarias de supervivencia o a morir en el olvido".

El trabajo que comento y que pueden leer en las siguientes páginas, tiene otras virtudes como los derechos humanos durante la crisis en curso, que merecen comentarios más detallados. Por ahora basta con mostrar cómo el *triage social* conlleva un algoritmo, que permite a los Estados "justificar moral y técnicamente las consecuencias de decisiones éticas complejas" que hacen a la vida, la muerte y la supervivencia de las poblaciones.

Recomiendo la lectura de un trabajo que nace de la indignación militante, ética y política, y que busca desnudar los nuevos mecanismos de opresión y control de poblaciones y pueblos, parar mejor luchar contra ellos.

En América Latina, la acción paramilitar y narco, que estos días despliega el terror desde Chiapas hasta el Cauca colombiano, la sostienen algoritmos que, en algún momento, debemos develar. Un trabajo al que Tamara y Eduardo, como otros adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, podrán contribuir.

7

La pandemia, el Estado y la normalización de la pesadilla

Tamara San Miguel y Eduardo J. Almeida

La llegada de la pandemia al planeta tierra intensificó los efectos de una pesadilla. La crisis que desató el Covid-19 dejó ver y agudizó las múltiples crisis que ya existían y las condiciones inhumanas en las que ya vivía una buena parte de la humanidad.

El eje del análisis se basa en la hipótesis de que la mayoría de los Estados actuales son estructuralmente incapaces de enfrentar una amenaza como la del SARS-CoV-2 sin estrategias que impliquen actos inhumanos, violatorios de derechos humanos y potencialmente criminales. Estas estrategias tienen que ver tanto con su debilidad estructural como con dinámicas más profundas relacionadas con la forma en que se configuran las relaciones de poder. Nos enfocamos en el poder Estatal entendido como dominio sobre la vida y la muerte de quienes viven o transitan por sus territorios o jurisdicciones, sobre todo en situaciones de "emergencia".

El análisis parte de la combinación entre la violencia, los derechos humanos y el desarrollo en una situación de emergencia y la lógica del *triage social* como justificación ética de actos inhumanos. A partir de la revisión de algunos casos que hemos identificado como graves pretendemos identificar las violaciones graves de derechos humanos que se han cometido durante la pandemia por causas preexistentes agudizadas con la crisis sanitaria o bien por la ejecución de las medidas de emergencia. Abrimos la pregunta de si esos actos que han violado derechos humanos configuran crímenes de Estado. El ejercicio de señalar los actos nos parece esencial para desnormalizar lo que pretende imponerse como normal en el contexto de la pandemia.

Aunque nos enfocamos en algunos casos de algunos países del continente americano que permiten tener una visión general de las dinámicas Estatales en la región, vemos este texto como un primer paso en un análisis que valdría la pena hacer a mayor profundidad y en todas las geografías posibles. No es un texto fríamente calculado (aunque los cálculos sean fríos) o con pretensiones de objetividad y asepsia, surge de la indignación por las atrocidades que pretenden ocultarse bajo la tragedia de la pandemia, surge de la inquietud por encontrar rumbo para actuar frente a los crecientes abusos, surge de la urgencia por buscar señales de esperanza en medio de la incertidumbre.

Este texto es un inicio y a la vez es una invitación para construir o compartir análisis similares que puedan darnos una visión más clara de las dinámicas de poder en esta nueva etapa pandémica y de los actores que pretenden usar la crisis para sostener estructuras y relaciones que nos están llevando de una catástrofe a otra hasta que no quede nada más que (tal vez) ellos.

La pandemia

Un virus, un ser infinitamente pequeño, implicó una crisis social planetaria. La metáfora convertida en realidad sobre la fragilidad del mundo globalizado es devastadora. El origen griego de la palabra pandemia, "pan" (todo) "demos" (pueblo) pareciera un estado idílico de la humanidad, el único problema es que lo que en el 2020 une a todo el pueblo de este planeta es una elusiva y compleja enfermedad que demuestra la profunda vulnerabilidad de la humanidad. La pandemia no es resultado únicamente de la existencia del virus SARS-CoV-2, ni de las mutaciones que puede haber tenido, ni de los padecimientos que provoca, es resultado del impacto social que tienen la combinación de contagios, padecimientos y la capacidad de contención y respuesta que podemos tener como humanos y como sociedades. Lo que también hace distinto a una pandemia, y a esta en particular, es su dimensión global.

Desde el año pasado existían advertencias sobre el aumento de enfermedades provocadas por la deforestación en todo el mundo. Se sabía que esta práctica cada vez menos regulada podía implicar el surgimiento de enfermedades infecciosas (Zimmer, 2019).

Según un reporte especial del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas (UNEP, 2020) los virus de origen zoonótico son enfermedades que están emergiendo de los animales y saltando a los humanos. De todas las nuevas y emergentes infecciones en humanos alrededor del 75 % vienen de "especies de salto", de otros animales a las personas. La mayoría de las zoonosis pasan de forma indirecta a través del sistema alimentario. En el estudio identifican siete factores que pueden estar provocando la aparición de estas enfermedades: 1) el aumento de la demanda humana de proteína animal; 2) la intensificación de la agricultura insostenible; 3) mayor uso y explotación de la vida silvestre; 4) utilización insostenible de los recursos naturales provocado por el acelerado crecimiento de las urbes, el cambio de uso del suelo e industrias extractivas; 5) aumento de viajes y transporte; 6) cambios en las cadenas de producción y suministro de alimentos; y 7) el cambio climático.

Las condiciones para que llegara esta catástrofe se fueron anunciando. La pandemia es un desastre y lo que lo configura como tal no es la amenaza natural sino las vulnerabilidades o capacidades de enfrentar esa amenaza. El desastre es un fenómeno social que pone en crisis la "normalidad", en el caso del Covid-19 lo que se pone en crisis es la capacidad de contener los contagios y evitar las muertes, algo que pone a prueba los sistemas sanitarios, económicos y políticos. Como cualquier desastre, la pandemia provoca tiempos acelerados a los que cualquier sociedad responde con aquello que tiene, es decir, lo que hay para enfrentarla es con lo que se puede enfrentar, sean capacidades técnicas, estructurales, económicas o hasta culturales.

Esta pandemia, la del coronavirus, es como cualquier desastre, pero no es cualquier desastre, es uno que ha puesto en crisis prácticamente a toda la humanidad, y en situaciones de crisis, como en un barco que se hunde, surgen todo tipo de reacciones y decisiones, sabias, solidarias, oportunistas y crueles.

La crisis de un mundo en crisis

Desde que llegó el Covid-19 ciertamente nada es igual que antes, la cruda realidad que se venía creando día a día provocada por el capitalismo desenfrenado que vivimos en casi todo el mundo nos llevó a tener las cifras de terror que tenemos ahora. Hoy en día prácticamente todos los seres humanos del planeta estamos siendo afectados por la incertidumbre que provoca la pandemia del coronavirus. Esa incertidumbre nos está haciendo añorar las crisis globales que teníamos antes de estar en esta crisis, pues como bien dicen muchos analistas como Naomi Klein (2020), el mundo ya estaba en crisis antes de esta crisis, estaba en llamas, en un deterioro ambiental catastrófico, con millones de personas sin posibilidades de sobrevivir y el resto apenas sobreviviendo, con un 1% de excepción. La privatización de la salud en casi todos los países y la situación de olvido en la que viven amplios sectores de la población han jugado un papel fundamental en el impacto que ha generado la pandemia del SARS-CoV-2.

Hemos presenciado miles de contagios, miles de muertes, y zozobra en todo el mundo frente a un enemigo mortal que parece apocalípticamente amenazante. Sin embargo, el viral coronavirus no es un monstruo mitológico invencible, es un organismo que provoca una nueva enfermedad, grave, en proceso de ser entendida, potencialmente mortal, pero con la rápida respuesta de profesionales de la salud e investigadoras e investigadores en todo el mundo, tratable y curable sin necesidad de magia o soluciones espectaculares, simplemente con hospitales capaces de recibir a las y los enfermos, médicas y médicos bien capacitados y medicamentos adecuados y disponibles podría ser suficiente. Pero a pesar de ser en términos patológicos un problema remediable más allá de la existencia o no de una vacuna, el Covid-19 está resultando una tragedia de proporciones globales.

Más allá de las teorías de conspiración sobre el origen del virus (desde los estofados de murciélago hasta la guerra biológica), la realidad es que nadie estaba preparado. Prácticamente todos los países del mundo tuvieron que tomar medidas para enfrentar la llegada del virus o para tratar de retrasarla o aplanar la ya paradigmática curva de contagios.

Algunos países han tenido reacciones más ágiles y efectivas que otros, pero la realidad es que ningún país parece salvarse.

Byung-Chul Han (2020) hace un interesante análisis de las condiciones culturales y políticas que permitieron a los países asiáticos enfrentar la pandemia con relativa efectividad, el resultado a largo plazo de su análisis es casi más preocupante que el virus en sí. China, Japón, Corea, Taiwán logran controlar el primer ciclo de la pandemia porque tienen un control casi total de la cotidianidad de las personas que viven dentro de sus fronteras. Vigilancia digital permanente, cámaras de seguridad en todos los espacios sean públicos o privados, reconocimiento facial, capacidad absoluta de control poblacional, sumisión completa al Estado (o confianza si nos gustan los eufemismos), y eso sí, cubrebocas, muchos cubrebocas.

La crisis sanitaria y humana que estamos viviendo en el mundo está siendo aprovechada sin duda para controlar a la población, aumentar la polarización en cada país y a nivel global, pasar leyes que en otros momentos habrían provocado mayores reacciones sociales, militarizar la vida social y la seguridad pública, vender, especular y continuar con la misma lógica que nos ha dejado en dónde estamos a nivel social, político, económico y ambiental.

¿Salvar vidas o salvar la economía?

Las respuestas de cada país, de cada persona, han sido diversas y hasta paradójicas desde las compras de pánico (sobre todo de papel higiénico y cervezas, esenciales al parecer para la supervivencia humana) que presuponen que un "otro mezquino" acumulará los recursos; la exigencia de estrategias de cuarentena coercitiva y vigilancia digital; hasta la "confianza" en la civilidad ciudadana. Toda crisis grave saca lo peor y lo mejor de la humanidad, como señaló Rodríguez Lascano (2020) "cada uno comienza a elaborar sus criterios de supervivencia, unos quieren asegurar papel de baño, pero otros se cuestionan una vieja forma de relación social y enseñan una solidaridad horizontal".

En muchos aspectos, la pandemia, como apunta Zibechi (2020), acelera tendencias preexistentes que van desde la interrupción de la integración económica y el debilitamiento político del sistema hasta profundas transformaciones psicológicas y culturales.

En medio de la incertidumbre y del exceso de información verdadera, falsa y combinaciones entre ambas, algunas cosas se han vuelto evidentes: la primera es que la propagación del virus nos mostró el nivel de interconexión que hay entre los seres humanos de este planeta, contagio tras contagio.

Ha sido necesario forzar el distanciamiento social para tratar de disminuir la frecuencia de esas conexiones y así tratar de reducir el número de contagios. La segunda es que los efectos y temores económicos y de abastecimiento de insumos médicos, alimentos, materias han mostrado el nivel de interdependencia global desde las grandes cadenas de producción hasta las cuestiones más cotidianas de la vida. La tercera es que, en tiempos del Big Data, de la nanotecnología, del aparente entendimiento y control minucioso que los humanos teníamos sobre el planeta, el imaginario de nuestra aptitud suprema de supervivencia y dominio sobre la naturaleza se desmorona y hace explícita nuestra vulnerabilidad como especie.

Algo que es importante apuntar es que esta pandemia pudo haberse prevenido, no la aparición del virus, los contagios iniciales, tal vez ni siquiera su expansión por algunos países, pero sí su dimensión global y su letalidad. En su análisis sobre la pandemia y el sistema-mundo, Ramonet (2020) muestra que en varios reportes recientes de las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos, en análisis de expertos y en múltiples foros se había planteado la posibilidad de una pandemia de estas proporciones por un virus con las características del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, y en muchos casos se hicieron recomendaciones para establecer las medidas sanitarias para poder prevenirla o enfrentarla.

No eran necesarias medidas espectaculares ni tecnologías de avanzada sino estrategias simples con herramientas tan sencillas como el jabón, herramientas de costura para los tapabocas y la implementación de

medidas de distancia, y evidentemente, un sistema de salud pública eficaz. Como señala Ramonet, Vietnam es un ejemplo interesante pues con unos cuantos contagios estableció estrictas medidas de distancia y logró controlar el brote en cuestión de semanas y sin un gran número decesos. Otros casos interesantes de reacción temprana son Nueva Zelanda y Cuba. En el primer caso limitando la hipermovilidad y estableciendo "burbujas" comunitarias que permitieron la interacción entre personas sanas. Los resultados de esas medidas los conocemos, contuvieron los contagios. En el caso de Cuba con un sistema de salud pública robusto, con claros protocolos de respuesta ante una situación como ésta, un importante desarrollo de medicamentos y diagnosticando casa por casa sin necesidad de grandes recursos espectaculares, simplemente con buena práctica médica. Es decir, había la experiencia, la información y las advertencias necesarias para que el mundo, y sobre todo la economía capitalista, aceptara con humildad una pausa en su avance devastador y evitara el número de muertes que se está registrando. Pero lo que se hizo se hizo tarde y con la excusa de la sorpresa, y esto ha tenido efectos graves en la vida de prácticamente todos los seres humanos del planeta, extendiéndose en el tiempo y afectando las relaciones sociales y sí, también las económicas.

A lo largo de la pandemia hemos escuchado reiteradamente la contraposición entre medidas sanitarias orientadas a evitar contagios, en particular las medidas de distancia social, y la economía global que aparentemente requiere volver a las actividades habituales y a la interacción directa entre personas, lo que ha planteado un aparente dilema entre salud y economía. El argumento de las medidas médicas y sanitarias para salvar vidas es directo, la distancia evita contagios, evitar contagios salva vidas. El argumento en favor de la reactivación de las actividades económicas es completamente indirecto, es decir que se basa en la idea de que la reactivación económica, la producción y el consumo, implica evitar el crecimiento del desempleo, de la pobreza y que eso resulta en mejores condiciones de supervivencia para todas y todos. Plantea la idea de que la economía global salva vidas, tantas o más que el evitar contagios. Como si el sistema económico predominante antes de la pandemia hubiese representado un beneficio común.

La lógica neoliberal tiene un fuerte componente de sacrificio de poblaciones que dentro del cálculo de costo-beneficio para la economía considera menos valiosas y por lo tanto descartables, como lo señala puntualmente en una entrevista Mbembe (Bercito, 2020). Estas poblaciones suelen ser las mismas de siempre, aquellas que son consideradas menos valiosas o aquellas que sufren una violencia sistemática y estructural, es decir, aquellos que se encuentran en la zona del no-ser como diría Fanon (1973).

Meses después del inicio de esta crisis podemos ver cómo en muchos países los gobiernos están privilegiando la economía por encima de la salud, desde los rostros más grotescos, como el de Trump y Bolsonaro, hasta los llamados gobiernos progresistas. La mayoría han optado por salvar la economía, por presionar a la reapertura de la producción, por invitar a consumir, y por hacerlo con medidas sanitarias de protección individual (cubrebocas, lentes, guantes, etc), por comenzar a acostumbrarnos a lo que llaman una "nueva normalidad".

Las medidas sanitarias de distancia implican una protección colectiva en donde como dice Marcos Roitman (2020b) el no salir no solo implica cuidarme yo de no contagiarme, sino también el cuidar que yo no contagie a otros, la distancia es una medida de protección colectiva, sobre todo en los numerosos casos asintomáticos que parecen ser característicos de este coronavirus. Estas medidas implican que el Estado tiene que asumir la responsabilidad de que todas y todos tengan las mejores condiciones posibles de supervivencia dentro de la lógica del distanciamiento. También implica que las y los propietarios o socios de las empresas privadas tienen que asumir costos por mantenerse inactivos durante un tiempo sin recurrir a despidos que harían más precaria aún la situación de las y los trabajadores.

En este contexto también se requiere de servicios públicos robustos, sobre todo en lo sanitario, en la atención a quienes dependen de la economía informal para sobrevivir cada día y en la regulación de las actividades de producción esenciales (alimentación, energía y comunicaciones). Un Estado que depende de servicios privatizados depende entonces de la disposición del sector privado o de tener los recursos económicos y

políticos para su expropiación y así poder asumir los requerimientos de las medidas de distancia. Evidentemente, como se ha visto en varios países, existe también la posibilidad de establecer medidas extremas de distancia sin prever las condiciones de supervivencia de la población más vulnerable, sobre todo aquella que vive día a día de la economía informal.

La reactivación de las actividades económicas presenciales implica un aumento en la interacción directa entre personas y por lo tanto una mayor exposición de la población al contagio del virus, por lo tanto requiere un énfasis en la protección individual. Esto exime a las empresas privadas de tener que asumir costos por las medidas de protección pues les permite reactivar su actividad lucrativa y hace dispensable la necesidad de que los empleadores asuman medidas de protección de la salud de la y los empleados. Asimismo, el Estado puede desafanarse de la necesidad de asumir la responsabilidad directa de que todos tengan los medios indispensables de supervivencia. Los servicios esenciales pueden seguir su camino de privatización, incluida la salud.

En este último escenario la responsabilidad de evitar el contagio recae completamente en las y los individuos y en su capacidad por aislar su cuerpo, lo que evidentemente será más o menos fácil dependiendo de su ubicación en las relaciones de producción. Un o una accionista adinerada de una empresa estará en mejores condiciones para distanciar su cuerpo de los virus que un obrero o una obrera.

La pregunta aquí es cuántos Estados tienen aún las condiciones institucionales para asumir medidas de protección colectiva ante la pandemia, y cuántos están dispuestos a asumir los costos políticos y económicos para tenerlas. Lo que ya se percibe como una realidad en construcción es un nuevo ciclo de operación de los dos binomios en el proceso del capitalismo neoliberal que identificaba el Subcomandante Marcos (1997) hace más de veinte años: destrucción-despoblamiento y reconstrucción-reordenamiento.

El Estado de Malestar en la Cuarta Guerra Mundial

Desde hace décadas se fue instalando lo que Rodríguez Azueta (2019) llamó el Estado de Malestar después de que se fue desmantelando su opuesto, el Estado de Bienestar, así que ya teníamos normalizada la anormalidad que implicó que el Estado no gestionara la vida sino la muerte. Esto es lo que las y los zapatistas (Subcomandante Insurgente Marcos, 1997) llamaron la Cuarta Guerra Mundial, considerando que la Guerra Fría fue la tercera. Para ellas/os esta Cuarta Guerra es la peor y la más cruel, una que el neoliberalismo libra contra la humanidad. En esa guerra la política se convirtió en organizador económico, ya no en organizadora del Estado nacional. El crimen organizado fue penetrando los sistemas políticos y económicos de los Estados nacionales, las medidas económicas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional impuestas después de la crisis de la deuda mundial de los ochentas agudizaron las crisis de los negocios legales, la crisis de la deuda mundial provocó que los países "subdesarrollados" presentaran una reducción en sus ingresos dando pie al origen de una economía ilegal para llenar el vacío dejado por la caída de los mercados nacionales.

Antes de la llegada del SARS-CoV-2 ya habíamos presenciado rescates económicos y bancarios a costa de la gente. La economía que se instaló entonces ha estado basada y sostenida en la desigualdad. La lógica brutal de la etapa neoliberal del capitalismo trajo consigo una creciente gestión burocrática de la barbarie que se sintetiza en lo que Rodríguez Lascano (2017) define como la nueva ideología del dominio: la guerra humanitaria.

En estas circunstancias, el repliegue en tiempos de crisis de los derechos humanos como herramienta de resistencia ante los abusos del poder es brutalmente claro. De pronto la discusión de los derechos humanos regresó a la preservación de la vida, y a primera vista pareciera que a costa de todos los demás derechos. El año 2001 marcó el auge de los estados de excepción permanentes y de la seguridad como derecho supremo a reclamar, además de como fuente primaria de legitimidad. Poco a poco esta lógica se ha matizado entre escándalos por crímenes de guerra (reconocidos y no) y por la crisis de 2008

que puso en evidencia la fragilidad del sistema financiero global y la voracidad de las corporaciones transnacionales. Pero esas coyunturas que han evidenciado la brutalidad y la debilidad de los Estados se han enfrentado con la agudización de las condiciones que las provocaron. En el caso de la seguridad con el inicio de una guerra interminable en Medio Oriente y con la criminalización de quienes denuncian los actos atroces en esas guerras, como ocurre con el caso de Julian Assange. En el tema financiero la respuesta fueron costosos rescates que llevaron dinero público a bolsillos privados. Tanto la experiencia de 2001 en el campo de la seguridad como la de 2008 en el financiero nos enseña que una palabra que parece generar una aceptación casi mágica de las soluciones más aberrantes es "emergencia".

Rajagopal (2007) señala que los estados de emergencia fueron un mecanismo para deslegitimar los movimientos de liberación en las colonias europeas y negarles a esos conflictos el estatus de guerra o de desafío al Estado, los reducía a situaciones que requerían el restablecimiento del orden. Por otra parte, el estado de emergencia permitió eliminar la aplicabilidad de normas jurídicas internacionales que podrían tener efectos en una situación normal de desorden interno. Esta experiencia, este mecanismo, se trasladó de los imperios al derecho internacional, que como Anghie (2015) señala deriva de los primeros, y de ahí a todos los Estados que de alguna manera se han armonizado con las formas jurídicas europeas. El efecto de este traslado es que en un estado de emergencia no existen muchas normas jurídicas que puedan aplicarse, no es una situación de guerra por lo tanto el derecho internacional humanitario queda relegado, y no es una situación normal, no es tiempo de paz por lo que los derechos humanos quedan mayormente sujetos a los criterios que el Estado establezca para la emergencia.

Existen algunas normas internacionales como los Principios de Siracusa adoptados por la ONU en 1984 que establecen algunas disposiciones que deben aplicarse cuando por una declaración de emergencia un Estado pretenda limitar o derogar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre otras cosas establece garantías que no pueden ser suspendidas como el derecho a la vida, a no ser

torturado, a la libertad de pensamiento, entre otras, y establece criterios de necesidad, legalidad, racionalidad, proporcionalidad y temporalidad para las declaratorias de emergencia. Sin embargo, así como establece protecciones a ciertos derechos insuspendibles, también establece criterios para que los Estados puedan suspender otros derechos en situaciones que consideren de emergencia, aludiendo al mismo tiempo a la responsabilidad de los Estados en cuanto a lo "estrictamente necesario". En el caso de las emergencias como la que presenta el Covid-19, los Principios de Siracusa determinan que:

> La salud pública puede invocarse como motivo para limitar ciertos derechos a fin de permitir a un Estado adoptar medidas para hacer frente a una grave amenaza a la salud de la población o de alguno de sus miembros. Estas medidas deberán estar encaminadas específicamente a impedir enfermedades o lesiones o a proporcionar cuidados a los enfermos y lesionados. (UN Commission on Human Rights, 1984).

Estas normas tienen una redacción general y están sometidas a los criterios geopolíticos que determinan su aplicabilidad como ocurre recurrentemente en el derecho internacional. A esto hay que agregar que una catástrofe de la que deriva una emergencia genera un estado de conmoción en la población que la inmoviliza por lo menos temporalmente y que la hace susceptible a aceptar las acciones que determinen quienes aparentan tener el control (Klein, 2007). Esto dificulta la posibilidad de poner la atención sobre normas internacionales poco difundidas y dificulta su aplicabilidad, ya no sólo por el contexto geopolítico global, sino por la dificultad de enfrentar simultáneamente la conmoción y enfrentar los abusos de los agentes del Estado. El estado de conmoción que produce la catástrofe, en este caso la pandemia, aumentado por la acción del Estado deriva en un comportamiento de social-conformismo (Roitman, 2020a) que inhibe la conciencia y paraliza la posible acción colectiva en un estupor que se presenta como responsable. Todo esto permite que durante una catástrofe se dé el ambiente para que la gestión de la vida y la muerte quede en manos de quienes detentan el poder del Estado o están en condiciones de manipularlo.

A este proceso de la emergencia hay que agregar otro elemento que tiene orígenes anteriores a la pandemia. Ulrich Beck (2003) señalaba dos procesos que permean los Estados y las sociedades en el proceso general de globalización, el del régimen neoliberal y el de los derechos humanos. Por una parte, en el período neoliberal los derechos humanos pasaron de ser una forma de defensa contra el poder a ser la concreción del poder como apunta Douzinas (2005). Por otra parte, el neoliberalismo llevó en las últimas décadas del siglo XX a acelerados procesos de privatización en sectores antes bajo el control del Estado, convirtiendo a este último en la representación de una facultad técnica administrativa que posibilitó el crecimiento de una economía global corporativa (Sassen, 2007).

En una especie de armonización entre el régimen neoliberal como forma de estructuración de las relaciones económicas y Estatales en la globalización con los derechos humanos como su discurso moral, toma fuerza otro discurso heredado del desenlace de la Segunda Guerra Mundial, el del desarrollo. Esta preocupación por el desarrollo surge tanto de las problemáticas que representaban las ex-colonias y ahora nuevos Estados en términos de pobreza en combinación con la necesidad de las antiguas metrópolis por recuperarse tras la guerra (Naredo, 2015). Si bien el concepto de desarrollo en la posguerra tomó un carácter eminentemente pragmático, durante el período neoliberal ese pragmatismo se volvió tan brutal en lo concreto como eufemístico en el discurso. Desde los sesenta y setenta el desarrollo se volvió casi un sinónimo de bienestar, y a finales de los noventa ese bienestar potencial parecía justificar cualquier acción, cualquier proyecto, cualquier violencia.

Como también advierte Rajagopal (2007), la violencia del desarrollo suele ser un punto ciego de los derechos humanos, habitualmente se le ubica fuera de ese campo, a pesar de la cantidad de violaciones sistemáticas que derivan de ella. Si bien la violencia del mercado es regularmente señalada en toda clase de movimientos sociales, foros y discursos para denunciar los efectos perversos del capitalismo, ésta se ha ido adaptando y se oculta bajo esa otra violencia del desarrollo que es menos señalada. Estar en contra del mercado en América Latina puede

ser hasta habitual, es ir en contra de los ricos en países mayoritariamente pobres (independientemente de las alquimias estadísticas), pero estar en contra del desarrollo significa ir en contra de los intereses del bien común del país, por lo tanto, la violencia generada por el desarrollo tiende a volverse aceptable.

La justificación de la violencia en nombre del desarrollo resulta en una argumentación capaz de socavar cualquier intento por frenarla desde el discurso de los derechos humanos, porque si bien es posible condenar a quienes cometen abusos puntuales, la causa estructural de esos abusos, los proyectos de desarrollo, suelen seguir su curso.

Una noción que resulta muy útil para referirse a la relación entre comercio y violencia en la economía política contemporánea es la de Necrocapitalismo (Banerjee, 2008) que establece que las formas contemporáneas de acumulación organizacional implican desposesión y sometimiento de la vida al poder de la muerte. En el necrocapitalismo la violencia, el despojo y la muerte, son resultado del proceso de acumulación, ahí se generan espacios que parecen inmunes a la intervención legal, jurídica y política, provocando la suspensión de la soberanía. Las corporaciones aprovechan cualquier situación para implantar estados de excepción y beneficiarse económicamente de ellos. Aquí entran los desastres, las guerras que aplanan el camino para la posterior reconstrucción que implica el endeudamiento de los países y la ejecución de programas de ajuste.

El Covid-19 no llega a un mundo en blanco, se expande en ese mundo, en ese contexto de necrocapitalismo, de violencia, de eufemismos, de bienestar privatizado, de servicios públicos insuficientes y de Estados profundamente dependientes de los actores más poderosos del mercado. En conjunto con esto, en esta crisis de 2020, la del SARS-CoV-2, no nos enfrenta a "otra/os" humanos, sino a un "otro" invisible y aparentemente incontenible que pone en riesgo nuestra posibilidad de respirar y por lo tanto de vivir. Esto ha generado una enorme incertidumbre sobre lo que queremos proteger de "lo humano" y sobre cómo responder, sobre todo porque está implicando ponerse frente al sistema hegemónico y a sus inocultables contradicciones y sus peligrosas deficiencias.

El *Triage Social*: ¿Salvar qué vidas para qué economía?

La pandemia del Covid-19 ha explicitado el control poblacional a través de la gestión de recursos de supervivencia limitados, se han desarrollado algoritmos éticos para tener la capacidad de decidir quién debe sobrevivir y quién no a partir de imaginarios sobre el "bien común" o ideologías que resuelven el dilema ético de quién los merece y quién no.

Un algoritmo es una mala pronunciación latina de Al-Khwarizmi, el matemático persa del siglo IX, cuyo nombre durante la edad media se usó para describir cualquier método de cálculo sistemático o automático. Algoritmo actualmente tiene muchas definiciones, es un árbol de decisión, es un sistema al que se le ingresa información y del que se obtienen respuestas, es un conjunto de instrucciones que el usuario sigue de manera mecánica y de las que obtiene un resultado ideal (Steiner, 2012). Desde la edad media el estudio de los algoritmos ha dado resultados interesantes en la búsqueda de respuestas, sin embargo es hasta Claude Shannon que a finales de los treinta combinaría la matemática binaria de Leibnitz con el álgebra booleana para diseñar circuitos electrónicos capaces de guardar información y resolver problemas. Como lo analiza Castells (1999) la importancia de la producción y gestión de información desde ese momento y sobre todo a partir de finales del siglo XX ha transformado las relaciones sociales en el mundo en todos los ámbitos, incluidas las relaciones de poder y la política. Una muestra de la relevancia de la información es la cantidad que se produce y almacena, hasta 1986 la cantidad era de 2.64 billones de gigabytes (entre digital y análoga), para el 2007 (hace 13 años) la cantidad era ya de 294.98 billones de gigabytes, es decir que en 20 años se ha almacenado más de cien veces más información que desde el inicio de la historia hasta 1986 (Hilbert y López, 2011).

Además de la cantidad, la velocidad cuasi simultánea del flujo de información a nivel global ha llevado a requerir y depender de algoritmos capaces de procesar grandes cantidades en poco tiempo que permiten a quienes diseñan y controlan esos algoritmos tomar decisiones. En este sentido los algoritmos se han convertido en una nueva ideología científica para enfrentar la incertidumbre en un mundo global y a la vez reforzar las

relaciones de dominación (Rodríguez Lascano, 2020). Los algoritmos se están utilizando para enfrentar problemas sociales y éticos, para tomar decisiones a partir de una lógica que implica ordenar, clasificar y en última instancia discriminar lo que sirve de lo que no sirve y a partir de ello decidir cómo actuar. La aplicación de algoritmos para problemas éticos y sociales implica aplicar rutas mecanizadas de decisión para tomar decisiones que afectan la vida en todos sus aspectos. Esto a su vez implica analizar la base sobre la cual se construye esa ruta mecanizada, es decir su propósito y su origen contextual e ideológico.

Uno de los algoritmos ético-sociales, o de justicia distributiva como argumentan Moskop y Iserson (2007), más conocidos actualmente es el *triage* médico, que viene de la palabra francesa *trier* (filtrar, seleccionar, clasificar y separar lo útil de lo desechable) utilizada en la actividad agrícola, cuyo origen se atribuye al Baron Dominique-Jean Larrey, jefe de la Guardia Imperial de Napoleón, que desarrolló un sistema para evaluar y clasificar la atención a los soldados heridos en batalla entre los que requerirían atención inmediata por la severidad de sus lesiones y los que podrían esperar para ser tratados. A mediados del siglo XIX el cirujano naval de la Armada Británica John Wilson agregó la clasificación de aquellos que no recibirían atención por no tener posibilidades de sobrevivir aún con tratamiento. Sobre esta base hay una larga historia de adaptaciones en los entornos militares, médicos y de servicios de emergencia. En todos los casos se utiliza para que en una situación de recursos médicos limitados se pueda ordenar, clasificar y discriminar pacientes.

La idea general es que en un escenario de múltiples víctimas provocado por un evento catastrófico la crisis, en términos médicos, tiene un protocolo claro de *triage*, de clasificación en grupos: las/os de fácil recuperación sin intervención, las/os críticos sin posibilidad de recuperación aún con una intervención y las/os graves con posibilidad de recuperación con una intervención. Este es un proceso que se puede realizar en varios momentos que van desde el lugar en el que ocurrió el evento catastrófico hasta la atención hospitalaria. El criterio es simple y existen varias versiones y adaptaciones del algoritmo de triage para tomar estas decisiones, pero en el terreno de la clasificación depende de los conocimientos científicos,

capacidades técnicas y valoración ética de quien decide, y quien decide normalmente será médica/o ó paramédica/o porque habitualmente son las/os que están socialmente (moral y legalmente) legitimadas/os para tomar esa decisión.

Ahora pensemos en una situación en donde la humanidad es ese escenario de múltiples víctimas provocado por la catástrofe de nuestras propias acciones. Así ha ocurrido con la pandemia del coronavirus en casi todo el mundo, el Estado está asumiendo las decisiones temporalmente, pero poco a poco el mercado y el Estado-gestor reasumen su relación para una gestión presuntamente "eficiente" de esos recursos limitados que favorece las relaciones de poder asimétricas. Las decisiones frente a la pandemia y sobre las prioridades (sanitarias o económicas) al respecto están estableciendo la clasificación de la sociedad y sobre cómo gestionar los recursos limitados de cada Estado y del mundo.

Sjoberg, Vaughan y Williams (1984) definieron el concepto de *triage social* como el mecanismo mediante el cual las burocracias gestionan a los sectores más "desfavorecidos" de la población. Mientras que en el *triage* médico, heredado de las guerras napoleónicas, los descartados por ser irrecuperables mueren, en el *triage social*, a las/os descartadas/os, las burocracias les sacrifican las posibilidades de acceder a recursos, si continúan viviendo o mueren resulta irrelevante y se vuelve invisible para el "bien mayor". Un crudo ejemplo de una de las formas más obscuras del *triage social* es el que se dio en el primer periodo del régimen Nazi en Alemania cuando el gobierno de Hitler asesinó selectivamente a todos las/os que tuvieran alguna "discapacidad" para evitar que se contaminara la "pureza racial aria".

En el caso de la actual pandemia el *triage* ocurre en ambos sentidos, en el médico y en el social. Cada Estado ha definido criterios para adjudicar los recursos sanitarios limitados a la población afectada por el SARS-CoV-2. A partir de criterios de bioética definen algoritmos para otorgar o negar atención médica directa, hospitalización o respiradores artificiales. Por otra parte toman decisiones sobre las actividades económicas, y sobre cuáles se consideran esenciales, sobre a qué sectores favorecer

con programas públicos, es decir sobre qué partes de la población aprovecharán mejor los recursos del Estado para favorecer los propósitos del Estado, algo muy similar a la situación pre-pandemia.

Aquí surge un *meta-triage*, es decir una clasificación sobre qué sistemas de clasificación son más importantes. Se trata de salvar vidas, pero vidas específicas y a la vez de decidir sostener el sistema económico. Este *meta-triage* social, estas formas de decidir los criterios para clasificar a la población para decidir sobre la vida, la muerte, y sobre todo sobre las formas de vivir, de morir o de sobrevivir tienen que ver con las intervenciones y controles reguladores de la población que caracterizan a la biopolítica (Foucault, 1991) y a esas formas de existencia social características de la necropolítica (Mbembe, 2003), condiciones de vida a las que son sometidos grandes sectores de la población que los dejan en calidad de muertas/os vivientes.

En un estado de emergencia se hace explícito el *triage* como forma de poder, en donde todo lo que está formalmente bajo el dominio del Estado se convierte en un campo, en un espacio de excepción que cada vez más tiende a volverse permanente. Ahí y entonces, el/la soberano/a, el/la que puede determinar la excepción y definir los criterios del *triage*, asume el control para decidir sobre la nuda vida (Agambem, 2001), sobre las/os humanos como seres biológicos y de ahí determinar quienes tienen la calidad de ciudadanas/os acreedores de derechos, quienes se convierten en refugiadas/os (más allá de la documentación que tengan o no) merecedoras/es de ayuda humanitaria o persecución policíaca, y quienes quedan como zombies, muertas/os vivientes, condenadas/os a las formas más precarias de supervivencia o a morir en el olvido.

En la emergencia específica de la pandemia, un criterio de *triage* es favorecer la protección del mayor número de personas de posibles contagios y evitando así que la demanda de servicios y recursos médicos supere los recursos existentes. Esto implica optar por ocupar mayores recursos públicos para asegurar la supervivencia de aquellas/os que dependen de la actividad productiva normal y presencial para sobrevivir. Además significa la reducción de ciertas formas de producción

y consumo lo que implica, como habíamos establecido antes, una mayor presión sobre las empresas privadas en términos económicos y laborales, y a su vez una mayor presión política sobre los Estados. En este punto es importante anotar que algunos países han priorizado evitar la saturación del sistema de salud (camas y ventiladores) haciendo que las personas infectadas y con síntomas permanecieran en sus casas, algo que ha llevado a que muchas/os mueran sin llegar a los hospitales o que al llegar sean casos de gravedad extrema.

Otra posibilidad es favorecer la producción y el consumo y asumir el riesgo de mayores contagios y la sobre saturación de los servicios de salud que inevitablemente deriva en más muertes. La decisión de priorizar la actividad económica sobre la protección de la salud implica considerar esenciales a las/os actores con mayor poder de generación de riqueza y considerar "irrecuperables" o descartables a amplios sectores de la población con menor relevancia económica.

El debate entre la protección de la salud ante posibles contagios y la saturación del sistema de salud, la urgencia por "normalizar" la actividad económica y una especie de reconciencización de la necesidad de tener un planeta "sano" para poder sobrevivir como humanos, resultan en procesos definidos en la mayoría de los casos por unos cuantos "tomadoras/es de decisiones" y "expertas/os" basados no sólo en una visión filosófica de lo humano ni en un diagnóstico o pronóstico de la sociedad, también en gran medida por coyunturas en las relaciones de poder, en su futuro mediato.

El *triage social* presenta un algoritmo que permite a los Estados justificar moral y técnicamente las consecuencias de decisiones éticas complejas en el que tienen que ver la gestión de la supervivencia y la discriminación de las poblaciones que rigen, igual que el paramédica/o, médica/o o primer respondiente en un escenario de múltiples víctimas donde sus decisiones de *triage médico* le permiten justificar la muerte de aquellos que determina irrecuperables. En este punto es importante preguntarnos si esas decisiones, bajo la justificación del *triage* o no, en el contexto del necrocapitalismo, implican violaciones de derechos humanos y si estas implican crímenes de Estado.

Si entendemos crimen de Estado como la desviación organizacional por parte de agencias del Estado que involucra la violación de derechos humanos (Green y Ward, 2000) entonces sí, quizás estemos ante la configuración de éstos considerando que la desviación organizacional se dio por privilegiar el funcionamiento de una economía desigual que ejerce formas estructurales de violencia y que beneficia fundamentalmente a una minoría sobre la necesidad de salvar el mayor número de vidas ante la crisis sanitaria.

La pandemia y los derechos humanos en crisis

Tanto la conceptualización de los derechos humanos como su aplicación y sus efectos están en una etapa de mucho debate y cuestionamiento. Y en estos tiempos se profundizan las crisis pre-existentes.

Un cuestionamiento central es el tema de su universalidad. La crítica conceptual de los derechos humanos tiene un argumento fuerte en que son producto de la narrativa europea de la modernidad que como señala Mignolo (2010) es la cara visible y benevolente de la colonialidad, por lo tanto su presunta universalidad tiene como centro una concepción eurocentrada en lo humano, patriarcal, blanco, heterosexual y capitalista, donde los que más se acercan a ese modelo se pueden considerar ciudadanos, dejando al resto de la humanidad en calidad de bárbaras/os peligrosas/os, salvajes inconscientes o seres antropomórficos sin la madurez genética o genérica para ser sujetos. No es coincidencia que sea precisamente el discurso de los derechos humanos el que se constituya como el discurso moral de la modernidad-colonialidad capitalista, como un vapor que respiramos y nos define sin percibirlo con claridad. En estas condiciones, los derechos humanos, su universalidad tiene un tono imperialista e implica la legitimación del sistema hegemónico instituido. En términos de Laclau (2005), los derechos humanos tienen como límite demandas intra-sistémicas.

Esa lógica intra-sistémica moderno-colonial está en las formas cristalizadas, sólidas de los derechos humanos, en la transformación de

norma moral a norma jurídica que se concreta en la forma de garantías constitucionales o tratados internacionales. Aunque es un campo profundamente dependiente de los movimientos de la geopolítica, al convertirse en normas reconocidas dentro de las formas jurídico-institucionales del poder pueden adquirir una característica relevante, obligatoriedad. Evidentemente esta obligatoriedad, cuando existe, está limitada por el juego político, sin embargo, el laberinto jurídico de los derechos humanos ha logrado en algunos casos encontrar salidas a situaciones de injusticia.

En condiciones jurídicas los derechos humanos representan la concepción europea, moderna, liberal y colonial del Estado, y es cierto que su uso confirma las relaciones de dominación, sin embargo, en algunos casos concretos, pueden ser una herramienta complementaria que permite detener abusos, despojos, agresiones e incluso omisiones.

Otra forma de los derechos humanos está sujeta a la lógica de la política coyuntural que surge de la contraposición entre dominación y resistencia. Por un lado el hecho de que los derechos humanos se configuraran como el discurso de justicia y dignidad de la modernidad-colonialidad capitalista los convierte en el discurso de legitimación del poder y por consiguiente del Estado. Esto los hace también una narrativa que alimenta una retórica hipócrita que permite que las injusticias concretas y los abusos del Estado y de quienes ejercen alguna forma de poder se invisibilicen. Es decir, el Estado utiliza los derechos humanos como ideales abstractos, intangibles, desconectados de la cotidianidad política. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de la Guerra Fría, los derechos humanos, junto con la democracia y el desarrollo, se han convertido cada vez más en uno de los discursos de legitimación del Estado, que paradójicamente llega a servir para justificar o enmascarar abusos e injusticias.

El otro lado de esa misma moneda es lo que ocurre con los derechos humanos vistos desde quienes padecen esas injusticias y abusos. Hobsbawm (1982) argumenta que en el siglo XVII los reclamos no eran sobre derechos universales sino peticiones sobre agravios concretos. De muchas maneras, los derechos humanos se han convertido en una

herramienta más de quienes sufren, para algunas/os, específicamente aquellos que no logran estar en condiciones para configurarse como sujetos rebeldes, son el único recurso de defensa que les permite condiciones mínimas de resistencia. En estas situaciones, los derechos humanos permiten señalar la hipocresía del Estado, deslegitimarlo desde su propio discurso de legitimación. Esto evidentemente implica muchas estrategias de entre las cuales los derechos humanos son sólo una, pero en ocasiones muy útil.

Durante la pandemia los derechos a la vida, a la salud, a la salud pública y a un medio ambiente sano han tomado relevancia en la arena pública. En simultáneo a esto están las declaraciones de emergencia que ponen en segundo término otros derechos como el libre tránsito o la privacidad. Las mismas declaraciones de emergencia sanitaria están reemplazando a los derechos humanos como discurso de legitimación por uno de justificación sobre sus actos, el del *triage social*. La lógica del *triage social* funciona en la situación de emergencia como justificación ética de actos inhumanos y desplaza como discurso legitimador a los derechos humanos. Plantea una nueva narrativa hipócrita, que el cometer actos inhumanos en una situación como la de esta pandemia es justo y en defensa de la dignidad común.

En este punto resulta importante desenmascarar ese nuevo discurso hipócrita, lo que requiere demostrar que la lógica del *triage social* no es un manejo de recursos limitados en beneficio de las mayorías sino un mecanismo de eliminación o sacrificio de población desechable en beneficio de las minorías más poderosas y señalar la responsabilidad estructural de los Estados al llevar a cabo o favorecer actos inhumanos.

Para el análisis específico de la pandemia y los derechos será útil definir salud y salud pública. Salud es un derecho humano fundamental, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 25, "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria y los servicios sociales necesarios" (Asamblea General ONU, 1948).

Para la Organización Mundial de la Salud salud es el "estado de completo bienestar físico, mental y social". (International Health Conference, 2002). Según la OMS los **derechos** incluyen el derecho de acceso a un sistema de protección de la salud que ofrezca a todas las personas las mismas oportunidades de disfrutar del grado máximo de salud que se pueda alcanzar. Además debe prever el acceso al agua potable y al saneamiento básico, la educación para la salud, la mejora de los cuidados materno-infantiles, las condiciones de trabajo seguras. El derecho a la salud para todas las personas según la OMS significa que todo el mundo debe tener acceso a los servicios de salud que necesita, cuando y donde los necesite, sin tener que hacer frente a dificultades financieras. Nadie debería enfermar o morir solo por ser pobre o porque no pueda acceder a los servicios de salud que necesita.

La salud pública implica que se consiga la máxima salud posible para el máximo número de personas mediante la aplicación del conocimiento científico acorde a cada contexto social, histórico y político (Benach, 2014). Esto permite afirmar que en la actual pandemia en múltiples casos no se ha respetado el derecho a la salud pública, pues desde antes de la pandemia las condiciones de acceso al agua potable, al saneamiento básico y a los servicios de salud eran de por sí precarias en muchas partes del mundo. Ahora con la crisis sanitaria ha muerto gente por no tener acceso a un sistema básico de protección de la salud.

Esto nos plantea muchas interrogantes hablando de derechos humanos, ¿Podríamos estar ante crímenes de lesa humanidad? Si se retoma lo que dicen los estatutos de la Corte Penal Internacional estaríamos ante los que entran en el inciso k) "Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física." (Asamblea General ONU, 1998)

La Corte interamericana de derechos humanos en una jurisprudencia en referencia al artículo 4.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos asentó una idea que es de gran utilidad para analizar los derechos vulnerados en el contexto actual:

> El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también del derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él (Corcuera y Guevara, 2001:142).

Esta jurisprudencia da la pauta para afirmar que el derecho a la vida no implica solo el derecho a no ser privado de ella, así podríamos comenzar a afirmar en el presente contexto global que uno de los derechos fundamentales vulnerados sería precisamente: la vida.

Entonces, aunque las violaciones de derechos humanos han sido una realidad cotidiana en el mundo, partimos de que específicamente los derechos a la vida, a la salud y a la salud pública han sido violados frecuentemente desde que llegó la pandemia. Existen otros derechos que han sido vulnerados como el derecho a la libertad de expresión y a la información, entre otros más.

Es importante anotar que además de las cuestiones de salud y salud pública violatorias de derechos humanos hay un complejo contexto de conflictos bélicos o potencialmente bélicos previos al Covid-19 que entrelazan la geopolítica de la guerra y la economía con la de la salud pública. El bombardeo de Israel en contra del territorio palestino de Gaza en plena pandemia pasó prácticamente desapercibido, igual ocurrió con los ataques de Turquía a los suministros de agua del Kurdistán, y en general la guerra que se desarrolla en esa región.

Están también las señales de una intervención armada que la administración del expresidente de Estados Unidos Donald Trump lanzó

sobre Venezuela, esto a pesar de los contagios entre personal naval de los portaaviones y destructores estadounidenses.

En otro campo, está el continuo bloqueo promovido por Estados Unidos, aún para asistencia humanitaria, en contra de Cuba e Irán, y los mini-bloqueos que impuso a Alemania y Canadá, por lo menos en lo que respecta al abastecimiento de mascarillas N95. Habría que agregar también las medidas que han derivado en el reforzamiento de modos de control social, como ocurrió con la ley de seguridad China y sus implicaciones en Hong Kong.

En el campo del trabajo, algo que estamos viendo es que como resultado de la deslocalización del capital, la reproducción de la mano de obra en funciones no es indispensable, existe un ejército de reserva global que en el contexto de la pandemia permite reemplazar a las/os contagiadas/os o muertas/os, como se ha visto en Brasil, India, Sudáfrica, México e incluso en Estados Unidos.

Además de las respuestas, oportunismos y problemas particulares entre los Estados y de los Estados frente a las poblaciones bajo su dominio o influencia, hay situaciones en las que los actos inhumanos han sido un patrón casi global. Las condiciones en las que se encuentra el personal sanitario son preocupantes a nivel mundial. Hasta este momento han muerto por lo menos 3,000 profesionales de la salud, según un informe de Amnistía Internacional (2020). Las condiciones que provocaron su muerte no tienen que ver solo con la protección que debían tener y con las medidas sanitarias que requerían para atender enfermos de Covid-19 sino con represalias de las que han sido objeto. Según el mismo informe del 13 de julio de 2020 estas represalias han sido: desde el arresto y la detención hasta amenazas y despidos. Los países con mayor número de muertes de personal sanitario hasta ahora son Estados Unidos (507), Rusia (545), Reino Unido (540, incluidos 262 asistentes sociales), Brasil (351), México (248), Italia (188), Egipto (111), Irán (91), Ecuador (82) y España (63).

Otra situación que se está viviendo también a escala global es la que padecen las/os presas/os ante la pandemia. Si de por si la situación

de hacinamiento que se vive en las cárceles en la mayor parte del planeta es muy fuerte, ahora con la pandemia el riesgo de contagio y de muerte es aún más alto. Como lo ha denunciado Zaffaroni (2020) "nos encontramos ante una nueva forma de crímenes de lesa humanidad, como es el caso de las cárceles. Si no se hace nada, se mueren". Desde casos en los que permiten esto por razones políticas como el de Julian Assange, hasta los de las personas presas por delitos comunes, la constante es que los seres humanos que viven en las cárceles parecen considerarse población desechable.

El 13 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia del SARS-CoV-2 llamó a los Estados a enfrentar la grave situación de las personas privadas de la libertad en la región y a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y la integridad de esta población y de sus familias, frente a los efectos de la pandemia del Covid-19, así como a asegurar las condiciones dignas y adecuadas de detención en los centros de privación de la libertad, de conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos (CIDH, 2020). En particular, la Comisión insta a los Estados a reducir la sobrepoblación en los centros de detención como una medida de contención de la pandemia.

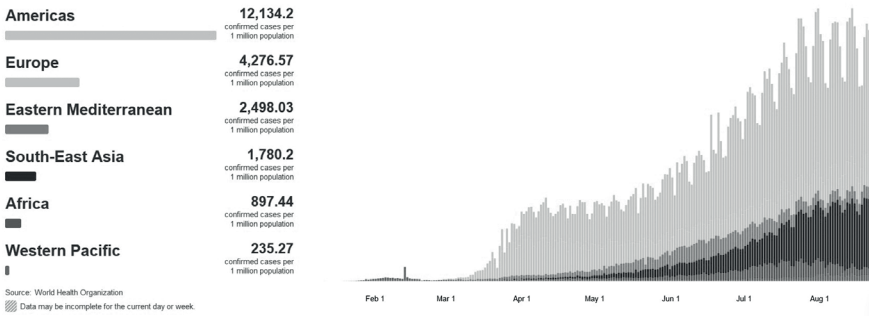
Los centros de detención de migrantes presentan las mismas condiciones que muchas de las cárceles en el mundo y por lo tanto los mismos riesgos de contagio. Esta población creciente en el mundo parece ser también parte de la inhumana lista de desechables por partida doble, tanto por las condiciones que les expulsan de su país de origen, como por las condiciones con las que se encuentran en los países de destino. El Covid-19 está dando la pauta, la excusa perfecta para que se levanten muros como el que Trump impulsó entre América Latina y Estados Unidos, o como la fortaleza que se ha pretendido construir alrededor de Europa para separarlos de sus antiguas colonias en África y Asia. La situación en la que se encuentran las/os migrantes del mundo ante la pandemia es brutal, en estos momentos deberían de ser atendidas/os, no expulsadas/os. La violación del derecho a la vida y a la salud en estos casos ha sido grave y vulnerada sistemáticamente.

Los pueblos originarios (como los de Latinoamérica, de Angloamérica y de otras partes del mundo) o las naciones no estatales o no reconocidas formalmente (como el Kurdistán o Palestina) para sobrevivir se ven ahora forzadas a enfrentar no sólo las amenazas que representan los Estados y los mercados sino también a tratar de contener los contagios y evitar más muertes.

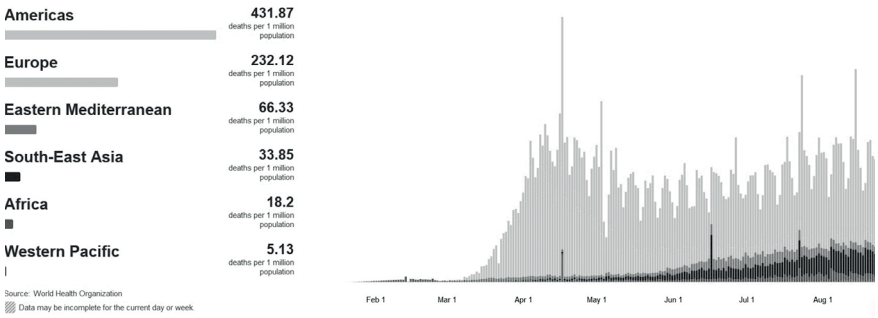
El panorama global es complejo y preocupante, y los procesos que se desarrollan en la pandemia requerirán mucho tiempo de análisis y esperemos que de aprendizajes. Sin embargo, para poder hacer un esbozo de lo que todo esto está implicando es necesario escoger solo algunos casos. No porque sean más importantes sino porque pueden resultar ilustrativos de la conjunción de los elementos que hemos mencionado.

El continente americano: ¿Derechos humanos o desechos humanos?

Después de la diseminación del coronavirus por Asia y Europa, con desenlaces trágicos y poniendo en evidencia la vulnerabilidad humana a nivel global, el epicentro de la pandemia pasó al continente Americano con cifras de contagios y muertes que superaron rápidamente a los demás continentes.



Casos de contagio de COVID-19 por millón de habitantes.
Fuente: World Health Organization



Muertes por COVID-19 por millón de habitantes.
Fuente: World Health Organization

Una característica importante en la mayor parte de Latinoamérica (y en menor medida en Angloamérica) son los altísimos niveles de desigualdad, a pesar de tener algunas de las economías más grandes del mundo. De acuerdo con los últimos datos del índice GINI (World Bank, 2020) en los últimos diez años la mayor parte del continente se ha mantenido entre niveles medios y altos de desigualdad. Los índices GINI miden qué tanto la distribución de la riqueza en un país se desvía de una distribución completamente equitativa, en donde 0% de desviación es el una distribución completamente equitativa y 100% es una distribución completamente inequitativa. Un país puede tener un gran crecimiento económico, un ingreso per cápita promedio muy alto, pero en la realidad eso significa que hay un 10% de la población que concentra el 90% de esa riqueza.

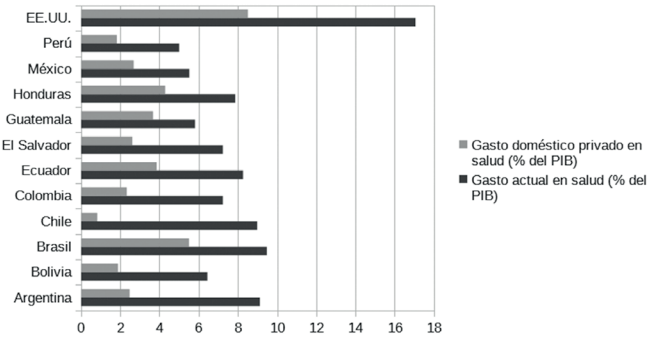
Otra característica del continente americano es el proceso de privatización que han seguido casi todos los países como parte de las políticas neoliberales impulsadas por organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial y que ha convertido el poder adquisitivo en un factor de filtración en el acceso a la sanidad. La salud es uno de los sectores que ha sido tendencialmente privatizado, algo que cobra relevancia al momento de requerirse atención sanitaria de manera masiva, como ocurre en un caso de pandemia.

País	Año reciente	Valor reciente
Argentina	2018	41.4
Bolivia	2018	41.2
Brasil	2018	53.9
Chile	2017	44.4
Colombia	2018	50.4
Ecuador	2018	45.4
El Salvador	2018	36.6
Guatemala	2014	48.3
Honduras	2018	52.1
México	2018	45.4
Perú	2018	42.8

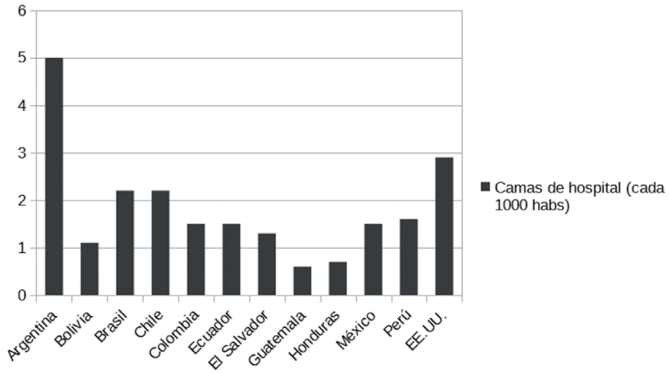
Índice GINI Fuente: World Bank

Además, de acuerdo con las cifras oficiales más recientes, en el continente existen enormes disparidades y deficiencias en la capacidad hospitalaria.

En términos de derechos humanos la situación continental tampoco es alentadora, incluso si sólo se toman en cuenta mediciones cuantitativas muy generales como el índice de fragilidad estatal (Fund for Peace, 2015). De acuerdo con su calificación de violaciones de derechos humanos para los Estados del mundo en 2014, donde 0 es mejor y 10

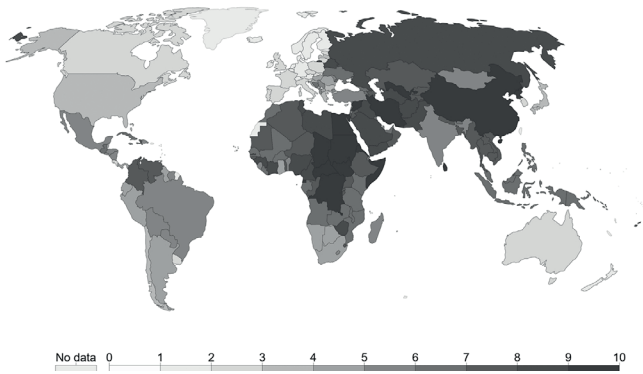


Gasto en salud (% del PIB) vs Gasto privado en salud (% del total de gasto en salud). Fuente: World



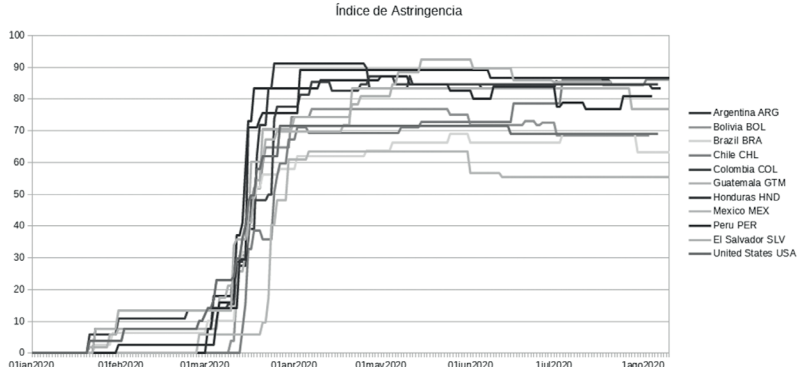
Camas de hospital por cada 1000 habitantes. Fuente: World Bank

peor, y que retoman variables como la libertad de prensa, libertades civiles, libertad política, tráfico de personas, prisión política, persecución religiosa, encarcelamientos, tortura y ejecuciones. Aunque el diseño del índice puede tener un sesgo en cuanto a las variables que retoma, sí muestra una situación bastante preocupante en el continente americano, tomando en cuenta que existen pocos conflictos armados reconocidos oficialmente y la mayoría de los países son presuntamente democráticos, con calificaciones medias (si se excluye Canadá y Uruguay).



Fuente: Fund for Peace (Fragile States Index)

De acuerdo con el Índice de Astringencia (Hale, 2020) de la Universidad de Oxford que mide qué tantas medidas de distancia y restricción de movilidad aplica un país para evitar contactos entre personas y por lo tanto contagios (cierres de centros de trabajo, escuelas, espacios públicos, aeropuertos, transporte público, limitaciones a la circulación territorial, cuarentenas, toques de queda, etc.), en América Latina la respuesta en estos términos ocurre con mayor intensidad entre marzo y abril de 2020 en donde Argentina, El Salvador y Honduras se encuentran entre los países que aplicaron mayores y más estrictas medidas de distancia social y Brasil, Estados Unidos y México las menores.



Fuente: *Oxford COVID-19 Government Response Tracker*

Con este contexto de telón de fondo, en América hay además un sinnúmero de proceso complejos, de conflictos y crisis previas a la pandemia que se agudizan con esta nueva crisis, que han evidenciado graves injusticias, detonado decisiones inhumanas y actos atroces. Aquí abordaremos casos con antecedentes pre-coronavirus, pero que con la pandemia han desembocado en situaciones graves que podrían representar violaciones a derechos humanos y posibles crímenes de Estado.

La cantidad de actos y decisiones inhumanas o potencialmente criminales de los Estados durante la pandemia difícilmente se pueden

agotar en un sólo texto y en un sólo análisis, sobre todo uno que se desarrolla mientras el SARS-CoV-2 sigue siendo el protagonista de la coyuntura global. Lo que tratamos de hacer aquí es presentar algunos casos específicos en algunos países del continente, aquellos que hemos identificado como graves. El propósito no es agotar el análisis y señalamiento de estos actos inhumanos, sino sumar en su impulso.

Elegimos estos casos como una muestra general de las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo, algunas detonadas por la pandemia, otras por enfrentarla y otras que se agravaron por la crisis sanitaria.

Argentina

La *Coordinadora Contra la Represión Policial* e Institucional registró 69 asesinatos y una desaparición forzada que involucran a instituciones o agentes estatales entre el 20 de marzo y el 24 de julio de 2020. De ese total, 22 muertes ocurrieron en cárceles, 14 en comisarías y 24 fueron casos de "fusilamiento de gatillo fácil" (cuando la policía dispara sin clara justificación para hacerlo). Además tres feminicidios que involucran a fuerzas de seguridad, dos más en casos "intrafuerza" (intrafamiliar), dos arrollados deliberadamente por un patrullero, y dos detenidos por la policía que aparecieron muertos días después. A esto se agrega el caso de desaparición forzada en el mes de abril de Facundo Astudillo Castro. El 16 de agosto se encontró un esqueleto que podría ser de Facundo (el cuerpo se encontraba en un grado avanzado de descomposición), su madre, Cristina Castro, señaló que a un lado apareció un zapato tenis como el que él usó la última vez que lo vio, el tenis estaba limpio, como ella dice, esto bien puede ser un mensaje (Pedulla, 2020). Los agentes que cometieron estos actos pertenecían a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires dirigida por Sergio Berni, a la Policía Federal, a la Gendarmería, al Servicio Penitenciario Federal y a los servicios penitenciarios y policías provinciales (CORREPI, 2020).

Bolivia

Bolivia se encuentra con la pandemia en plena convulsión política. Tras el golpe de Estado que llevó al poder a Jeannine Añez, el país se encontraba en una situación precaria, con un régimen que intentaba a la vez consolidar su poder por medios represivos y reestructurar las políticas internas y externas del país de acuerdo con su agenda. Para 2020 estaban previstas nuevas elecciones. El contexto electoral boliviano se combinó con intereses en los recursos naturales del país que significaron el apoyo de empresas trasnacionales al golpe de Estado. Un claro ejemplo de esto es el reconocimiento público que Elon Musk hizo en su cuenta de Twitter en apoyo al golpe, en un país con importantes yacimientos de litio, materia prima esencial para la industria tecnológica.

El Covid-19 evidenció la fragilidad institucional de la administración de Añez, con una situación sanitaria crítica, hospitales desbordados, cementerios saturados y escasez de agua. A la par de ésta situación de crisis sanitaria, la *Asociación Nacional de Prensa* (ANP, 2020) manifestó su preocupación por la promulgación del Decreto 4231 que en conjunto con declaraciones de varios ministros amenazaban con encarcelar a quien difundiera "desinformación", lo que parecía significar que la intención era castigar penalmente a los medios de comunicación que cuestionaran las estrategias de respuesta al coronavirus por parte del gobierno de Añez. Esto complicó aún más el contexto cuando al mismo tiempo el gobierno boliviano pretendía posponer el proceso electoral, algo que detonó grandes movilizaciones.

El contexto político hizo que la pandemia se convirtiera en parte de la pugna electoral, al tiempo que los contagios y las muertes aumentaban en Bolivia sin una respuesta institucional de contención efectiva. Oscar Olivera describía la situación de manera cruda al decir "Los de arriba muestran mucha inoperancia, pillaje y chantaje. La clase política sólo está interesada en su poder, lo último que les interesa es la gente. Tanto en el gobierno como en la oposición hay un aprovechamiento de la desgracia y de la impotencia de la población abandonada a su suerte. La política de arriba es un circo putrefacto" (Zibechi, 2020b).

Brasil

Brasil se encuentra con el coronavirus bajo la administración de Jair Bolsonaro, un presidente que se ha caracterizado por la implantación de políticas autoritarias, cercano al ejército y a las grandes empresas agroindustriales. Su mandato ha sido crecientemente hostil y explícitamente racista hacia las poblaciones indígenas de la región amazónica. En los recientes incendios masivos de la selva, el gobierno de Bolsonaro no sólo tardó mucho en poderlos controlar sino que se negó a recibir apoyo internacional para detenerlos, al tiempo que minimizó la gravedad de las consecuencias ambientales y sociales.

La *Articulación de Pueblos Indígenas de Brasi*l en el diagnóstico de su plan para enfrentar el Covid-19 en Brasil, titulado "Emergencia Indígena" (APIB, 2020), registra 113 pueblos indígenas afectados con 8847 infectados y 365 muertos hasta el 25 de junio de 2020. De acuerdo con la información de la APIB, el SARS-CoV-2 llegó a los territorios indígenas más remotos a través del Ejército y de los médicos y equipos de la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI) del gobierno brasileño. Estas infecciones se dan a la par de los constantes ataques e invasiones de los territorios indígenas por parte del gobierno y empresas interesadas en los recursos que ahí se encuentran.

Desde la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, la situación en la que se encuentran los indígenas del Amazonas es grave, sobre todo desde que se ha comenzado a invadir su territorio. La invasión provocó condiciones parecidas a las que se presentaron en el territorio Yanomami en los ochentas cuando una quinta parte de la población murió de enfermedades después de que un grupo de trabajadores (40 mil *garimpeiros*) inundaron la reserva. La situación en el 2020 es muy similar con los 20 mil *garimpeiros* que hay en la zona (Phillips, 2020). Con la nueva invasión *garimpeiro* Bolsonaro dijo que la reserva es demasiado grande para su población de alrededor de 26,000 indígenas, y que sus riquezas minerales deberían ser explotadas. Es importante anotar que Bolsonaro está denunciado ante la Corte Penal Internacional por genocidio desde 2019 (CADHU, 2019).

Colombia

De acuerdo con la información del *Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz* (INDEPAZ, 2020) desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en 2016, hasta mediados de 2020 se habían cometido casi mil asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. La mayoría de los asesinatos han sido cometidos por sicarios "desconocidos" probablemente vinculados a terratenientes, paramilitares, narcotraficantes y a políticos vinculados con ellos. Más de la mitad de las víctimas son campesinos e indígenas y vinculados a conflictos producidos por la minería, posesión de la tierra, recursos naturales, cultivos ilícitos y narcotráfico. De estos asesinatos, las instancias oficiales han documentado menos de la mitad.

La crisis sanitaria no detuvo los asesinatos, tan solo entre el 6 de marzo, cuando se contabilizó el primer caso de Covid-19 en Colombia y el 8 de agosto de 2020, el INDEPAZ (2020b) registró 114 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en diversas regiones. La mayoría de ellos de la región del Cauca en donde hay procesos organizativos potentes y profundos como el de la *Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca*.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (2020) denunció en marzo la agresión del Ejército Colombiano a su guardia indígena responsable del control territorial en el contexto de la pandemia, en algo que identifican como una estrategia del gobierno colombiano no sólo con la intención de atacar sus territorios, sino de usar esos ataques para propagar el virus entre la población indígena, "… nos declaramos en máxima alerta, por las intenciones de permear nuestro territorios con la guerra y expandir la pandemia".

Chile

En los meses anteriores a la pandemia, Chile se encontraba viviendo masivas movilizaciones detonadas por el descontento hacia el gobierno de

Sebastián Piñeira, pero que se orientaban a la búsqueda de cambios más profundos y que tuvieron una respuesta violenta por parte del gobierno chileno. Durante esas movilizaciones, entre los meses de octubre de 2019 y febrero de 2020, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH, 2020) de Chile documentó 3.765 personas heridas, 500 por balas. Las acciones del Estado derivaron en 1.312 acciones judiciales iniciadas por el INDH, 5 de ellas por homicidios cometidos por agentes estatales, 195 por violencia sexual y 951 por tortura. Un actor central en estas propuestas fue el pueblo Mapuche, que durante años ha denunciado la invasión de sus territorios por parte de empresas agroindustriales y extractivas, y que ha padecido una represión sistemática por parte del Estado Chileno.

Durante la crisis por el SARS-CoV-2, la situación de los mapuches se recrudeció aún más. Desde el 4 de mayo de 2020, 27 presos mapuches iniciaron una huelga de hambre que despertó movilizaciones solidarias, que como respuesta fueron reprimidas. Los presos mapuche fueron excluidos de las medidas mínimas de prevención de contagios. Por otra parte, en la región de la Araucanía, los mapuches ocuparon edificios municipales en protesta por la precaria situación de salud de los 27 presos. En esa misma región, el 4 de junio el vocero de la comunidad *We Newen*, Alejandro Treuquil, fue asesinado y en la agresión otras tres otras personas resultaron heridas (Comunidad Autónoma We Newen, 2020). El 1 de agosto un grupo de civiles armados, con la aquiescencia de la policía, entraron en los edificios violentamente y agredieron a las mujeres, hombres y menores que se encontraban en el interior (Vocería de Machi Celestino Cordova, 2020). El pueblo Mapuche denunció que la policía permitió que ocurrieran los hechos aún cuando los agresores se encontraban violando el toque de queda con motivo del estado de emergencia. Los territorios Mapuche en esa región han sido recurrentemente agredidos por fuerzas estatales y por grupos empresariales interesados en el control de los recursos que se encuentran en esos territorios.

Ecuador

La situación de Ecuador fue difundida como ejemplo de horror en la pandemia. Las imágenes de los cadáveres en las calles de Guayaquil

mostraban un sistema de salud y de los servicios públicos forenses totalmente colapsados. Sin embargo, la situación no era exclusiva de esa ciudad ecuatoriana, es un problema nacional que tiene sus causas inmediatas en decisiones económicas que derivaron en una crisis estructural.

Desde 2019 el gobierno de Lenin Moreno inició la aplicación de políticas de ajuste del gasto y de la inversión pública, así como de las condiciones laborales y del sistema de pensiones, en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo Monetario Internacional (SAF) suscrito febrero del 2019. Estas políticas precarizaron aún más a los sectores de la población de por sí empobrecidos, beneficiando a empresas trasnacionales, bancos entre otros sectores acomodados. Entre las medidas está la contracción del sistema de salud pública. De acuerdo con datos del *Parlamento Plurinacional de los Pueblos* (2020), el presupuesto de salud pública se redujo de 353 millones de dólares en 2017 a 186 millones en 2019. Desde 2017 el gobierno ecuatoriano había condonado 4,500 millones de dólares en impuestos a las 500 empresas más grandes. A la par, en marzo de 2020, el gobierno de Moreno decidió realizar un pago de 324 millones de dólares de su deuda externa, precarizando aún más al país y sus posibilidades de enfrentar la pandemia.

Según la OIT en Ecuador en 2019 el número de personas que perdieron su empleo era de 311, 000 y calculan que para finales de 2020 la cifra sea de 850,000 nuevos desempleados. A pesar de esto, para enfrentar la pandemia, el gobierno de Moreno creó la "Ley Humanitaria", para crear un impuesto de facto (contribución) al trabajo que implicaría que los/las trabajadores/as ecuatorianos absorbieran el 60% del costo de la crisis.

El Salvador

Desde inicios de marzo de 2020, la administración del presidente Bukele de El Salvador estableció centros de cuarentena en donde confinaron a viajeros que llegaban al país durante 30 días sin medidas de sanidad ni prevención de contagio adecuadas. En esos mismos centros retienen a personas detenidas por las fuerzas militares y policíacas por violar

la orden de quedarse en casa impuesta en la declaración de Estado de Emergencia y el posterior Estado de Excepción. De acuerdo con la información del Gobierno de el Salvador (2020), hasta el mes de agosto más de 16 mil personas habrían sido retenidas en los 23 centros de cuarentena de las cuales 2400 habrían sido retenidas por violar la cuarentena. De acuerdo con el informe sobre violaciones de derechos humanos en la respuesta al Covid-19 del *Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador* (CISPES, 2020) una gran cantidad de estas detenciones fueron arbitrarias y con un uso excesivo de la fuerza, abusos que no sólo no han sido investigados o frenados por las autoridades sino que han sido alentados por el propio presidente Bukele, violando incluso la decisión de la Suprema Corte de que sólo se detuviera a quienes se considerara infectados.

En paralelo a esto, la administración de Bukele se ha mostrado hostil ante periodistas y radios comunitarias y han obstaculizado el acceso a la información sobre la respuesta gubernamental a la pandemia. Como nota complementaria, Bukele solicitó un préstamo de 389 millones de dólares al FMI al tiempo que redujo en 33 millones el presupuesto de salud.

Estados Unidos

Lo que Gordon y Green (2020) llaman racismo estructural y que otros han llamado racismo sistémico en Estados Unidos quedó evidenciado con el surgimiento del movimiento social Black Lives Matter después de que George Floyd fuera asesinado a manos de policías. El hecho de que este movimiento se haya convertido en la protesta social más grande en la historia estadounidense (Brooks, 2020) y que esto se haya dado en el contexto de la pandemia resulta sumamente importante. Como dice Brooks, ese movimiento empieza a cuestionar los fundamentos del sistema estadounidense y su injusticia económica, social y política protegida a través de la violencia racista oficial. Como hemos podido ver la serie de burdas declaraciones de altos funcionarios y la ejecución de actos inhumanos se han vuelto cotidianas en Estados Unidos y se han agudizado con la pandemia.

Tras el asesinato de George Floyd y las crecientes protestas del movimiento Black Lives Matter (entre otros) en las principales ciudades de Estados Unidos, la administración Trump decidió utilizar a la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés), perteneciente al Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security) y que incluye a la Patrulla Fronteriza, como policía federal para enfrentar a los manifestantes. De acuerdo con la *Unión Americana de Libertades Civiles* (ACLU, 2020), la CBP y la Patrulla Fronteriza han actuado como policía secreta durante años, llevando a cabo arrestos violentos de migrantes sin papeles en todas las ciudades estadounidenses. Tanto la ACLU como otras organizaciones de derechos humanos denunciaron detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas federales desplegadas por el gobierno del ex-presidente Donald Trump. A esto se agregó el uso también de la agencia de Ejecución de Aduanas e Inmigración (ICE) que ha sido responsable de las brutales deportaciones de migrantes durante los años recientes.

De acuerdo con información de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) del gobierno estadounidense la población negra fue desproporcionadamente más afectada con mayor necesidad de hospitalización. Muchas de las personas que no pudieron dejar de trabajar y que se contagiaron del virus han sido en su mayoría negros y latinos. De acuerdo con los datos del Rastreo Racial del Covid-19 en Estados Unidos (The Atlantic, 2020), la población negra murió 2.5 veces más que la población blanca (con 74 muertes por cada 100 mil habitantes) seguidos por la población indígena y la población latina (con 40 muertes por cada 100 mil habitantes cada una) y por la población de origen asiático (con 31 muertes por cada 100 mil habitantes).

Es importante resaltar que la CBP se convirtió en una fuerza militarizada, violenta y con un alto grado de impunidad, la ACLU tiene un registro de 102 personas asesinadas en los últimos diez años en encuentros con este cuerpo de seguridad y muertes en custodia por las cuales ningún agente ha sido enjuiciado. Los/las agentes de la CBP incurren en actividades criminales fuera de sus tareas oficiales cinco veces más que cualquier otro cuerpo policíaco. El secuestro, violación o desaparición de niños y familias de migrantes a manos de la Patrulla Fronteriza es recurrente.

Esta agudización de la violencia interna en Estados Unidos se da en medio de un contexto más amplio de hostilidad racial y social que ha sido alimentado por la administración del ex-presidente Trump. Un ejemplo claro ha sido su constante hostilidad hacia la población migrante sin papeles, que no ha disminuido con la crisis sanitaria. La expulsión de niños y niñas migrantes se ha vuelto cada vez más crítica, entre marzo y abril al menos 915 menores de edad fueron expulsados y al menos 60 fueron deportados desde el interior del país en el mismo período, de acuerdo con cifras oficiales. De acuerdo con reportes de diversas organizaciones las deportaciones han sido en plena madrugada y sin que los guardianes legales de las niñas y niños fuesen notificados. Algo que se volvió cada vez más evidente es que Trump estaba aprovechando la crisis del coronavirus para endurecer sus políticas migratorias y medidas de deportación.

El caso de Estados Unidos es particularmente complejo por la cantidad de abusos simultáneos que se cometieron y por el impacto regional y global que tienen.

Guatemala

En Guatemala el gobierno del presidente Alejandro Giammattei declaró entre junio y julio de 2020 Estado de Sitio en varios municipios de la región Q'echi' y Garínagu (garífuna) de los departamentos de Izabal, Alta Verapaz y Sololá. Estas declaraciones fueron rechazadas por decenas de organizaciones, sobre todo porque la normatividad del Estado de sitio es la misma que existía durante el conflicto armado interno, dentro de la Ley de Orden Público de 1965, y presenta condiciones para que las fuerzas de seguridad cometan abusos.

El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH, 2020) y la U*nidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala* (UDEFEGUA, 2020) documentaron y denunciaron que el Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil cometió detenciones arbitrarias, hizo allanamientos ilegales, efectuó interrogatorios incluso a menores de edad y agredió a mujeres.

Honduras

La situación en Honduras era ya compleja antes de la llegada del SARS-CoV-2, el contexto político que detonó el golpe de Estado se ha agudizado. Como lo ha documentado el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, se exacerbaron los conflictos territoriales, al mismo tiempo el uso de la policía militar para implementar las medidas de distanciamiento desencadenó una ola represiva violenta de detenciones arbitrarias, se usaron armas de fuego en contra de manifestantes y se cometió por lo menos un homicidio a manos de agentes estatales como lo denunciaron las organizaciones que integran la Mesa de Derechos Humanos en Honduras (2020).

Además de la situación general, la población Garínagu (garífuna), que ya sufría condiciones cercanas al apartheid con condiciones de enorme discriminación y el despojo de sus tierras y comunidades con fines turísticos, durante la cuarentena la violencia en su contra se ha acentuó con la aquiescencia y posible colusión del Estado, a pesar de la existencia de una sentencia de la CIDH que exige su protección. La Coalición contra la Impunidad denunció a finales de julio de 2020 la desaparición forzada de cuatro hondureños garínagu y la muerte de otros dos, todo esto enmarcado en el contexto de violencia sistemática en contra de estas comunidades de la costa caribeña (Dávila, 2020).

México

El gobierno del expresidente Felipe Calderón desató una guerra en contra de los cárteles del narcotráfico a poco tiempo de ser nombrado presidente en un proceso electoral muy cuestionado con funcionarios ahora enjuiciados por vínculos con el crimen organizado y que ha derivado en cientos de miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos. Ésta es la misma estrategia que continuó con la administración de Enrique Peña Nieto. En la gestión de López Obrador la militarización de la seguridad pública tomo un nuevo giro con la creación de la Guardia Nacional en 2017, compuesta en su mayoría por policías militares, navales y federales y bajo un mando compartido militar y civil.

Esto se enmarca en un crecimiento de la influencia militar, que con la pandemia se acrecentó. Es importante señalar que dentro de la crisis de violencia que se vive en México y con la crisis sanitaria tomando fuerza, el 11 de mayo de 2020 el congreso legalizó la presencia de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad hasta el año 2024, presuntamente como una medida para dar tiempo a la consolidación de la Guardia Nacional.

Desde el inicio de la pandemia en México, el presidente López Obrador se negó a detener la construcción de grandes proyectos de infraestructura que presentaban fuerte resistencia local y nacional, específicamente el aeropuerto de Santa Lucía (obra en manos del Ejército Mexicano), la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el Corredor Transístmico (proyecto iniciado desde la administración de Vicente Fox en el marco del Plan Puebla Panamá y continuado en las siguientes gestiones). En los cuatro casos, y sobre todo en los dos últimos, proyectos que ya representaban una amenaza para el medio ambiente y para poblaciones locales y sobre las que el gobierno mexicano había establecido una estrategia que derivaría en la confrontación entre actores locales.

El ejemplo más claro y brutal durante la primera etapa de la pandemia fue la masacre de 15 personas en San Mateo del Mar el 21 de junio de 2020, en la que un grupo de indígenas Ikoot que se dirigía en autobús a una reunión informativa fueron detenidos en un filtro sanitario para después ser atacadas con armas de fuego por un grupo armado perteneciente a la policía municipal. Tras el ataque las autoridades Ikoot solicitaron la presencia de la Guardia Nacional. Al regresar a su comunidad, Huazatlán del Río, la agencia municipal estaba tomada por un grupo armado. Ante esto la Guardia Nacional no sólo no se quedó a resguardar a la población, sino que salieron del lugar agrediendo a las personas que les pedían ayuda (Asamblea de San Mateo del Mar, 2020).

De acuerdo con los comunicados de las comunidades afectadas, que publica el Congreso Nacional Indígena (Alcaldía Único Constitucional San Mateo del Mar, 2020), el retén donde se dio la emboscada, que aparentaba ser un filtro sanitario por el Covid-19, había sido instalado por el presidente Municipal Bernardino Hinojosa Ponce y por su asesor Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, quién, además es socio de la empresa

Construcciones Airad y administrador del Grupo Constructor Pritzker dedicados a proyectos de infraestructura y que ha sido protagonista de varias agresiones similares en los últimos cinco años. En esos mismos documentos se encuentran comunicados denunciando agresiones armadas por ese mismo grupo desde principios de mayo de 2020, advirtiendo la posible escalada de violencia y solicitando la acción preventiva gubernamental que nunca llegó.

En San Mateo del Mar había ya una fuerte resistencia al proyecto industrial y de infraestructura transístmica desde sexenios anteriores, en particular contra un proyecto de energía eólica que afectaba a varias comunidades. Asimismo, la consulta que realizó la administración de López Obrador sobre la continuación y desarrollo del Corredor Transístmico fue fuertemente denunciada por privilegiar la consulta en comunidades que no serían directamente afectadas por los proyectos.

Vale la pena anotar que el ambiente político en torno a la crisis sanitaria es complejo pues se enmarca en un contexto de gran agresividad de partidos de oposición al partido oficial y grupos políticos vinculados al expresidente Calderón y algunos gobernadores han tratado de utilizar la respuesta al SARS-CoV-2 con propósitos electorales, lo que ha detonado que las políticas en torno a la pandemia empiecen a estar condicionadas por el conflicto entre partidos políticos, afines o contrarios a la presidencia de López Obrador.

Al mismo tiempo, el 7 de julio el presidente López Obrador realizó su primer viaje internacional con Estados Unidos como destino para reunirse con el entonces presidente Trump con motivo de la firma del Tratado México Estados Unidos Canadá (TMEC). En ese viaje, la comitiva mexicana incluyó a varios de los empresarios más ricos de México, incluidos Carlos Slim, el hombre más rico de México con importantes inversiones en proyectos mineros y Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios que se negaron a adoptar las medidas de astringencia. Este viaje reflejó el peso de la economía en medio de la pandemia, en conjunto con el juego electoral tanto en Estados Unidos en dónde Trump pretendía lograr la reelección en noviembre de 2020 y en México con las elecciones del congreso en 2021.

Además, es importante resaltar que la crisis humana que se vive en México desde hace más de una década se recrudeció a nivel de los hogares mexicanos con la pandemia. Aumentó la violencia contra las mujeres y las y los niños. Según la Red Nacional de Refugios los últimos dos meses de 2020 cada hora una mujer pidió apoyo, fueron atendidas 11 mil 132 mujeres con sus hijos, de las cuales 75 por ciento fueron agredidas por sus parejas o ex parejas. Los feminicidios, que ya eran de por sí alarmantes, con el confinamiento se intensificaron y el silencio gubernamental de la administración de López Obrador en torno a la problemática fue igual que el de los sexenios anteriores.

Perú

El 27 de marzo de 2020 el congreso promulgó la "Ley de protección policial" que había sido aprobada por la legislatura anterior en julio de 2019. La nueva ley implicaba una actualización de normas anteriores que protegen a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de Perú de consecuencias penales por provocar lesiones o muerte en el ejercicio de sus funciones. Entre las objeciones que manifestaron numerosas organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH, 2020) hay dos matices de la Ley **Nº 31012** que resultan preocupantes: el primero es que impide a los jueces dictar prisión preventiva a los agentes, aún cuando exista riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación, lo cual puede en los hechos favorecer condiciones de impunidad; el segundo es que se deroga el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza.

Este último elemento, aunque no exime al Perú de la normativa internacional en la materia, sí significa eliminar un candado legal a los abusos por parte de la policía y el ejército y otorga un cheque en blanco a la violencia por parte de los cuerpos de seguridad que acentúa un contexto de excepcionalidad producto de la emergencia sanitaria.

¿Crímenes de Estado en la pandemia?

Se suele tener la idea de que un crimen de Estado se comete solo bajo regímenes explícitamente autoritarios o en situaciones de guerra, pero no. Generalmente implican actos que por su naturaleza se ocultan porque quien los cometió tiene a su mando el aparato punitivo, la impartición de justicia y el uso del monopolio de la fuerza, es decir que quienes los cometen tienen como garantía la impunidad. Por eso la necesidad de señalar esos actos radica en la urgencia de nombrar lo que normalmente no es nombrado.

Después de analizar el conflicto y la discusión por la que atraviesan hoy los derechos humanos es importante pensar en cómo se pueden empezar a nombrar aquellos actos. Actualmente casi cualquier persona en cualquier parte del mundo reconoce que los Estados cometen violaciones de derechos humanos. Existe toda una aceptación respecto a la existencia de esa realidad. Pero si se pregunta si el Estado cometió un crimen entonces puede haber duda, rechazo o desconcierto. Por eso es necesario retomar algunas ideas sobre los crímenes de Estado.

Los crímenes de estado son prácticas desviadas estatalmente organizadas (Green y Ward, 2004) que incurren en la violación de los derechos humanos. El término desviación es el comportamiento que infringe una regla, en este caso una regla estatal. Para Green y Ward se da una práctica desviada cuando existe cierta aceptación de esa regla, cuando se interpreta ese acto como una violación de la regla y hay disposición de aplicar sanciones importantes o significativas contra el acto que violó la regla.

En muchos casos, y claramente en la crisis del Covid-19, esa desviación es programada porque responde a una lógica de *triage social*. La desviación programada sumada a la muerte como esencia del necrocapitalismo produce la gradualidad de la muerte social. Las redes de poder que se alimentan del sistema capitalista-colonial necesitan del control de la vida y de la organización y la programación de la muerte para sostenerse, necesitan establecer las condiciones de excepción para que los Estados cometan crímenes y no existan consecuencias ante esos actos.

Estos crímenes son estatalmente organizados, es decir actos legalmente señalados como criminales que son cometidos por funcionarios estatales en el desarrollo de sus funciones (Chambliss, 1989). No se les puede ver como actos aislados o individuales. Bailone (2017) identifica estos como crímenes de poder, y los distingue de los crímenes de los poderosos como aquellos que cometió un individuo que es parte de la estructura estatal. Refiriéndonos a los crímenes ejecutados desde la estructura de poder estatal existe un debate en torno al castigo que hay respecto a estos. Se les juzga en lo individual, cuando se les debería de juzgar en lo individual y estructural porque generalmente hay una relación entre los actos criminales y la cadena de mando. Hasta ahora no se pueden juzgar entes abstractos, aunque deberían de comenzar a sentarse modos para que esos actos sean juzgados de otro modo. Para Atiles-Osoria (2016) cuando estos crímenes son investigados y condenados se enfatiza en los individuos que cometieron la acción, no se condena el sistema ni las estructuras gubernamentales que generaron esas acciones y así se despolitiza la criminalidad estatal. Desde esa perspectiva politizarla sería darle sentido a que los actos son estructurales y se han posibilitado no solo por el Estado, sino como estamos viendo a nivel global por la implantación de un sistema que está implicando muerte y que está basándose en desechar gente.

Los crímenes de Estado se cometen bajo el peso de un discurso justificante (Zaffaroni, 2017), muchas veces en nombre de un "bien general". Esos actos llevan por delante la negación de quienes los han ejecutado (neutralización) que se manifiesta desde la negación literal "no pasó nada", la negación interpretativa "lo que ocurrió es realmente otra cosa", hasta la negación implicatoria "lo que sucedió es justificado" (Cohen, 1955).

Otra característica importante es que los crímenes de Estado causan más daño que los crímenes individuales porque éstos muchas veces generan daños masivos, daños que acaban con la vida de mucha gente o que la lesionan y le causan sufrimientos.

Ward (2013) sugiere las siguientes preguntas para responder si se está ante crímenes de Estado:

1. ¿El presunto comportamiento criminal es desviado en el sentido en que cierta expectativa social significativa condena el comportamiento y presiona al Estado para que desista de ese comportamiento?

2. ¿La desviación es organizacional, por ejemplo, llevada a cabo en la búsqueda de los objetivos organizacionales de una agencia estatal?

3. ¿El comportamiento viola los derechos humanos?

La combinación entre las declaraciones de emergencia y la lógica del *triage social* pareciera dar la pauta perfecta para que la ejecución de actos atroces tenga una justificación tal que las decisiones inhumanas se expliquen con cierta normalidad y generando aceptación. Dentro de esta dinámica es necesario detenernos para preguntarnos si los actos cometidos en esa dinámica pueden estar configurando crímenes de Estado. Esto no significa que en todos los casos se estén cometiendo crímenes de Estado, pero hay elementos claros de violencia directa y estructural y de responsabilidad del Estado en ellas, pero por su gravedad y por la crisis coyuntural, resulta importante señalarlos y en otro momento sería importante profundizar en sus implicaciones específicas y en las acciones necesarias para detenerlos.

En los casos en los que los Estados han optado por la economía por encima de la vida de la gente no estamos ante violencia de Estado, aunque bien se le podría encuadrar en un tipo de violencia estructural (Gordon y Green, 2020), hay casos en los que la violencia la ejercen directamente agentes estatales y hay combinaciones entre ambos con la participación de agentes estatales y no-estatales.

La combinación entre las medidas de astringencia social que muestran los índices con el tipo de agresiones y violaciones de derechos humanos dan indicios de las perspectivas de *triage social* con las que se aborda la emergencia sanitaria. En unos casos se enfrenta priorizando la economía y se define como desechable a la población que los Estados consideran que obstaculiza objetivos económicos o que es reemplazable dentro de la actividad económica. En otros se prioriza el control de la movilidad y cualquiera que desafíe o no se someta a ese control es desechable,

sobre todo si es parte de poblaciones previamente definidas como desechables, es decir, las y los de abajo. En ambos casos el elemento de control poblacional se acentúa con la emergencia para contener o eliminar a poblaciones que no responden, resisten o se rebelan a los propósitos de quienes detentan el poder del Estado y de quienes utilizan indirectamente el poder del Estado (el mercado).

Algo que resalta es que en los tres países con menor índice de astringencia (Brasil, México y Estados Unidos) fueron en los que los casos de violencia tienen que ver con violencias estructurales derivadas de intereses económicos y aspectos culturales como el racismo. En contraste, los tres países con mayores índices de astringencia (Argentina, El Salvador y Honduras) es en donde la violencia fue cometida directamente por agentes estatales. Esto pareciera indicar que la respuesta de los Estados a la crisis sanitaria tiene una correlación (o tal vez causalidad) con el tipo de violencia que ejercen directa o indirectamente, por agendas explícitas o dinámicas estructurales.

En algunos casos deliberadamente la decisión de los Estados ha sido sacrificar la vida de la gente, por locura, interés económico o electoral, una versión trágicamente caricaturesca son las frases como "Los abuelos están dispuestos a morir para no dañar la economía" del vicegobernador de Texas, o la ilustre frase de Bolsonaro al inicio de la pandemia, "todos moriremos algún día".

Aunque en este texto resaltamos el caso de los feminicidios en México es una realidad continental si no es que mundial. Como dice Segato (2006), los feminicidios son crímenes del patriarcado y estos a su vez son claramente crímenes de poder. Crímenes de poder y crímenes de Estado se entrelazan, los intereses, los silencios cómplices, la impunidad genera las condiciones para que ese tipo de crímenes sigan ocurriendo y no pase nada. Así en este contexto de pandemia lo atroz de esas prácticas normalizadas se hace más crudo e intenso. A pesar de la creciente condena a los feminicidios y las potentes movilizaciones feministas, la lógica patriarcal del Estado hace que violencia de género siga tendiendo hacia la condena cosmética y la normalización institucional. Los feminicidios se convierten en muertes colaterales de

la pandemia, que se intensifican con las medidas de confinamiento y se invisibilizan institucionalmente.

Lo que hemos visto, las imágenes que llueven en medios y redes sociales de los cementerios que desbordan y las filas y filas de ataúdes no son provocados solo por la pandemia, sino como mencionamos antes, por la implantación de un sistema que sacrifica vidas y que para funcionar necesita hacerlo. Como dicen Gordon y Green (2020), la crisis generada por la pandemia también expone los crímenes estructurales de los gobiernos. Con estructurales hacen referencia a las medidas que los estados han instituido contra sus propias poblaciones, esa criminalidad tiende a precipitar la muerte social, que es gradual. Desde 2004 Ward y Green se plantearon que en diversos desastres naturales el estado había sido culpable de acciones criminales y prácticas negligentes sobre todo relacionadas con las causas estructurales preexistentes.

Las expectativas de que los gobiernos surgidos de procesos de izquierda, los llamados gobiernos progresistas funcionaran radicalmente distinto a aquellos provenientes de las derechas o los múltiples y ambiguos "centros" han resultado en grandes decepciones, más allá de algunos matices, algunos más relevantes que otros. Aunque las personas y grupos que llegan a convertirse en gobierno pueden modificar ligeramente las trayectorias de los Estados y de la dinámica social, están sujetos al mismo sistema, se vuelven parte de ese sistema, para llegar al poder y sostenerse pactan, acuerdan, responden a la misma dinámica. Algo que ha mostrado la pandemia es que los procesos que llevan a lógicas de *triage social* y a crímenes de estado no dependen de la ideología de unos cuantos funcionarios públicos, son un problema estructural, es un sistema que se alimenta del control y la gestión de la vida y la muerte. Un sistema que saquea, despoja, deja sin territorio, sin recursos, sin sistemas de salud, sin vida. Planteado de una manera más simple, como lo han dicho muchas y muchos antes, no se trata de izquierda contra derecha, es de los de arriba contra los de abajo.

Si consideramos que la pandemia está demostrando una situación ambiental que podría repetirse debemos de actuar en la lógica de sentar precedentes, no legales sino sociales, sentar actos de condena colectivos

que cierren la puerta a que cada vez sea peor. La tendencia que ahora vemos de normalizar lo atroz debe ser detenida. Bolsonaro y Piñeira ya están estableciendo leyes que impiden que sus actos durante la pandemia sean juzgados. Entonces, las piezas están puestas. Decidir qué se puede aceptar como normal y qué no es algo vital y básico para enfrentar la crisis humana que atraviesa el planeta.

De los casos revisados emergen algunos patrones generales. Por una parte, se hace evidente la incapacidad Estatal para enfrentar las consecuencias sociales de la pandemia, tendiendo hacia formas autoritarias y arbitrarias de toma de decisiones, más allá de las cuestiones específicamente sanitarias y justificadas mediante discursos de triage social. Por otra parte, hay una tendencia a aprovechar las condiciones de vulnerabilidad social de la crisis sanitaria para avanzar en agendas que afectan a comunidades y sectores de la población que en el fondo consideran desechables, para salvaguardar el sistema económico capitalista o en favor intereses de minorías poderosas.

Por otra parte se mostraron los intereses electorales y de abuso de poder que minimizan la pandemia porque no les ayuda a continuar con sus campañas provocando que el modo de responder a la crisis sea básicamente sacrificando a la población. Hay los casos en los que la pandemia dio la pauta perfecta, la excusa para que el genocidio se disfrace y la causa de la muerte sea atribuida a hechos naturales, como parecen indicar con mayor claridad los casos de Brasil y Colombia. Para esto, los Estados cometen actos injustos y en muchos casos inhumanos, que además constituyen violaciones de derechos humanos y potencialmente crímenes de Estado, que en un ambiente de excepción como el que presenta una emergencia sanitaria de estas dimensiones permite encontrar justificaciones para actos que en otro momento se considerarían atroces.

La condena social a estos actos se ha manifestado de distintos modos, desde las protestas masivas en Estados Unidos, Bolivia y Chile, hasta la respuesta de desconfianza explícita de comunidades al protegerse solas por la historia de abusos en su contra por parte de policías y militares. Una particularidad en la pandemia es que hay además un amplio porcentaje de

la población (mayoritariamente de clase media urbana) que se mantuvo en confinamiento, obligado o autoimpuesto, que desde el encierro manifiestan regularmente su descontento a través de las plataformas electrónicas.

Otra fuente de protesta muy relevante ha surgido de los médicos y del personal sanitario en casi todo el mundo, reclamando no sólo condiciones laborales y de seguridad mínimamente dignas para poder cumplir con su trabajo en la primera línea, sino también cuestionando las decisiones de quienes gobiernan.

Pero las preguntas y puntos expuestos anteriormente en torno a los crímenes de Estado son preguntas abiertas para ir trazando una ruta de respuesta, para que desde diversas geografías podamos caracterizar, identificar y señalar esos crímenes de Estado y que nos enlacemos para compartir y actuar.

¿Qué sigue?

En este texto no hemos abordado las contradicciones que también ocurren en el abajo, en la población que de uno u otro modo responde como ha podido y con lo que puede responder. No se puede esperar que millones de personas que viven al día dejen de trabajar y se encierren a morir de hambre. Eso ha demostrado la desigualdad ya muy mencionada en este texto, el contraste tan fuerte que se dio entre los que podían permanecer en aislamiento y los que no puso mucho a pensar en el tipo de relaciones y comunidades que debemos de construir. Por otro lado, también hubo muchas personas que pudiéndose encerrar para evitar contagios siguieron saliendo sin entender que el salir podría provocar más contagios y que eso era una decisión individual con implicaciones para las colectividades en su entorno.

Se hizo visible que la tendencia a asumir que la amenaza es externa al círculo social de cada persona, así como una costumbre de impunidad y privilegio han llevado a las élites a asumirse inmunes al virus o a sus

efectos, sea por creer que el tener acceso a servicios de salud privados puede favorecerlos o porque asumen que quienes los rodean no tienen las mismas características biológicas que ellos. Pareciera que existe la creencia de que el dinero, las conexiones políticas o las jerarquías sociales pueden permitirles controlar el virus o eximirlos de su responsabilidad hacia aquellos a los que contagian.

En contraste existe también una reacción que combina la necesidad de socialización, de consumo y de delegación en el Estado de su sentido de prudencia frente a los contagios potenciales. Esto lleva a amplios sectores de la población a decidir sobre su movilidad a partir de declaraciones o decretos gubernamentales más que desde la información concreta sobre el número de contagios.

Además, está la población que durante la pandemia tenía que trabajar por estar en sectores esenciales o en empresas que no pudieron o se negaron a cerrar temporalmente, y la que sobrevive del más amplio sector laboral del continente, la economía informal. Para estos sectores hubo condiciones mínimas o inexistentes de protección, lo que también influye en su percepción sobre las medidas sanitarias. Hay que recalcar que fueron también los sectores más afectados, en términos de salud y económicos.

La supervivencia en este contexto quiere decir algo muy distinto para cada sector. Para unos significa mantener su estado de excepción y de inmunidad a los males de la sociedad, y para otros significa seguir sobreviviendo a todos los males de la sociedad, de los cuales la pandemia es uno más o tal vez el menor.

Lo que es innegable en este momento es que el virus es un mal que ha golpeado a toda la humanidad y que hizo explícita la interconexión humana. Una interconexión con varias aristas. No todos los cuerpos pudieron encerrarse y muchos entendieron que la interconexión completamente palpable representa ahora más que nunca nuevas pistas. Otra de las tristes realidades que salió a relucir fueron los grandes porcentajes de población que no entendieron los riesgos de la interconexión que quedó expuesta con este virus. Por otra parte se expuso la importancia de

la otredad, de la dependencia de la vida de cada uno con la vida y las decisiones de todos los demás. La relación dialéctica entre cuidar-me y ciudar-nos se volvió ineludible.

En estos momentos esa otredad necesita atención tanto para percibir lo que nos enriquece como lo que nos vulnera. Por lo contagioso que ha resultado el coronavirus existe el grave riesgo de criminalizar al otro, de profundizar el aislamiento y la desconfianza. En las ciudades la fragmentación ya era un problema profundo que muy posiblemente esté en aumento y corre el riesgo de agudizarse después de la pandemia.

En algunos lugares se manifestaron modos creativos de no dejar solo al otro y de no criminalizarlo. Se organizaron cacerolas comunes, redes de apoyo en las cuales campesinos apoyaron a personas de las ciudades. Muchos esfuerzos independientes de organizar comedores gratuitos, no sin la gran dificultad que implicó ser solidario con el contagio de por medio. La solidaridad más que nunca cuando fue cuerpo a cuerpo implicó en algunos dar la vida.

Otro ejemplo muy interesante es la Nación Wampis de Perú que en el contexto del saqueo y del extractivismo se determinó autónoma en 2015. Los días 8 y 9 de agosto de 2020, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (2020) acordó declarar su territorio, la naturaleza y su biodiversidad como el Hospital Natural de los Wampis. Esta declaratoria incluye la exigencia de respeto al equilibrio ambiental y a los conocimientos que entraña la biodiversidad de su territorio, así como la creación de un Comando Covid-19 encargado con la tarea de afrontar la pandemia con acciones de prevención y atención sanitaria. Todo esto ante la desconfianza de las capacidades e intenciones del Estado peruano.

Como dice Zibechi (2020a) las posibilidades de esperanza surgen de las formas de vida heterogéneas, eso resuena con la crítica a la universalidad que podría ser un modo en común de señalar a los de arriba desde nuestras diversidades; también plantea la idea de que cuando el Estado es genocida, los recursos de los pueblos son el único relevo posible para combatir guerras y enfermedades. Esto ya lo venía gritando el movimiento

feminista de los últimos años, la necesidad de pensar el cuidado en común, que hoy no solo se ve como un acierto sino como una urgencia.

Una señal de alerta, un síntoma alarmante sobre nuestra forma de relacionarnos como humanidad y con el planeta es que al mismo tiempo que estamos padeciendo una crisis global que tiene en sus causas el deterioro ambiental que hemos provocado, los asesinatos y agresiones de defensores del medio ambiente van en aumento y se han normalizado, y las comunidades que se oponen a proyectos que destruyen los frágiles equilibrios del planeta son criminalizadas y olvidadas.

¿Qué sigue?

Cuando vemos las respuestas estatales, la crisis del sistema, con la serie de atrocidades que hemos repasado, más una larga lista de problemáticas que no cabían en estas líneas, surge una imagen: La de una humanidad que viaja toda en un gran barco, el timón lo manejan unos irresponsables, desquiciados, borrachos de poder y ambición que nos llevan directo a una colisión catastrófica. Las preguntas y el desconcierto abundan: ¿Qué hacemos? ¿Saltamos? ¿Peleamos por el timón? ¿Cerramos los ojos? ¿Esperamos un milagro? ¿Buscamos salir de ahí para ir a otra embarcación? ¿Improvisamos un bote salvavidas? ¿Nos lanzamos a nadar solos? La única respuesta que tenemos hasta ahora es que sabemos que ya no podemos seguir por ahí, o es trágicamente claro lo que va a pasar. Seguimos navegando a toda velocidad hacia la catástrofe y hemos agotado todo aquello que parecía funcionar y que por más que intentamos remendarlo, reacomodarlo, sigue siendo igual que lo que nos ha conducido a este punto.

¿Qué sigue?

Para tener esperanza hay que sobrevivir. La esperanza que puede surgir en esta crisis no está en cómo recuperar el rumbo, sino en hacer que

todo tome otro rumbo. El sostener el mismo sistema económico, las mismas relaciones de poder, la mismas relaciones con el planeta llevarán inevitablemente a situaciones iguales o peores. No es posible seguir viendo hacia el mismo lugar, es necesario mirar distinto, relacionarnos distinto. Esto no es un ejercicio de ingenuidad o locura, es la más profunda sensatez, es algo que hacen muchas, muchos en muchas partes del mundo, tan distintas en historias y geografías como la Selva Lacandona o el Kurdistán.

¿Qué sigue?

"Tal vez la pregunta ¿Cuál es la velocidad del sueño?' debería ser acompañada de la pregunta '¿Cuál es la velocidad de la pesadilla?'" (Subcomandante Insurgente Marcos, 2004).

TEXTOS CITADOS:

ACLU (2020) *Border Patrol Violently Assaults Civil Rights and Liberties*, en: https://www.aclu.org/news/immigrants-rights/border-patrol-violently-assaults-civil-rights-and-liberties/ (Revisado el 19 de julio 2020)

AIDESEP (2020) *AIDESEP y sus nueve bases regionales exigimosla protección de las y los defensores indígenas con la ratificación del Acuerdo de Escazú* [Comunicado], en: http://www.aidesep.org.pe/sites/default/files/media/noticia/Pronunciamiento%20AIDESEP27720_v2%20%281%29.pdf

Agamben, G. (2001) *Medios sin fin: Notas sobre la política*, Valencia: PRE-TEXTOS

Alcaldía Único Constitucional San Mateo del Mar (2020, 6 de mayo) *Comunicado del Pueblo Ikoots de San Mateo del Mar, Agencias Municipales y Cabecera Municipal por la incertidumbre e inseguridad que viven en su municipio* [Comunicado], en: https://www.congresonacionalindigena.org/2020/05/06/comunicado-del-pueblo-ikoots-de-san-mateo-del-mar-agencias-municipales-de-huazantlan-del-rio-con-sus-colonias-villa-hermosa-y-san-martin-col-juarez-agencia-de-policia-de-la-col-cuauhtemoc-agenc/ (Revisado el 24 de junio 2020)

Amnistía Internacional (2020) *Global: El personal sanitario, silenciado, expuesto y atacado*, en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/07/health-workers-rights-covid-report/ (Revisado el 18 de julio 2020)

ANP (2020, 12 de mayo) *La ANP de Bolivia expresa preocupación por restricciones a libertad constitucional*, en: http://anp-bolivia.com/la-anp-de-bolivia-expresa-preocupacion-por-restricciones-a-libertad-constitucional/ (Revisado el 2 de agosto 2020)

APIB (2020) *Emergência indígena: plano de enfrentamento da covid-19 no Brasil* [Documento]

Asamblea General ONU (1948). *Declaración Universal de los Derechos Humanos.*

Asamblea General ONU (1998), *Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.*

Asamblea de San Mateo del Mar (2020, 22 de junio) *Comunicado del Municipio y Pueblo de San Mateo del Mar* [Comunicado]

Atiles-Osoria, J. M. (2016). Crímenes de Estado Colonial: Apuntes para el Desarrollo de un Concepto Socio-Jurídico. *Sortuz Oñati Journal of Emergent Socio-legal Studies,* Volume 8, Issue 2, 1-19.

Bailone, M (2017, noviembre) Los fundamentos de la pena en los "Crímenes de Estado: el poder (auto) punitivo legitimado por la criminología crítica", *Revista General de Derecho Penal*, No. 28, 1-20

Beck, U. (2004) *Poder y Contra-poder en la Era Global*, Barcelona: Paidós

Benach, J. (2013) "La salud de todos y sus causas. La salud pública, la equidad y sus causas: ¿de qué depende nuestra salud?". En Cruz Roja (2013) *Comprendiendo el derecho humano a la salud: la importancia de los determinantes sociales de la salud*, Madrid: Prosalus y Cruz Roja Española, 19-30.

Bercito, D. (2020) Pandemia democratizou poder de matar, diz autor da teoria da 'necropolítica', *Gauchazh*. 31 de marzo.

Brooks, D. (2020, 27 de julio) *American curios / Resistencia, La Jornada*, en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/07/27/american-curios-resistencia-4454.html (Revisado el 28 de julio 2020)

CADHU (2019) *Informative Note to the ProsecutorInternational Criminal Court pursuant to Article 15 of the Rome Statute requesting a Preliminary Examination into Incitement to Genocide and Widespread Systematic Attacks Against Indigenous Peoples by PresidentJair Messias Bolsonaroin Brazil* [Documento], en: https://apublica.org/wp-content/uploads/2019/11/e-muito-triste-levar-um-brasileiro-para-o-tribunal-penal-internacional-diz-co-autora-da-peticao.pdf (Revisado el 12 de junio 2020)

CALDH (2020, 19 de julio) *Estado de sitio en Irizabal y Alta Verapaz medida represiva ante la resistencia de los pueblos* [Comunicado]

Castells, M. (1999) La era de la información: Economía, sociedad y cultura. Vol 1: *La sociedad red*, México: Siglo XXI

Chambliss, W. (1989). State-Organized Crime. *Criminology*, Vol. 27, 2, 183-208

Chul Han, B (2020) "La emergencia viral y el mundo de mañana", *El País,* 22 de marzo, en: https://elpais.com/ideas/2020-03-21/la-emergencia-viral-y-el-mundo-de-manana-byung-chul-han-el-filosofo-surcoreano-que-piensa-desde-berlin.html?ssm=FB_CC (Revisado el 25 de marzo de 2020)

CIDH (2020, 20 de marzo) *La CIDH y su REDESCA instan a asegurar las perspectivas de protección integral de los derechos humanos y de la salud pública frente a la pandemia del COVID-19*, [Comunicado] en: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/060.asp (Revisado el 12 de junio 2020)

CISPES (2020) *Informe sobre violaciones de derechos humanos en la respuesta al COVID-19* [Informe], en: http://cispes.org/section/special-report-human-rights-violations-abound-el-salvador-president-bukele-responds-covid-19?language=es (Revisado e 29 de julio 2020)

CNDDHH (2020, 28 de marzo) *Ley de Protección Policial es inconstitucional y puede favorecer excesos*, en: http://derechoshumanos.pe/2020/03/ley-de-proteccion-policial-es-inconstitucional-y-puede-favorecer-excesos/

Cohen, A. K. (1955). *Delinquent Boys: The culture of Gang*. Glencoe: The Free Press.

Comunidad Autónoma We Newen (2020, 5 de junio) Comunicado de la Comunidad Autónoma We Newen ante el asesinato de su Werken Alberto Alejandro Treuquil Treuquil, *Mapuexpress*, en: https://www.mapuexpress.org/2020/06/05/comunicado-de-la-comunidad-autonoma-we-newen-ante-el-asesinato-de-su-werken-alberto-alejandro-treuquil-treuquil/ (Revisado el 18 de julio, 2020)

Corcuera. S y Guevara. J.A. (2001). *Justicia Penal Internacional*. Ciudad de México: Universidad Iberoamericana.

CORREPI (2020) *Represión en pandemia: Al menos 71 asesinatos estatales en 4 meses*, en: http://www.correpi.org/2020/represion-en-pandemia-al-menos-71-asesinatos-estatales-en-4-meses/ (Revisado el 2 de agosto de 2020)

Consejo Regional Indígena del Cauca (2020, 26 de marzo) "La estrategia del Gobierno, con la guerra, vulnerar nuestros espacios para contagiar a nuestra población" [comunicado de prensa], en: https://www.cric-colombia.org/portal/la-estrategia-del-gobierno-con-la-guerra-vulnerar-nuestros-espacios-para-contagiar-a-nuestra-poblacion/ (Revisado el 20 de agosto de 2020)

Dávila, H. (2020, 28 de julio) "CCI: Exterminio y desplazamiento garífuna son para asegurar zonas turísticas", *Pasos de Animal Grande*, en: http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/denuncias/item/2921-cci-exterminio-y-desplazamiento-garifuna-son-para-asegurar-zonas-turisticasLa?fbclid=IwAR0omSRhG9tzOMCFGhsg8dmOmE_xpsHXHerSEiuQ8ezqJPc5wEEEqKmp1S0 (Revisado el 3 de agosto 2020)

Douzinas, C. (2009) What are human rights?, *The Guardian*, 18 de marzo.

Fanon, F. (1973) *Piel negra, máscaras blancas*, Buenos Aires: Editorial Abraxas.

Fariss, C. (2019), Latent Human Rights Protection Scores Version 3, https://doi.org/10.7910/DVN/TADPGE, *Harvard Dataverse*, V1, UNF:6:0sWy9tSpQVpzz2xGoGLtkA== [fileUNF]

Foucault, M. (1991) *Historia de la sexualidad*: La voluntad de saber, México: Siglo XXI.

Fund for Peace (2015) *Fragile States Index* (Human Rights Dimension), en: https://ourworldindata.org/human-rights (Revisado el 28 de julio, 2020)

Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (2020, 9 de agosto) Declaramos nuestro Territorio Integral como Hospital Natural de los Wampis [pronunciamiento], en: https://nacionwampis.com/wampis-declaran-su-territorio-integral-como-hospital-natural/ (Revisado el 20 de agosto de 2020)

Gobierno de El Salvador (2020) *Situación Nacional COVID-19*, en: https://covid19.gob.sv/ (Revisada el 2 de agosto 2020)

Gordon, N. y Green, P. (2020, 21 de abril) Covid-19 and State Crime, *International State Crime Initiative*, en: http://statecrime.org/state-crime-research/covid-19-exposes-state-crime-project/ (Revisado el 2 de mayo 2020)

Green, P., y Ward, T. (2004). *State Crime: Governments, Violence and Corruption.* Londres: Pluto Press.

Hale, T, Webster S, Petherick, A, Phillips, T, Kira, B (2020). *Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government*, en: https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/ (Revisado el 20 de junio 2020)

Hilbert, M. y López, P. (2011). "The World's Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute Information". *Science*, 332(6025), 60 –65.

Hobsbawm, E. (1982) "La clase obrera y los derechos humanos". En: *El Mundo del trabajo*, Madrid: Crítica, 299 – 321

INDEPAZ (2020) *Registro de líderes y personas defensoras de DDHH asesinadas desde el acuerdo de paz*. Del 24/11/2016 al 15/07/2020, [Informe Especial]

INDEPAZ (2020b) *Líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados en 2020*, en: http://www.indepaz.org.co/paz-al-liderazgo-social/ (Revisado el 10 de agosto, 2020)

INDH (2020, 19 de marzo) Reporte, en: https://www.indh.cl/ (Revisado el 4 de agosto, 2020)

International Health Conference (2002). Constitution of the World Health Organization. 1946. *Bulletin of the World Health Organization*, 80 (12), 983 - 984. World Health Organization

Iserson KV, Moskop JC. (2007) *Triage in medicine, Part I: Concept, history and types. Annals of Emergency Medicine*. 49(3), 275–81

Klein, N. (2007) *The shock doctrine.* Toronto: Random House

Klein, N. (2020) Coronavirus Capitalism - and How to Beat It, *The Intercept*, 16 de marzo de 2020, en: https://theintercept.com/2020/03/16/coronavirus-capitalism/ (Revisado el 20 de marzo de 2020).

Laclau, E. (2005) *La razón populista*. México: Fondo de Cultura Económica.

Mbembe, A. (2003) "Necropolitics", *Public Culture*, Volume 15, Number 1, Winter 2003, 11-40.

Mesa de derechos humanos en Honduras (2020, 30 de marzo) *Mesa de Derechos Humanos en Honduras se pronuncia ante la emergencia sanitaria por Covid-19* [Comunicado]

Mignolo, W. (2010) *Desobediencia epistémica. Retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la descolonialidad.* Buenos Aires: Ediciones del Signo

Moskop JC, Iserson KV. (2007) Triage in medicine, part II: Underlying values and principles. *Annals of Emergency Medicin*, 49(3):282–7

Parlamento Plurinacional De los Pueblos (2020) *Minga por la vida* [Documento]

Pedulla, L. (2020, 16 de agosto) Facundo Castro: los hallazgos de una madre y un pescador, y las dudas que trajo el viento, *Lavaca,* en: https://www.lavaca.org/portada/facundo-castro-los-hallazgos-de-un-pescador-y-una-madre-y-las-dudas-que-trajo-el-viento-2/ (Revisado el 20 de agosto de 2020)

Phillips, T. (2020, 10 de abril) "First Yanomami Covid-19 death raises fears for Brazil's indigenous peoples", *The Guardian*, en: https://www.theguardian.com/world/2020/apr/10/first-yanomami-covid-19-death-brazl-indigenous (Revisado el 18 de mayo 2020)

Ramonet, I. (2020) La pandemia y el sistema-mundo, *Le Monde Diplomatique en español*, 25 de abril, en: https://mondiplo.com/la-pandemia-y-el-sistema-mundo (Revisado el 29 de abril de 2020)

Rajagopal, B. (2007) *El derecho internacional desde abajo*, Bogotá: Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos.

Red Nacional de Refugios (2021) *OSC´s presentan radiografía de las violencias contra las mujeres en México* [Comunicado], en: https://rednacionalderefugios.org.mx/comunicados/oscs-presentan-radiografia-de-las-violencias-contra-las-mujeres-en-mexico/ (Revisado el 4 de marzo de 2021)

Rodríguez Azueta, E. (2019) "Seguranzas: La productividad política de los enemigos

y el gobierno del miedo en el estado neoliberal". En Seoane, J. y Roca Pamich, B. (comps.) *Salir del neoliberalismo*, Buenos Aires: Batalla de Ideas.

Rodríguez Lascano, S. (comp.) (2017) *Escritos sobre la guerra y la economía política,* Ciudad de México: Pensamiento Crítico Ediciones.

Rodríguez Lascano, S. (2020) [comunicación personal].

Roitman, M (2020a) Coronavirus, una pandemia muy oportuna, *La Jornada*, 15 de Marzo.

Roitman, M (2020b) *4o Encuentro virtual 'Voces múltiples en REDH - La pandemia y después'* [videoconferencia] https://www.youtube.com/watch?v=LGgqXGmaZT0 (Revisado el 17 de junio, 2020).

Sassen, S. (2007) *Una sociología de la globalización*, Madrid: Katz Editores.

Segato, R. (2006). Que es un feminicidio: notas para un debate emergente. *Serie de Antropología.* Volumen 401. Universidade de Brasilia.

Subcomandante Insurgente Marcos (1997) *Siete piezas de rompecabezas mundial,* México: Ediciones del Frente Zapatista de Liberación Nacional.

Subcomandante Insurgente Marcos (2004, septiembre) La velocidad del sueño. Primera parte: Botas. [Comunicado], en: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2004/10/01/la-velocidad-del-sueno-primera-parte-botas/ (Revisado el 9 de agosto 2020)

Sjoberg, G., Vaughan, T. R., & Williams, N. (1984). *Bureaucracy as a moral issue. Journal of Applied Behavioral Science*, 20, 441-453.

UDEFEGUA (2020, 3 de julio) *Rechazo al estado de sitio en tres municipios de Sololá, Guatemala* [Comunicado], en: https://udefegua.org/comunicados/rechazo-al-estado-de-sitio-en-tres-municipios-de-solol%C3%A1-guatemala (Revisado el 19 de julio de 2020)

UN Commission on Human Rights (1984) *The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights,*

28 de Septiembre, E/CN.4/1985/4, en: https://www.refworld.org/docid/4672bc122.html (Revisado el 16 de julio 2020)

UNEP (2020). *Preventing the Next Pandemic: Zoonotic diseases and how to break the chain of transmission*. Nairobi: UNEP

Ward, T. (2013). El crimen de estado y la sociología de los derechos humanos. *Revista Crítica Penal y Poder*, no 5, Septiembre, pp. 63 – 76

World Bank (2020), *Current health expenditure (% of GDP),* en: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI (Revisado el 20 de junio 2020)

World Bank (2020), *Domestic private health expenditure (% of current health expenditure)*, en: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI (Revisado el 20 de junio 2020)

World Bank (2020), *GINI index (World Bank estimate)*, en: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI (Revisado el 20 de junio 2020)

World Bank (2020), *Hospital beds (per 1,000 people)*, en: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI (Revisado el 20 de junio 2020)

World Health Organization (2020*) WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard,* en: *https://covid19.who.int/* (Revisado el 8 de agosto, 2020)

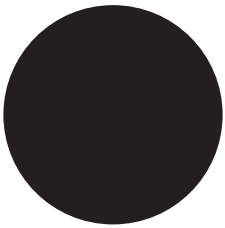
Vocería de Machi Celestino Cordova (2020, 2 de agosto) Comunicado de vocería de Machi Celestino Cordova ante hechos racistas y huelga que cumple 91 días, *Mapuexpress*, en: https://www.mapuexpress.org/2020/08/03/comunicado-de-voceria-de-machi-celestino-cordova-ante-hechos-racistas-y-huelga-que-cumple-91-dias/ (Revisado el 4 de agosto 2020).

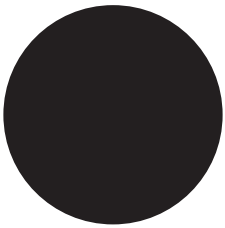
Zaffaroni, R. (2017). El crimen de estado como objeto de la criminología. *Criminología y Sociedad*, Nº. 2 y 3.

Zibechi, R. (2020a) *Tiempos de colapso: los pueblos en movimiento*, Bogotá: Ediciones Desde Abajo.

Zibechi, R. (2020b) "Genocidio silencioso en Bolivia", *Zur,* en: https://zur.uy/genocidio-silencioso-en-bolivia/ (Revisado el 10 de julio 2020)

Zimmer, K. La deforestación da lugar a más enfermedades infecciosas en humanos, *National Geographic*, en: https://www.nationalgeographic.es/ciencia/2019/11/deforestacion-da-lugar-mas-enfermedades-infecciosas-en-humanos (Revisado, 14 de junio 2020).





SEGUNDA PARTE
Los pueblos en movimiento rompen el cerco

8
Las mujeres zapatistas al encuentro de las rebeldías[1]

Las mujeres están en el centro de la resistencia y la construcción de otro mundo por el movimiento zapatista, y serán las protagonistas de la gira que realizarán en Europa donde asistirán a un encuentro global de rebeldías. Ha sido una construcción lenta, trabajosa, pero que supone una verdadera revolución en la situación de las mujeres indígenas, algo que cualquier persona que conozca las comunidades puede corroborar.

Un primer paso fue la Ley Revolucionaria de Mujeres, aprobada en 1993 antes del levantamiento del 1º de enero de 1994. Las comandantas Ramona y Susana recorrieron las comunidades zapatistas durante cuatro meses, dialogaron con las compañeras en asambleas comunitarias y llegaron a acuerdos. Las mujeres comenzaron a acercarse a la organización clandestina porque allí podían vivir niveles de libertad impensables en sus pueblos.

El hecho de que la Ley Revolucionaria de Mujeres sostenga que "tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar", que

pueden "participar en los asuntos de la comunidad y tener cargo si son elegidas libre y democráticamente", a "a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio" y que "ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni por extraños", suponía una revolución individual y colectiva. Para quienes viven en ciudades europeas, puede parecer elemental; pero en territorio zapatista, en 2019, no hubo ninguna mujer asesinada, como destacaron en el II Encuentro de Mujeres que Luchan, en diciembre de 2019, mientras en México y en América Latina hubo miles de feminicidios.

El encuentro *El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista*, en mayo de 2015, mostró a través de las intervenciones de varias comandantas y bases de apoyo, el largo recorrido de las mujeres zapatistas.

Comenzó la comandanta Miriam que explicó la triple explotación que sufrían las mujeres antes de 1994. Se detuvo largamente en explicar cómo los patrones de las haciendas las trataban como si fueran sus dueños, trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, trabajos pesados como cargar agua y moler sal a mano, maltratadas y recibiendo al cabo de la agotadora jornada apenas "un puñito de sal o un puñito de café molido", como única paga al final del día[2].

Los patrones escogían a las mujeres bonitas como amantes, las embarazaban y no se ocupaban de los hijos, tratándolas como animales. "Nos venden como si fuéramos una mercancía", agregó la comandanta Miriam, asegurando que las tratan como esclavas tanto en el trabajo como en la sexualidad. Pero la denuncia más importante se produjo cuando inició su relato sobre los que decidían escapar de la esclavitud de la hacienda para formar comunidades libres. Los varones se comportaban igual que el patrón: "No es cierto que se liberó las mujeres sino que ya los hombres fueron el patroncito de la casa" .

Los padres incluso cuando ya no viven más en la hacienda, las obligaban a casarse sin consultarlas, retornándolas a su lugar de esclavas pero ahora de su padre o su esposo. "Nunca tuvimos la oportunidad de decir lo que sentimos por muchos años, por la enseñanza de los conquistadores y de los malos gobiernos", concluyó Miriam.

La comandanta Rosalinda recordó los años de oscuridad, maltratos y humillaciones, para rememorar los años en la clandestinidad (antes del 1º de enero de 1994) cuando se reunían con otras compañeras y empezaron a elegir responsables de cada pueblo, la organización de trabajos colectivos y la incorporación al EZLN como insurgentes o milicianas. Con el levantamiento de 1994, comprobaron que "tenemos el valor y la fuerza igual que los hombres", enfrentaron el miedo y recorrieron pueblos para organizar a las mujeres. Finalizó su intervención destacando que una revolución la hacen entre hombres y mujeres.

La comandante Dalia siguió relatando cómo se están organizando en los pueblos en base a los trabajos colectivos, cómo enseñan a niños y niñas para que no reproduzcan el patriarcado y destacó que ahora tienen "libertad de opinar, de analizar, discutir, planear, en cualquier cosa" y que los varones van entendiendo los derechos de las mujeres porque "fueron cabrones los compañeros hombres antes". Ese cambio entre los varones, explica Dalia, se debe a que las mujeres "ya no se dejan, ya no se quedan humilladas como antes", algo que pude comprobar en la escuelita en agosto de 2013, en una comunidad de la región Morelia.

El estilo de trabajo que explica la comandanta Dalia, basado en "mucha paciencia", algo que dice que no tienen los hombres, parece ser una característica de las mujeres indígenas zapatistas. Sus trabajos comienzan en la base, formando nuevas generaciones de zapatistas entre las más *jóvenas*, empezando por trabajar como responsables locales, regionales y llegando hasta el CCRI. Una forma de trabajo que nombran "contagiándonos pero no de enfermedad, sino de buena idea", que pasa por mostrarles otras formas de vivir y de ser pacientes hasta que las nuevas comprendan que es una lucha larga, que no tiene fin.

La base de apoyo Lizbeth, dijo que las de su generación no conocieron la opresión de capataces y terratenientes, que nacieron y viven con libertad y derechos de opinar y discutir, que ya están participando en los más diversos trabajos "como salud, ultrasonido, laboratorio, Papanicolaou, colposcopía, odontología, enfermería" y en otras áreas como hueseras, parteras o plantas medicinales; además de formarse como locutoras de

radio, promotoras de educación, hasta alcanzar a integrar las juntas de buen gobierno o ser directivas en emprendimientos de mujeres.

Me parece muy importante que las mujeres zapatistas tengan clara la relación entre la opresión del hacendado (y de la colonia) y la situación de dependencia con sus esposos y padres. La conclusión es casi obvia: no se puede descolonizar sin despatriarcalizar; y viceversa, como señala la feminista boliviana María Galindo.

Por otro lado, destacar cuando las *jóvenas* como Lizbeth dicen que no vivieron el período de la servidumbre, que no tienen esa referencia y que el mundo se les abre hacia una enorme variedad de oficios y trabajos en los que se realizan como mujeres libres, rebeldes, zapatistas. Cuando participamos como alumnos de las bases de apoyo en la *escuelita*, pudimos apreciar cómo la creación de lo nuevo es un aspecto decisivo del movimiento. Los zapatistas nos muestran que luchar contra el patrón, el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, es el primer paso ineludible, pero aún insuficiente. La liberación requiere además crear lo nuevo, porque es el modo de ya no referenciarse en el opresor, de crear algo lo suficientemente potente como para borrar de sus sueños toda referencia al hacendado o al capataz.

Luego el sub Galeano leyó un relato de una compañera de la organización en referencia a los varones:

> Por muy sensibles y receptivos que sean, no pueden ser feministas, porque nunca van a poder ponerse de este lado, nunca van a menstruar, nunca van a desear o temer embarazarse, nunca van a parir, nunca van a padecer menopausia, nunca van a sentir miedo de salir a la calle plena luz del día, de pasar frente a un grupo de hombres, nunca van a nacer, crecer, vivir con el temor que surge de ser lo que se es (…) así que no me vengan con que hay nombres feministas. Hay hombres más a modo, sí, pero no feministas.

Las mujeres comenzaron a tomar en sus manos el movimiento. En este punto no hay fechas precisas, pero la creación de las juntas de buen gobierno en el año 2003, que llevó a la retirada del ejército zapatista de

las decisiones cotidianas de los civiles y que éstos asumieran el autogobierno, fue un paso importante. De todos modos, la incorporación de las mujeres en relación de paridad con los varones como autoridades, en las juntas hay mitad y mitad de cargos, fue progresiva y aún no ha culminado.

El crecimiento de las mujeres zapatistas fue permeando también hacia otros ámbitos del movimiento indígena mexicano, en particular el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG). El CIG fue creado en diciembre de 2016, con la participación de 523 comunidades, de 25 estados del país y de 43 pueblos indígenas. Cada pueblo o comunidad nombran un varón y una mujer para que los representen. Desde ese momento, el movimiento a escala de México se ha feminizado, pero desde un lugar diferente.

Rocío Moreno es concejala por la comunidad de Mezcala, en Jalisco. Relata lo que sucedía antes de 2016 en el movimiento y los cambios que hubo con la formación del CIG y la decisión, fuertemente respaldada por el EZLN, de que su vocera fuera una mujer indígena, María de Jesús Patricio, Marichuy. Ella se dedica a la medicina tradicional, lo que termina revelando diferencias notables entre la cultura política de varones y mujeres:

> El CNI invitaba a los comisariados de bienes comunales, que son las directivas que en las comunidades y los pueblos se dedican a la defensa de la tierra. Marichuy tenía asambleas de salud tradicional y en esas asambleas había más mujeres. Pero ellas decían que no les gustaba "meterse en políticas", que preferían llevarlo a su ritmo, pero entonces otra vez se separaba el CNI de las asambleas de medicina tradicional. Después de 2016, cuando se crea el CIG con la obligación de llevar un varón y una mujer, eso revolucionó, fue el triunfo más importante del CNI. Llegaron las compañeras con su palabra, traían trabajos de educación y de salud, mientras el CNI seguía centrado en la lucha agraria. Probablemente es el triunfo más importante de este proceso organizativo la incorporación de las mujeres.

Rocío explica que mientras los varones se dedicaban al papeleo de títulos de propiedad en las instituciones y a organizar manifestaciones contra

los propietarios, las mujeres llevan adelante sus trabajos. "Son trabajos tan necesarios en la vida, que nos dignifican como mujeres y dignifican a un pueblo, que eso las coloca en otro lugar no pensando en combatir al Estado", sigue Rocío. De alguna manera, insinúa que muchos varones siguen influidos por la lógica de la lucha contra algo, mientras ellas se dedican a crear y sostener la vida. "Si somos capaces de crear nuestros mundos otros, el de ellos ya no nos interesa", cierra Rocío, en una frase que sintetiza cinco siglos de aprendizajes.

Cuatro décadas resistiendo y construyendo mundos otros

El EZLN celebró su 37 aniversario, el 1º de enero, afrontando una de las mayores ofensivas militares en mucho tiempo, alentada por el gobierno "progresista" de Andrés Manuel López Obrador, por los gobiernos de Chiapas y de varios municipios del estado, que lanzaron una guerra de desgaste contra los territorios autónomos, para despojar y destruir a las bases de apoyo del zapatismo.

Celebramos la continuidad y la perseverancia de un movimiento revolucionario distinto a todo lo anterior, algo que debemos valorar en toda su trascendencia. No sólo no claudicaron, no se vendieron y no traicionaron, sino que no repitieron el esquema vanguardista, que reproduce la cultura dominante al convertir a sus dirigentes en nuevas elites patriarcales.

Celebramos la coherencia, pero también lo mucho que nos enseñaron en estas casi cuatro décadas. Para no hablar en general, quiero referirme a lo que he aprendido, ya sea en la "escuelita zapatista" o en diversos encuentros e intercambios en los que pude participar.

El núcleo del zapatismo es la autonomía. No teórica ni declarativa, sino práctica viva de los pueblos, en todos y cada uno de los momentos y espacios en los que hacen sus vidas, desde los ejidos y las comunidades, hasta los municipios y las juntas de buen gobierno.

La autonomía es una forma de vida, es la dignidad de los pueblos; autonomía colectiva, no individual como nos transmitió cierto pensamiento eurocéntrico.

Necesitamos la autonomía para seguir siendo pueblos y sectores sociales que practicamos otros modos que los de arriba. La autonomía puede ser practicada en todos los espacios, en los barrios de las ciudades, entre campesinos, pueblos originarios y negros, en los más diversos colectivos y comunidades.

La autonomía es ese inmenso paraguas de dignidad que sostenemos entre todos y todas. No es una institución, son relaciones humanas vivas, tejidas con la dignidad que nos permite hermanarnos.

Las bases de apoyo y el EZLN nos enseñaron, también, que la autonomía debe ser completa, integral, o por lo menos tender hacia ello, abarcando todos los aspectos de la vida de los pueblos. Por eso construyen escuelas, clínicas, hospitales, cooperativas y todo ese rico entramado de producción de vida y de cuidado de la vida. Autonomía se conjuga con autogobierno y con justicia autónoma; el motor de la autonomía son los trabajos colectivos.

La defensa de los territorios y la comunidades es otra de las enseñanzas del EZLN. Pero aquí aparece otro rasgo de la autonomía, inédito en el campo de la revolución: la defensa de nuestros espacios no puede ser mera reacción a lo que nos hacen los de arriba. Elegir cómo, cuándo y de qué manera actuamos es también un rasgo de autonomía, para no caer en provocaciones, porque ellos quieren la guerra, porque la guerra beneficia al capital.

En este punto, el EZLN nos ha enseñado a no responder agresión con agresión, muerte con muerte, guerra con guerra, porque ahí dejamos de ser autónomos, o sea dejamos de der diferentes. Y esto no tiene nada que ver con el pacifismo.

Aprendimos que no hay un modo único de autonomía, válido para todos los pueblos en todo tiempo. Nos han enseñado que cada quien camina

a su modo y según sus tiempos, y eso es lo que están haciendo los pueblos en América Latina.

Puedo dar testimonio del modo como las autonomías se expanden por nuestro continente. Decenas de comunidades mapuche en el sur de Chile y Argentina, se están reconstruyendo de forma autónoma, enfrentando la política de los Estados que los presentan como terroristas.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en el sur de Colombia, es una expresión notable de construcción de autonomías. La guardia indígena se expande hacia los pueblos negros y campesinos, que han protagonizado la reciente Minga Indígena, Negra y Campesina que culminó en Bogotá luego de caminar 500 kilómetros.

En Perú se ha formado el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis, proceso que están siguiendo otros tres pueblos amazónicos del norte. En la Amazonia brasileña 14 pueblos están transitando hacia la autonomía para defenderse de la minería y el agronegocio, como ha mostrado el geógrafo militante Fábio Alkmin en una investigación en curso[4].

Sería abusivo dar la impresión que todas las autonomías siguen los caminos que está transitando el EZLN. Pero quiero enfatizar que la existencia del EZLN, es un impulso, un referente, una luz que nos dice que es posible resistir al capital y al capitalismo, que es posible construir mundos otros, resistiendo y viviendo con dignidad.

Una gira por la vida y la esperanza

En todos los rincones del mundo los de arriba están perpetrando un genocidio silencioso de pueblos originarios y negros, de campesinos y pobres de la ciudad y el campo.

Los feminicidios se multiplicaron durante la pandemia, como parte inseparable del genocidio contra las y los de abajo.

En Chiapas las bandas paramilitares atacan con armas de fuego las comunidades en Moisés Gandhi. El guión es siempre el mismo: los paramilitares como la ORCAO, con asesoramiento de las fuerzas armadas, atacan bases de apoyo zapatista; el gobierno federal y el del estado callan, o sea consienten. Los medios y los partidos callan, o sea consienten.

En las periferias urbanas latinoamericanas y en las remotas áreas rurales no sólo no se habla de vacunas, sino que tampoco tenemos infraestructuras hospitalarias en condiciones, ni médicos ni enfermeras suficientes.

Una característica de la tormenta contra los de abajo, consiste en aislarnos en nuestros territorios. Pocos reaccionan y se conmueven. La indiferencia es la política de los Estados y de buena parte de la "opinión pública". Ayotzinapa sucede todos los días, no sólo en México.

Es una política consolidada arriba y aceptada con entusiasmo por el sistema político. Es un cerco militar y mediático contra los pueblos, para inmovilizarlos, mientras el capital (liberado de controles) profundiza su extenso e intenso proceso de concentración y centralización en cada vez menos manos.

La gira zapatista por tierras europeas es una oportunidad para romper el cerco, para volvernos a juntarnos en espacios comunes, hacernos escuchar y tejernos como pueblos en resistencia. La propuesta zapatista anunciada en octubre y actualizada en 1 de enero en la declaración "Por la Vida", es un enorme esfuerzo de las comunidades para romper el cerco de la muerte.

La respuesta desde Europa vino de la mano de más de mil colectivos en más de veinte países, que declaran su voluntad de sumarse y organizar una gira que llevará a más de cien zapatistas, en su mayoría mujeres, por muchos rincones del continente.

No será nada sencillo organizar una gira tan amplia en un momento en el que la pandemia no encuentra límites, brindando una ocasión a los gobiernos y las policías para acotar la acción colectiva. En Europa se limitaron los

derechos de reunión y de manifestación. También será muy difícil que miles de activistas consigan ponerse de acuerdo, ya que provienen de diferentes tradiciones, ideologías y modos de hacer. Estas diversas culturas políticas encontrarán dificultades para superar el egocentrismo individual y colectivo, la inevitable búsqueda de focos mediáticos para algunos, siempre pocos pero con gran poder disgregador.

A las dificultades propias de la situación, deben sumarse las que provienen de tantos años de fragmentación y, sobre todo, de la continuidad de una cultura política centrada en los Estados, en los varones caudillos y en los discursos que no van acompañados de prácticas coherentes.

La gira zapatista brinda la ocasión para encarar otras dos tareas necesarias, además de la mentada ruptura del cerco.

La primera, es que permite enlazar y coordinar colectivos que habitualmente están distantes o que ni siquiera se conocían. No se trata de crear nuevos aparatos o estructuras, sino abrir un amplio abanico de vínculos horizontales e igualitarios, algo mucho más difícil aún que establecer una "coordinadora" que a menudo repite los vicios de los aparatos. La segunda, es que conocer más a fondo los modos zapatistas de hacer, puede permitir a muchas personas y colectivos adentrarse en culturas políticas que hasta ahora sólo algunos grupos feministas y juveniles han puesto en práctica.

Una de las constataciones más deprimentes en los ambientes militantes, es comprobar cómo década tras década se tienden a repetir los mismos vicios que, ingenuamente, creíamos superados. No hay modo de superarlos sino haciendo, errando y volviendo a hacer, hasta encontrar modos de trabajar que no lastimen, ni excluyan, ni humillen.

Por último, la gira zapatista será una fuente de aprendizaje para los más diversos colectivos anti-capitalistas. Primero, constatar que se puede, que los de arriba no son tan poderosos como parecen. Segundo, que podemos sumar más y más personas sin reproducir el sistema, buscando confluencias entre quienes sufrimos similares opresiones. Desafío y esperanza, a la vez.

NOTAS:

[1]La primera parte de este capítulo, sobre las mujeres zapatistas, se apoya en un libro en desarrollo sobre las formas de lucha, mientras el resto son fragmentos de artículos aparecidos en *La Jornada*, *Desinformemonos* y *Gara*.

[2]Las citas pertenecen al libro *El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista. Tomo I*.

[3]Ver artículo en próximo apartado.

9

Indígenas de Colombia: romper el cerco y derrotar a la policía

Gara, 1 de noviembre de 2020

En varias oportunidades hemos enfatizado sobre la militarización que sufre nuestro continente latinoamericano, agudizada durante la pandemia. Si es cierto que "la policía es el golpe de Estado permanente", como afirmó Michel Foucault, podemos concluir que los avances represivos de los últimos meses representan un golpe del capital contra los pueblos.

Más de sesenta masacres en Colombia y otras tantas en México durante este año, enseñan los puntos calientes de la represión que nos atraviesa. Sin embargo, la represión no es un fin sino un medio. El objetivo es profundizar el modelo neoliberal extractivo, o cuarta guerra mundial contra los pueblos, como la denominan los zapatistas.

Durante la pandemia se están desarrollando nuevos proyectos mineros y de infraestructura, en todos países de América Latina. El Tren Maya es uno de los más conocidos fuera de México. La oposición al Proyecto Integral Morelos le costó la vida al activista náhuatl Samir Flores Soberanes, miembro de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos.

Las clases dominantes encontraron en el encierro y la limitación de la movilidad de las poblaciones, una oportunidad para intensificar la acumulación por despojo. Prueba de ello es que durante la pandemia los ricos están acumulando enormes riquezas. "La fortuna acumulada de todos los grandes multimillonarios ha alcanzado su máximo histórico durante la pandemia de coronavirus: más de 10.000 millones de dólares (unos 8.700 millones de euros)", revela un estudio de PwC (*The Guardian,* 7 de octubre de 2020).

Con una mano nos encierran y controlan, para con la otra seguir llenándose los bolsillos, descargando la crisis sobre los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios. La desigualdad sigue creciendo, los derechos democráticos son regulados o sencillamente anulados durante largos períodos. Las prioridades de los movimientos populares, como acaba de suceder en Colombia, van rotando desde la demanda por derechos a la defensa de la vida, amenazada por el sistema.

Por estas razones, cada vez que la movilización consigue neutralizar y hacer retroceder la represión, me parece necesario darle la importancia que merece. Este octubre de 2020 en Colombia sucedieron hechos notables. Me refiero a la *Minga Indígena*, *Negra* y *Campesina*, que durante diez días recorrió 500 kilómetros desde el suroccidente hasta la capital, Bogotá.

La Minga (trabajo comunitario en el mundo andino), comenzó su recorrido en el Cauca, se desplazó hasta Cali y de allí recorrió diversas ciudades hasta finalizar en Bogotá, siempre rodeada de solidaridad. Participaron ocho mil personas, que hicieron el recorrido en chivas (autobuses abiertos que se utilizan en áreas rurales) y fueron protegidos por la Guardia Indígena, una creación del pueblo nasa y de otros siete pueblos originarios que se agrupan en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Fue la mayor movilización popular durante la pandemia, que rompió el cerco policial y mediático y llevó la problemática de la violencia estatal y paraestatal desde las comunidades hasta las grandes ciudades, donde tejió alianzas con los sectores populares y las clases medias.

A mi modo de ver, la Guardia Indígena es una de las mayores creaciones de la auto-defensa colectiva de América Latina, un continente donde existen numerosos emprendimientos comunitarios de este tipo para los cuidados. Su forma de organización es de abajo arriba y parte de las comunidades. En cada asamblea de comunidad se eligen guardias, en general jóvenes, varones y mujeres, que pueden ser revocados o reelegidos según la evaluación de su conducta.

Actúan como protección colectiva en base al número, portan bastones ceremoniales o *chontas*, cuentan con personas que coordinan cada

grupo y una coordinación general. Durante la pandemia, el CRIC moviliza siete mil guardias para controlar el ingreso y salida de personas y vehículos en 70 puntos de su territorio.

La estructura de la guardia es muy sencilla: cada vereda elige en asamblea diez guardias y un coordinador; luego se elige un coordinador por resguardo y otra para toda la región, siempre en acuerdo con los gobernadores de los cabildos. Los guardias son elegidos por dos años pero buena parte deciden continuar. "En toda la zona del Norte del Cauca tenemos 3.500 guardias correspondientes a los 18 cabildos. Hay jóvenes y mujeres, de 12 hasta 50 años. La formación es nuestro aspecto más importante y la hacemos a través de talleres en los que se discute derechos humanos y la ley nuestra, la ley originaria. Priorizamos la formación política por sobre los ejercicios físicos. La guardia es muy importante para la seguridad de la población y se ha convertido en un problema para los actores armados", señala uno de los coordinadores.

Los talleres son obligatorios y duran tres días; participan abogados, jueces y líderes comunitarios que relatan la historia, usos y costumbres del pueblo nasa. Luego cada coordinador replica los mismos talleres en su vereda. Uno de los aspectos centrales es el denominado "derecho propio", la justicia comunitaria que orienta la actividad de la guardia indígena. "No tenemos nada que ver con una policía, somos formadores de organización, somos protección de la comunidad y defensa de la vida sin involucrarnos en la guerra". Sin embargo, tanto los militares como la guerrilla los consideran enemigos, ya que dificultan el reclutamiento y se interponen en sus acciones militares.

Uno de los aspectos más interesantes es que otros sujetos colectivos han seguido los pasos de los pueblos originarios, al punto que en toda Colombia hay 70 mil guardias organizados. Se han creado las Guardias Cimarronas entre los pueblos negros y las Guardias Campesinas están dando sus primeros pasos en los últimos seis años.

Las guardias de diferentes pueblos y sectores sociales realizan encuentros interétnicos e interculturales en los que participan campesinos, indígenas y pueblos negros. Entre sus objetivos se proponen estrechar lazos, pero

sobre todo promover la formación política y operativa para fortalecer el control territorial y avanzar en lo que en el Cauca denominan como "justicia propia", que funciona a contrapelo de la estatal.

El prestigio de la Guardia Indígena entre la población, y del conjunto del movimiento originario, es tan alto que la alcaldesa de Bogotá, la centrista Claudia López, militante contra el ultraderechista ex presidente Álvaro Uribe, recibió y alojó la Minga en el Palacio de los Deportes, ante las protestas del gobierno y la derecha.

Pero la alcaldesa dio un paso más, muy significativo. Rechazó la presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en las calles, el cuerpo represivo más brutal del país. "Es absolutamente falso que la minga la acompañará el ESMAD. Eso sería irrespetuoso, además de innecesario. A la minga la acompañará su propia guardia y los gestores de diálogo y convivencia de la alcaldía", apuntó López (*Vanguardia,* 18 de octubre de 2020).

Se trata de una derrota de la política represiva y de los aparatos policiales creados para contener la protesta y mantener a raya a los sectores populares. Estos viven su mayor desprestigio luego del asesinato de un abogado en setiembre, que se tradujo en el incendio de dos decenas de comisarías en la capital, por miles de manifestantes furiosos.

"En Bogotá, la violencia policial se siente por toda la ciudad: hay persecuciones, allanamientos ilegales, robo, intimidaciones a jóvenes", dijo un concejal de la ciudad en una audiencia pública sobre la reforma policial (*Le Monde Diplomatique*, edición octubre 2020).

Gracias a las Guardias Indígenas, Cimarronas y Campesinas, esta vez la policía no pudo morder en la Minga, y hasta los infiltrados que envió fueron separados de las marchas. Una derrota inapelable que marca rumbos.

10

Escuchar es un aprendizaje fundamental para la masculinidad blanca patriarcal

Un antropólogo en el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis[4].
El Salto, 16 de junio de 2020

El antropólogo, estudiante de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, comunicador y educador brasileño Leandro Bonecini vivió medio año en el territorio autónomo wampis, donde aprendió en la convivencia y enseñó comunicación comunitaria. El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW) le pidió que capacitara comunicadores comunitarios, varones y mujeres, para la *Radio Comunitaria Tuntui Wampis 94.7 FM Señal Indígena*. Se trataba de "la formación de reporteros comunitarios, investigadores y líderes en el territorio, dispuestos a caminar y surcar los ríos para informar a su proprio pueblo". Hicieron mapas de comunicaciones de los ríos, ubicando los medios de comunicación más utilizados "desde los altavoces y la canoa, hasta el tuntui (tambor de madera) y las aletas de las raíces de árboles", explica Leandro.

En una extensa extrevista que reproduzco parcialmente, explica la historia, los desafíos y logros de un proceso autonómico que comienzan a transitar otros pueblos de la Amazonia.

En tu experiencia en territorio autónomo wampis, ¿qué cosas aprendiste como antropólogo, como académico, y qué aprendizajes tuviste que dejar de lado?

Como antropólogo pude aprender el trabajo en la chacra, en la casa, el jugar con los vecinos, trabajar en la radio, ir a la escuela, el lavado de ropas y enseres, cazar, arreglar la red de pesca, construir canoas, remos,

canastas, coronas de plumas tawas y otros objetos útiles y llenos de sentido, como cocinar la yuka para el masato y el plátano verde. Los conocimientos teóricos y conceptuales de las poblaciones nombradas indígenas en las amazonías tienen mucho que enseñarnos sobre éticas y filosofías que sostienen la vida en el bosque.

Pude empezar a escuchar, a percibir en los trabajos comunitarios la relación con el bosque, con los seres que lo habitan; hay muchas formas de nombrar y sentir lo que existe, para explicar la vida y la realidad. Sea por la observación de los sueños o dedicarse a visionar y proyectar la vida desde la relación con los seres humanos y no humanos.

Tuve que dejar de reproducir la postura, incluso corporal, del investigador antropólogo, de mirar, describir y documentar. Aprendí un poco de las prácticas para la reproducción de la vida para el futuro de la Amazonía. Entre ellas están los trabajos de las mujeres en las chacras, en los relatos de mitos y personajes del bosque. No me preocupaba tanto hacer entrevistas, me gustaba disfrutar y estar con ellas según sus propias motivaciones y horarios. En la mañana despertaba temprano. Hay que hacer de todo, buscar agua y lavar las ropas en el río, cargar leña, traer yuca (mama) y plátano (pantam) de la chacra. Escuchar más que hablar, un aprendizaje fundamental para la blanquitud y para la masculinidad forjada por el patriarcado occidental.

¿Cuáles son las razones que llevaron a los wampis a crear un gobierno autónomo? ¿Qué relación existe entre el proceso autonómico y la masacre de Baguá?

Los pueblos amazónicos tienen prácticas de organización propias integrales, una relación indivisible entre las dimensiones del espacio y de la naturaleza que no están repartidas en fragmentos apropiados selectivamente. Esas prácticas se hacen visibles a partir de los años 60 y 70 cuando las políticas de colonización de la Amazonia desde los estados nacionales, los discursos de "gente sin tierras, tierras sin gente", que reproducen la idea colonial de vacíos demográficos que estimulan la migración de colonos.

En las décadas de 1960 y 1970 se titulan legalmente las primeras comunidades en el río Santiago (Kanus), mediante una articulación del Estado con iglesias que realizaban misiones en el territorio. Surge el Consejo Aguaruna Huambisa en el año 1979, expresión de cómo los liderazgos wampis aprenden las formas, estrategias y prácticas institucionales del Estado y los agentes externos, para poder posicionarse frente a ellos. En ese período empieza la explotación petrolera de la Amazonia peruana, que afecta gravemente a estos territorios, mucho antes de la masacre de Bagua[5].

El gobierno wampis se hace público en 2015, se gesta desde estas experiencias de organización territoriales anteriores, pero ahora se presenta como una estructura de organización. Un gobierno que reivindica un millón 327 mil hectáreas, entre los estados de Amazonas y Loreto.

El GTANW se organiza para el control y la determinación de las necesidades referentes a su territorio, y por lo tanto no está en una posición pasiva ante el Estado. La masacre de Bagua fue decisiva en este cambio estratégico, como forma de prevención de estos acontecimientos. Se entiende que no se respetaron en todos los momentos las decisiones de las autoridades de las organizaciones indígenas en el accionar del paro general amazónico, sobre todo para el uso de la fuerza.

Por lo tanto se sintió la necesidad de consolidar desde el territorio wampis una organización que representara el conjunto de dinámicas organizativas según sus principios éticos. Se organiza formalmente el gobierno autónomo en un Estatuto Constitutivo, que les sugiero leer[6], en el cual se apropian también de los códigos jurídicos y principios del derecho nacional e internacional que les da amparo y garantías legales a la autodeterminación, la consulta libre, previa e informada. A la vez no se someten al derecho occidental, defienden un pluralismo jurídico y filosófico de la justicia propia, que se está transformando en el interior del hacer diario de la consolidación del gobierno autónomo wampis.

¿Cuáles crees que son los principales logros del gobierno autónomo y cuáles las principales dificultades y desafíos?

Los límites al Estado y a las empresas privadas en el territorio, reconociéndose la deuda histórica hacia los pueblos de la amazonia y la violencia brutal de la colonización. El gobierno wampis y otros gobiernos autónomos en organización en el Perú, declaran a la sociedad que no deben ignorar su existencia. No esperan que el Estado les resuelva sus necesidades, pero no ignoran sus atribuciones. No pretenden separarse del Perú, reivindican la ciudadanía peruana, pero a la vez reivindican su control sobre el territorio ancestral wampis. Por lo tanto están interesados en organizar sus necesidades: producción, salud, género, justicia, medio ambiente, comunicación.

Se está logrando informar a la población de lo que pasa en el territorio, en el país y en el mundo, por medio de la producción radiofónica. Se fundó un periódico trimestral del gobierno wampis para que el pueblo tenga acceso a literatura escrita y lectura, se llama Nakumak, y fue lanzado en la XI Cumbre de la Nación Wampis, en noviembre de 2019.

Cuando se fundan las escuelas bilingües en la década de 1960, con la presencia de misioneros evangélicos del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), se evangeliza la población tras un historial de grandes violaciones por la explotación del caucho, del oro, las misiones religiosas, de la explotación y venta de pieles de animales y madera. La población se alfabetiza sin tener acceso a su propia literatura oral que se va perdiendo en esos años, lo que es parte de las luchas wampis para la preservación de la memoria y los conocimientos ancestrales.

Otros logros son las intervenciones que el gobierno autónomo realizó en contra de la minería ilegal, un problema histórico y estructural en América Latina. Se realizan monitoreos sociales y ambientales en las dos cuencas, se registra información y documentación local de la tala de bosques, valoración de las chacras y de la producción de las familias.

En términos de las dificultades y desafíos, hay límites estructurales y de infraestructura. No tienen aparatos para recibir la señal de radio. Por

eso es importante el periódico trimestral *Nakumak,* que se reparte en las comunidades para que se pueda hacer la lectura colectiva por altavoces o la lectura colectiva en las asambleas comunales, contando con una fuente de lectura producida en su propio territorio, con elementos de la cultura e idioma propios.

Hay desafíos importantes en la soberanía alimentaria y la lucha contra la desnutrición y la anemia, en la estructura de atención sanitaria y educativa, el acceso a redes telefónicas y de telecomunicaciones. Se resiste a las enfermedades sexualmente transmisibles por medio de campañas, cuya difusión se debe a las industrias ilegales, la expansión de las fronteras de la minería, la tala, el agronegocio, la construcción de represas proyectadas en la cuenca del río Marañón, carreteras, oleoductos, además del tráfico internacional de drogas y armas que también son responsables por violencias y enfermedades en la Amazonia. Se suman las prácticas como la prostitución, la trata de personas, entre otras brutalidades del capitalismo agudizadas en este momento por la pandemia de coronavirus.

¿En sus territorios funciona la justicia comunitaria?

Hay un nivel de justicia comunal irreductible a la estructura del gobierno, bajo decisión de las asambleas comunales y sus autoridades, los *iimarus*. Se revisan las prácticas de justicia ancestrales, algunas de ellas cuestionadas por el propio gobierno autónomo, en los casos de violaciones, asesinatos y acusaciones de brujería. O sea, la autonomía se establece en el balance de fuerzas internas –los poderes entre autoridades comunales y vínculos de parentesco ampliado en la región- y externos, desde las negociaciones con las instituciones del estado, capitales privados y agentes políticos de la sociedad civil nacional e internacional.

¿Podrías hacer una evaluación general de las expectativas del pueblo wampis?

Entre los jóvenes se generan ilusiones de éxito "profesional" hasta acceder a cargos, sea como docente, participando de alguna instancia

del gobierno distrital provincial, regional o nacional; trabajar en alguna empresa o negocio, para acceder a un status y fuentes de ingresos económicos, lo que en el territorio wampis marca diferencias entre comuneros y familias.

También hay tensiones entre el derecho consuetudinario inscrito en las reglas y estatutos de cada comunidad con las prácticas concretas, tensiones entre las autoridades legítimas, interpeladas en la organización del gobierno autónomo, que debate si preservar o no los conocimientos ancestrales para la aplicación del sistema de Justicia Wampis. Se está elaborando el código de justicia colectivamente en asambleas amplias con participación de autoridades comunales, sabios y sabias, comuneros y asambleístas que se reúnen para reflexionar en el gobierno autónomo.

Hay una voluntad de equiparar, estimular y garantizar la participación de las mujeres, la toma de decisiones y los liderazgos en diferentes niveles. En septiembre de 2019 se realizó el I Congreso de las Mujeres Wampis donde se discutieron muchos temas como violencia de género, las proyecciones de pasado y futuro de la mujer, necesidades en términos productivos y reproductivos, de salud y bienestar de las mujeres wampis. El Congreso demostró que hay niveles de tensión internos, lo que demanda un importante esfuerzo de organización para que las mujeres tengan igual participación en las decisiones políticas del gobierno autónomo, el acceso al estudio, el empleo y en los temas de violencia de género. Se maduran un conjunto de reflexiones y experimentos para generar la justicia hacia dentro del territorio en las prácticas cotidianas.

La contaminación hace que el agua ya no se pueda tomar "cruda" y aparecen obstáculos para garantizar la soberanía alimentaria en la agrobiodiversidad propia del bosque amazónico. Se están gestionando proyectos de estímulo a la producción de alimentos y su procesamiento local, para favorecer la economía comunal de modo que pueda garantizar las necesidades de las familias, para que no estén sometidas a las actividades mineras y la tala de bosques como formas de garantizar, por ejemplo, el pago de los estudios de

los jóvenes o para alquilar barcos, comprar combustible o víveres que exigen manejo del dinero.

¿Crees que otros pueblos amazónicos pueden tomar un camino similar de autonomía?

La autonomía me parece que es una reivindicación desde los principios propios y apropiados, en la que se destaca la nación wampis y los demás pueblos de la familia lingüística jívaro, como son las Awajun, Shuar (de Ecuador), Achuar, y Chapra, y otros pueblos de la Amazonia, como los Shawi, Shiwilu, Quechua o Inka del Pastaza y Kukama-Kukamiria, y los Shipibo-Konibo, que caminan rumbo sus propias experiencias de gobierno autónomo.

Recientemente el GTANW, junto a Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL) y la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Norte del Perú (ORPIAN-P) presentaron al Congreso de la República del Perú una propuesta de proyecto de ley para el "Reconocimiento del derecho intrínseco a la Personalidad Jurídica de los pueblos indígenas y afrodescencientes".

Los pueblos tienen agendas comunes que establecen a través de conexiones territoriales por compartir cuencas, fuentes de agua y bosques. Es fundamental no dejarnos separar por las fronteras de los Estados o las expresiones del capital, porque hay un mundo de vida compartido, cuando lo vemos desde muchos espejos, en su integridad, continuidad ecosistémica y de los conflictos vividos diariamente. Hay que considerar entonces, la creación y transformación de los pueblos en sus largos caminos de autonomía.

¿Finalmente, cómo queda la relación con el Estado peruano?

La relación con el Estado es ambigua, con múltiples matices. El Estado no ha reconocido la personalidad jurídica del gobierno autónomo wampis, ni incorporado la figura del gobierno autónomo, como ha hecho

con las rondas campesinas. Pero el gobierno autónomo wampis ha establecido el diálogo, especialmente con los gobiernos regionales de Amazonas y Loreto, y el gobierno provincial de Condorcanqui. Se han establecido diálogos y firmas de convenios interinstitucionales según las disposiciones del gobierno autónomo, sea para garantizar becas de estudio o para la preservación del bosque. El Gobierno autónomo reivindica los recursos del Estado, pero manteniendo el control de la ejecución de las política en su territorio, como para la educación intercultural bilingüe, o la atención a la salud, en las 85 comunidades wampis que suman unos 15 mil habitantes.

La nación wampis dialoga con el Estado. Ahora justo están demandando actuar frente a la insistente presencia de la petrolera Geopark, en el Lote 64. Exigen su salida definitiva del territorio, incluso que dejen de operar durante la pandemia por poner en riesgo a la población.

NOTAS:

[4]Se puede consultar video sobre el gobierno wampis en https://www.youtube.com/watch?v=J_vY-NzRxFc

[5]El 5 de junio de 2009 el gobierno de Alan García desalojó con violencia militar y policial a 5 mil pobladores amazónicos que llevaban dos meses bloqueando la carretera que, en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, permitía la explotación minera, petrolera y gasífera. Hubo cientos de heridos y desaparecidos y por lo menos 23 policías y diez amazónicos muertos.

[6]nacionwampis.com/autonomia-en-accion/

11

Uruguay: Eludir a los monopolios

Zur, 22 de junio de 2020

Una larga hilera de brazos se agitan en el pasillo del Sindicato de Artes Gráficas (SAG), cargando cajas, bolsas y paquetes hacia el camión que las llevará hasta el primer destino, a media mañana del tercer sábado de junio. La velocidad del trasiego contrasta con la serenidad de las sesenta personas que se trabajan trajinando. La primera sorpresa, para quien desconoce este espacio, es el promedio de edad, debajo de los 30 años.

Los alimentos fluyen de mano en mano, desde bolsas de harina de 25 kilos hasta botellas de desinfectantes, paquetones de fideos o frascos con mermeladas caseras. La diversidad de productos es una característica del Mercado Popular de Subsistencia (MPS), que abarca las necesidades del millar de familias que decidieron caminar por fuera de las grandes superficies, atraídas por precios muchísimo más baratos (entre el 30 y el 50 por ciento) y por tomar el control de los productos que consumen.

"Hasta el año pasado eran alrededor de 500 familias pero con la crisis multiplicamos por cuatro el volumen de pedidos", explica Sebastián Vázquez, uno de los iniciadores de esta experiencia.

Autogestión y solidaridad

El MPS (mps.org.uy) ofrece una "canasta combativa" de alrededor de 300 productos, incluyendo alimentos veganos y para celíacos, productos de

limpieza e higiene personal, textiles y artículos escolares. La canasta se va ampliando según la demanda de las familias, que al integrar el mercado popular se organizan en un núcleo barrial para realizar sus pedidos.

"El núcleo de Nuevo París somos cinco familias", desgrana Clara. "Cada familia hace un pedido que se traslada a una planilla del barrio que enviamos a una comisión encargada de las compras". Después del 10 de cada mes, cada familia deposita el importe de su pedido una cuenta del mercado, que gestiona otra comisión. Los productos llegan los viernes por la tarde y los sábados por la mañana a dos puntos de almacenamiento: el SAG y el Polo Tecnológico e Industrial (PTI) del Cerro.

Cada uno de los 60 núcleos envía una persona a los centros de acopio para separar los productos que corresponden a cada barrio y de allí salen en camiones hasta su destino. Hay núcleos que bordean las cien familias, sobre todo en las zonas centrales de Montevideo, pero ya empiezan a organizarse familias en la zona esté fuera de la capital.

"Cada grupo de compra tiene autonomía para decidir cómo hacen el reparto", explica Clara. En el Club Dryco, en un barrio de trabajadores, las familias esperan el camión que salió minutos antes del sindicato. Aquí la mayoría son mujeres jóvenes que apilan mercaderías para 80 familias, en el salón engalanado por un cantina que sería el sueño de coleccionistas de antigüedades.

Lucía lleva tres años en un núcleo de su barrio donde se agrupaban unas 20 familias: "Desde que empezó la crisis de coronavirus, crecemos todos los meses y ya llegamos a las 80 familias, por lo que tendremos que dividirnos en dos o tres núcleos para poder manejar tantos productos".

En el Dryco hacen el recuento para asegurarse que no hay faltantes y luego arman los pedidos de las familias, que pasan por el lugar a recoger lo que han encargado. En total, tres o cuatro horas de trabajo cada mes. El trabajo es siempre voluntario, nadie recibe nada, salvo los camioneros. Por cada 500 pesos de compra, cada familia agrega 15 pesos para el transporte y las bolsas.

El Mercado Popular funciona de modo descentralizado en los barrios y con comisiones federales en las que participan una o dos personas de cada núcleo, en lo posible de forma rotativa: logística, compras, finanzas, comunicación y propaganda, formación e ingresos. La última se encarga de la creación de nuevos núcleos, mientras la de formación organiza charlas y talleres para reflexionar sobre el consumo y, como apunta Clara, "hacernos soberanos sobre qué consumimos y a quienes le compramos".

Fruto de esas reflexiones, más de la mitad de los productos que integran la canasta proceden de empresas recuperadas por sus trabajadores, cooperativas y emprendimientos autogestionados, colectivos y familiares.

En las etiquetas de las bolsas puede leerse: Cooperativa La Minga (ex trabajadores de BAO) y El Resistente de Malvín Norte, ambas de productos de limpieza; Caorsi, Molinos Santa Rosa, Mi Piace (extrabajadores de La Spezia) y Unidad Cooperaria (ex Cololó) entre las alimenticias. Llama la atención la marca Gigor, que provee buena parte del pan de molde del mercado popular, que funciona en la cárcel de Punta Rieles gestionada por ex presos en la que trabajan los actuales reclusos.

El vínculo con las pequeñas empresas autogestionadas es una opción política y una seña de identidad del mercado popular. Siempre eligen "trabajo uruguayo" aunque una parte de los productos deban comprarlos a grandes empresas. Casi todas las prendas proceden de la textil Conacotex, una cooperativa que comenzó a funcionar en febrero 2018, integrada por ocho extrabajadoras de la empresa textil Everfit, en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro.

Un largo camino

La propuesta del MPS surgió de la Brigada José Artigas, un colectivo de militantes frenteamplistas de base que se formó en 2009 en la zona obrera de Curva de Maroñas y Bella Italia, "cuando Mujica era

candidato y lanzó un llamado para hacer trabajo voluntario", rememora Sebastián. Empezaron con brigadas los fines de semana en Cabañitas, un asentamiento de la zona.

El desengaño llegó pronto. "Al ritmo que se caminaba, calculamos que se necesitarían 500 años para eliminar la pobreza y tomamos un camino propio en base a los ideales artiguistas[7], en el sentido de que nada podemos esperar sino de nosotros mismos". En 2014 instalaron una "bloquera popular" para apoyar a los vecinos que estaban levantando sus viviendas, que podían utilizarla pagando sólo el costo de los materiales.

Con la decadencia de la construcción, tomaron otros rumbos. "Hicimos una encuesta en los barrios donde estaba la Brigada y decidimos armar una canasta básica con los cuatro productos principales: yerba, aceite, harina y fideos". El MPS se estrenó en enero de 2016 con apenas 60 pedidos. Primer problema: "Como se paga por adelantado tiene que haber un mínimo de confianza. Ese mes nos dimos cuenta que no todos quieren dos kilos de la misma yerba o el mismo aceite y ya en febrero ampliamos la lista", sigue Sebastián.

En la experiencia de Clara, la cuestión del dinero no resulta problemática porque las familias saben que el pedido les llega una semana después de haber pagado y si surge algún problema el colectivo lo va a resolver. "La cuestión participativa es la más compleja, que la gente se vaya rotando y que no sea una cooperativa de consumo, porque somos una organización social y política que trasciende las compras".

La estructura del MPS funciona "de abajo hacia arriba". Cada grupo envía una persona a la reunión federal una vez por mes, donde cada barrio tiene un voto. Además los núcleos se agrupan en cuatro regiones: noreste, sur, oeste y este. "En las regionales discuten la logística de cada sector, los problemas de cada núcleo, o sea los temas territoriales, mientras el federal decide las compras, pero primero se discute en los barrios".

Uno de los debates en curso gira en torno a la necesidad de trascender a los distribuidores, de yerba o aceite, por ejemplo, ya que las grandes

empresas les venden a través de sus empresas de las que dependen. "Queremos pelear para que nos vendan directamente, ya que los distribuidores no pueden cubrir nuestra demanda", razona Sebastián.

En los talleres de formación explican cómo se conforman los precios y las vecinas terminan descubriendo que el intermediario se lleva la mayor parte del precio final. Prueba de ellos, es que "entre las diez mayores fortunas del Uruguay hay cuatro vinculadas a la industria y la intermediación de alimentos y que por algo las casas matrices de las grandes superficies son extranjeras", sigue Sebastián.

Más allá de esta crisis

Aunque el nombre del mercado haga hincapié en lo "popular", la realidad es más compleja. En los hechos, explican Sebastián y Clara, "la gran mayoría de las familias proceden de barrios de clase media, donde predominan profesionales y trabajadores con salario fijo, que pueden planificar la compra mensual y han reflexionado sobre su consumo".

Reconocen que se trata de un desafío mayor. Para superarlo, se proponen "reconstruir el papel del almacén de barrio, que pueda comprarnos al MPS y le gane no más de un 15 por ciento a los alimentos. Sería una forma de reconstruir las relaciones que estaban tejidas en torno al almacén".

En este punto, vale recordar el análisis de Immanuel Wallerstein quien, inspirado en el historiador Fernand Braudel, sostenía que lo que define al capitalismo no es el mercado sino los monopolios. "Los monopolios dominan negando la libertad e igualdad en el escenario económico", apunta.

El verdadero mercado, o la economía de mercado, es un mundo de realidades claras y "transparentes" donde predominan "procesos fáciles de captar". Los monopolios capitalistas son opacos, porque sus actores se introducen en circuitos y cálculos "que el común de los mortales ignora".

En los mercados (pensemos en las ferias vecinales o en los mercados campesinos) los beneficios son exiguos y las relaciones consisten en "comunicaciones horizontales" entre productores y compradores. Por el contrario, "los monopolios son asunto de fuerza, de astucia, de inteligencia (…) pero más que nada de poder"[8].

El crecimiento del MPS es alentador, tanto en la cantidad de personas involucradas como en la apertura de nuevos frentes, como la cuestión de género. Meses atrás crearon grupo de mujeres y de disidencias sexuales que participaron en la marcha del 8M. Clara ensaya una explicación: "Las encargadas del consumo de los hogares y de organizar la alimentación son las mujeres, y al entrar al Mercado se les impone el desafío de organizarse de otro modo".

Empiezan a trabajar junto a vecinas que no conocían, descubren la cuestión de los precios y "hacen un clic". "En los barrios populares está pasando algo interesante: una vecina compra un paquete de 25 kilos, lo fraccionan entre las vecinas y los intercambian por otros productos con las demás familias". De ese modo, al comprar al por mayor, la diferencia de precios se estira.

Sebastián es más enfático: "El desafío principal es que el Mercado se llene de los más pobres, que se lo apropien, porque son los que más lo necesitan ya que para ellos la crisis es permanente".

NOTAS:

[7]Inspirado en José Artigas, líder independentista aliado de pueblos originarios y negros.

[8]"Braudel y el capitalismo o todo al revés", en Impensar las ciencias sociales, Siglo XXI, 1998, pp. 227-237.

12

Brasil: *Teia dos Povos* (Red de los Pueblos)

La red surge en 2012 de la mano de Joelson Ferreira, militante del Movimiento Sin Tierra (MST) de Bahía, que se formó en agroecología y fue miembro de la dirección federal entre 2004 y 2005, el año en que Lula llega al gobierno. En esos años en el que todos los dirigentes y militantes de los movimientos miraban hacia las instituciones estatales como salvadores de los pueblos, Joelson formuló críticas a la dirección del MST clamando por la unidad con otros movimientos de base, pueblos y territorios.

En el asentamiento Terra Vista, donde vive con su familia, puso en práctica sus ideas produciendo una transición agroecológica que cambió el paisaje, la producción y hasta los ingresos de las personas, en dos décadas de acciones concretas por la soberanía de ese pueblo. En 2012 en la Jornada de Agroecología de Bahía fundan la Red de los Pueblos, con campesinos, quilombolas y miembros de la nación tupinambá.

Estas experiencias las relata Erahsto Felício en un libro apenas editado, de título "Por tierra y territorio"[10]. Allí explica que la Red es "una articulación de comunidades, territorios, pueblos y organizaciones políticas, tanto rurales como urbanas de pueblos ribereños, pescadores, nativos, *quilombolas*[9], periféricos, sin tierra, sin techo y pequeños agricultores, unidos mediante núcleos y eslabones básicos".

Uno de los conceptos que los identifica es la autonomía. Buscan construir una alianza de luchas por fuera de las instituciones y de la política electoral para dar forma a la autonomía de los pueblos y delinear un programa de soberanía alimentaria, como pasos necesarios para crear las condiciones para su propia sobrevivencia colectiva. Las Jornadas de Agroecología ya van por su sexta edición, las definen como momentos de encuentro de los pueblos. La última fue realizada antes de la pandemia en 2019.

En cada lugar donde hay un nodo de la Red, se proponen construir sistemas agroforestales, cisternas para captar agua de lluvia y una red de intercambio de semillas a la que conceden especial importancia. Los principios fundadores de la red son tres: la tierra y la alimentación como principios filosóficos y de vida, que se construyen a través de la solidaridad con los movimientos de defensa de la territorialidad, utilizando como instrumento la pedagogía del ejemplo.

El segundo consiste en trabajar y estudiar para permitir la construcción de nuevas formas de vida, deconstruyendo el legado de los modelos capitalista, racista y patriarcal. La tercera consiste en reafirmar la mirada ancestral vinculada a la historia y las tradiciones de cada pueblo, y la espiritualidad en la construcción de un nuevo tiempo.

Siempre he pensado que la forma como se construyen los procesos colectivos habla de los objetivos que realmente se persiguen, más allá de los discursos y programas explícitos. "Nuestro objetivo, por tanto, no es ser un movimiento social que englobe a otros. Queremos caminar juntos, no producir una unidad monolítica", explica Erahsto en su libro.

El segundo aspecto es que no necesitan quien los represente, o sea que buscan que la palabra la tomen directamente las personas de los pueblos. La Red está organizada a través de núcleos de base que son comunidades, pueblos, territorios y organizaciones que se territorializan. "Las directrices para la acción, la estrategia general y el destino de la lucha se derivan, por tanto, de los pueblos". Los enlaces de la Red son colectivos de agroecología, intelectuales, grupos de investigación universitarios, estudiantes, asociaciones, cooperativas y otros grupos que no están territorializados y que ofrecen apoyo a los núcleos base. No andan con rodeos: "Los que ya han conquistado la tierra y están construyendo en el territorio, tienen primacía sobre los que han estado reflexionando".

Cuando la red va creciendo se forma una red regional, que toma decisiones por consenso. Luego tienen divisiones que se organizan para trabajar en un área determinada, por ejemplo la División de Comunicación que se encarga del sitio web, las redes sociales, las comunicaciones y contactos lejos de cada territorio.

Están convencidos que la Red de los Pueblos no es algo nuevo, sino que reproduce las alianzas que combatieron la colonización, desde el gran Quilombo de Palmares (que duró casi cien años) hasta la resistencia de Canudos[11]. "Nuestro sentido de articulación y organización está, por tanto, más ligado al concepto de alianza de pueblos que a la idea de partido de individuos" (p. 129).

Frente al proyecto que quiere captar individuos en base a una concepción ideológica, la Red busca organizarse desde comunidades, pueblos y territorios. Se trata de una suma de comunidades en lucha y no de individuos. Sabe que "la suma de individuos conscientes proporciona una selección que no contiene tantas diferencias ideológicas", mientras "un organismo de los territorios puede contener a muchas personas dentro de una comunidad que no aceptan el camino revolucionario". Consideran que la heterogeneidad no es una desventaja, pese al hecho de que haya en las comunidades personas que rechazan el camino propuesto. Como ejemplo colocan el caso de los zapatistas en México, el PKK en Kurdistán y la Minga en Colombia, donde pueden trabajar intensamente sin necesidad de construir organizaciones homogéneas.

La Alianza Negra, Indígena y Popular se propone comprender y defender las diferencias. La propuesta más ambiciosa consiste en contribuir a que los pueblos se organicen y se auto-gobiernen. "Es necesario avanzar aún más en la organicidad para que las mayorías desorganizadas, fragmentadas, aisladas y anónimas encajen en la lucha por la Tierra y el Territorio" (p. 137).

Conceden especial importancia a la sabiduría ancestral y a la espiritualidad. "Hay un conjunto de sabidurías y virtudes que constituyen nuestros pueblos, más valioso que las armas en una revolución", dicen Erahsto y Joelson. "No se puede construir una nueva sociedad sin que las personas también se conviertan en una revolución interna que las haga nuevas mujeres y nuevos hombres" (p. 148).

La tradición marxista fue menos exitosa que las rebeliones populares
Entrevista con Erahsto Felício

Se formó como maestro de educación básica. Ahora se dedica a coordinar el sector de comunicación de la *Teia dos Povos* interactuando con un amplio grupo de unos 30 activistas. En la medida que su trabajo está ligado a internet, también contribuye en tareas de coordinación con otras geografías del movimiento, que en realidad es una red de comunidades de base.

Los partidos y los sindicatos crecen por afiliación individual y se dotan de una dirección que los unifica desde arriba. Pero la Red de los Pueblos trabaja con comunidades en las cuales no todos son parte del proceso, no todos sus integrantes apoyan la Red. ¿Cómo se formó la Red y cómo crece?¿Se puede decir que crece hacia los lados, en una expansión horizontal?

Decidimos no construir un proceso burocrático. El bautismo de la Red es un trabajo colectivo y comunitario. En general, cuando vamos a hacer una alianza con un movimiento o territorio, organización o comunidad, hacemos un esfuerzo conjunto (una *minga*) para construir algo que fortalezca a las personas de esa comunidad. Este pequeño evento se denomina pre-día, ya que debate y precede al Día de la Agroecología en Bahía, nombre que le damos al evento que nos reúne a todos. En el pueblo Tukun de los tupinambá (Ilhéus-Bahia) y en el Quilombo da Lagoa de Melquíades y Amâncio hacemos trabajos agroforestales.

Para que los tupinambá amplíen la soberanía alimentaria y que la cobertura vegetal tenga valor económico y espiritual, en la Laguna Melquíades tenemos que proteger su lago que ha sido degradado por años de sequía. A modo de ejemplo, en el MSTB (trabajadores sin techo en Bahia) construimos un aljibe para recoger agua de lluvia, ya que las ocupaciones urbanas pierden rápidamente su acceso al agua como forma de obligarlos a abandonar la tierra. Es el trabajo que hacemos juntos para construir la alianza.

Aunque algunos van y vienen, otros se quedan, pero la pregunta que nos hacemos es cómo cada organización o comunidad apoya la construcción de la Red. Tenemos un crecimiento horizontal que hacemos con la paciencia histórica que nos enseñan nuestros mayores. Se necesita mucho tiempo para que la cosmovisión, el respeto a la madre tierra y el horizonte de lucha concreta contra el capitalismo se enraícen en una comunidad, pero esto es como una semilla, no se le puede exigir que germine instantáneamente.

Nosotros, en general, no decimos cuántos somos, pero sí podemos decir que en la última reunión tuvimos casi cinco mil personas acampadas en Chapada Diamantina para discutir tierra, territorio y la defensa de las aguas. Además tenemos territorios y aliados en todas las regiones de Bahía. En Brasil, existe una red hermana llamada Red de Pueblos y Comunidades Tradicionales de Maranhão, que tiene un trabajo muy fuerte en defensa de los pueblos y sus autonomías. Ocupan tierras y se defienden más allá de la colectividad de la que forman parte. Nuestra fuerza principal está en Bahía y Maranhão. En los últimos años, han comenzado a surgir comisiones de apoyo a la Red en São Paulo, Río de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará y Minas Gerais. En Rio Grande do Sul este proceso está avanzado y ya realizan tareas conjuntas, pero cada geografía tiene sus diferencias y sus propios ritmos.

Los zapatistas hablan de una autonomía integral: territorio, agua, alimentación, justicia propia, autodefensa. Ustedes recorren un camino similar. ¿Podrías profundizar en la autodefensa que ustedes dicen no debe ser armada sino masiva?

Brasil tiene una historia de rebeliones populares poderosas y masivas en el siglo XIX hasta principios del XX. Las guerrillas y los movimientos para la toma del poder por las armas asociados a la izquierda en Brasil, han podido armarse pero no tienen masas, lo que invariablemente condujo a terribles fracasos en el siglo XX, especialmente durante la dictadura de Getúlio Vargas (1930-1945) y el régimen militar instaurado en 1964.

Lo que garantiza el éxito de una reconquista de tierras, en la experiencia de nuestros mayores (como el maestro Joelson Ferreira, con más de tres

décadas reclamando tierras), es la cantidad de personas y si tenemos suficiente comida para mantenernos en esta tierra hasta que empiece a dar sus primeros frutos. Podemos ganar la tierra frente al Estado si hacemos suficiente presión política de las masas establecidas en esa zona, durante el tiempo necesario para forzar un cambio de rumbo de los que protegen el latifundio. En la recuperación de tierras nos inspiramos en lo que hicieron los pueblos indígenas y sin tierra en Bahia.

Sin embargo, de lo que estamos hablando hoy es de luchar por la recuperación de tierras en una escala aún mayor que en las décadas de 1980 y 1990, porque el latifundio está acelerando el robo de tierras en el país. Con las redes 5G, la violencia de los pesticidas y la vigilancia con drones, la represión será aún mayor. Por lo tanto es urgente la ocupación de áreas, que puedan conectar territorios rebeldes y en resistencia, construyendo así un gran territorio capaz de tener autonomía. Esto no excluye la autodefensa tradicional, pero no la colocamos en el horizonte porque estamos ante un genocidio de pueblos indígenas y negros que busca cualquier justificación para nuevas matanzas.

Para nosotros se trata, primero, de recuperar tierras, construir nuevas comunidades, después construir nuestro sistema de justicia comunitaria para evitar que las fuerzas del Estado entren en nuestros territorios. Sólo entonces las personas de una determinada comunidad pueden pensar en la creación de su propia autodefensa. Para alcanzar estos objetivos es necesario superar la adicción histórica al alcohol en nuestra sociedad, así como los abusos de cualquier droga y el machismo, ya que la historia de las personas con armas en nuestra sociedad ha alimentado las tasas de feminicidios. Este cambio de actitud no es algo que podamos lograr rápidamente, pero está en marcha. Para nosotros los pueblos zapatistas son como faros para la organización, el cuidado de las personas y del territorio, pero aún estamos muy atrasados en este proceso.

En el libro no mencionan la justicia propia, como le llaman los nasa de Colombia. Pero todos sabemos que donde funciona la comunidad hay formas de justicia. ¿Cómo trabajan en este aspecto?

Aprendimos que la mayoría de los casos policiales de delitos violentos no se resuelven en Brasil. En muchos casos no hay juicio, ni siquiera investigación policial. ¿Cómo se "resolvieron" estos delitos? Bueno, la sociedad brasileña ha vivido la mayor parte del tiempo y en la mayoría de las geografías sin otra relación con el Estado que la represión o la recaudación de impuestos. Por eso se fueron constituyendo formas de resolución de conflictos dentro de las propias comunidades. Estamos iniciando este proceso. Hay territorios que tienen mucha conciencia como para no exigir soluciones a la policía, sobre todo porque son víctimas de la policía.

En Bahia, la ciudad más negra fuera de África, el 97% de los asesinados por la policía son negros. Es lo que nuestros compañeros de la *Campanha Reaja ou Será Morta, Reaja ou Será Morto*[12] llaman genocidio negro[12]. ¿Cómo vamos a pedir ayuda a los que nos matan? En algunas comunidades indígenas, campesinas y en algunas ocupaciones urbanas, se ha instalado la mediación de los mayores en los conflictos como una forma de conseguir reparaciones o de evitar que los conflictos desemboquen en violencia. Cuando la comunidad está más arraigada en la lucha, se dan casos de expulsión del territorio de hombres violentos con sus parejas e incluso medidas de reparación a través del trabajo comunitario. Aquí está la máxima de respetar las diferencias entre los pueblos, porque cada pueblo ha encontrado sus propias formas de justicia. La esperanza es que en los próximos años estas experiencias se conviertan en un sentido más común a ser aplicado en todas nuestras áreas.

Me pareció muy importante el papel que le otorgan a la ancestralidad y la espiritualidad. ¿Crees que la espiritualidad es un elemento siempre presente en lo comunitario, que además contribuye a la construcción organizativa?

Aferrándose al materialismo, parte de la izquierda no entendió el papel de la ancestralidad en la vida de los pueblos. No en todas las comunidades la toma de decisiones a través de asambleas es el camino más potente para mantener unidas a las personas. Brasil tiene una formación cultural

marcada por la diáspora africana, por la esclavización de los pueblos de nuestro continente que han sido arrastrados hasta aquí. En una comunidad de *terreiro*[14], el liderazgo está mediado por *orixás*, *n'kisis* o *voduns*[15], por ejemplo. En los quilombos hay prácticas de asamblea, pero también un gran peso de la palabra de los mayores, de los responsables de la tradición espiritual de ese lugar.

Debemos respetar estas prácticas. No se puede llegar a una comunidad proponiendo una alianza y lo primero que se hace es desorganizar la organicidad del pueblo, especialmente cuando en Brasil la tradición marxista fue mucho menos exitosa que las rebeliones populares. Nos enseña quien conoce el camino. Pero es posible leer la ancestralidad de otra manera. Decimos que respetamos a los mayores (nuestros líderes) y a los mayores de nuestros mayores (*entidades*, los que ya se fueron). Podemos leer a los mayores de nuestros mayores como estos seres en los que creen los pueblos indígenas, muchos pueblos *quilombolas*, y tantos otros, como *entidades*, así como leer la propia memoria de los pueblos, sus registros de luchas, sufrimientos, victorias, en otras palabras, el camino que hicieron para llegar hasta aquí. Entonces, desde de la militancia se puede leer de esa otra manera, pero en todo caso es fundamental respetar y protegernos del permanente intento del capitalismo por replantear todos los aspectos de la cultura de nuestros pueblos.

Como dice el dirigente indígena y escritor Ailton Krenak, para su pueblo, una sierra, una montaña, un bosque, un río, pueden ser ancestros, pero para el capitalismo son sólo "recursos naturales". El capital convierte lo que profana en mercancías. Proteger los territorios del valor de cambio es algo básico para eludir el chantaje. Si preservamos el territorio la comunidad estará más firme, más unida, con mejores condiciones de supervivencia. La ancestralidad contribuye en la cohesión del pueblo, ya sea por los continuos rituales que realizan en el territorio, por el trabajo colectivo tradicional o por el intercambio de conocimientos entre los mayores y las generaciones futuras.

NOTAS:

[9] Comunidad negra en un territorio propio.

[10] Se pueden consultar partes del libro en https://drive.google.com/file/d/1HFkGbFHFo6hTBfzKumW6rA_PxTFZoUUK/view

[11] Palmares fue un quilombo formado en el estado de Alagoas por miles de esclavos fugados de la esclavitud en las plantaciones, en que vivieron negros y mestizos, pero también indígenas y blancos perseguidos por la autoridad colonial. Se extendió desde 1580 a 1710, cuando fue destruido por el ejército portugués. La rebelión de la comunidad de Canudos, en el interior de Bahía, enfrentó al Ejército brasileño con los integrantes de un movimiento popular de contenido socio-religioso entre 1896 y 1897.

[12] Reacciona o Serás Muerta, Reacciona o Serás Muerto.

[13] Para conocer más de este movimiento: https://reajanasruas.blogspot.com

[14] Terreiro, terreno en castellano, es el templo/territorio donde se celebran los ritos de los diferentes cultos afrobrasileños, como el candomblé.

[15] Sacerdotes y líderes espirituales de las comunidades responsables los cultos afrobrasileños. Los Orixá son divinidades de los pueblos yorubas que provienen de Nigeria; los N'kisi pertenecen a los bantús que provienen de Angola, Mozambique) y Vodum al pueblo jêje de Benín y Togo.

13

La derrota del racismo en Bolivia

Brecha, 23 de octubre de 2020

La abrumadora derrota de la derecha boliviana y la tremenda victoria del MAS, apuntan al nacimiento de un nuevo ciclo político, que no puede resumirse en el retorno de los partidarios de Evo Morales al Palacio Quemado: ahora la derecha es más fuerte que en 2005, las bases masistas están empoderadas luego de su tenaz resistencia al racismo y el nuevo gobierno desentona con el caudillismo del anterior.

En sus primeras declaraciones el presidente electo Luis Arce Catacora esbozó modos y maneras muy diferentes a las de Evo Morales en sus 14 años de gobierno: "Vamos a construir un gobierno de unidad nacional, vamos a trabajar y vamos a reconducir el proceso de cambio sin odios, y aprendiendo y superando los errores como Movimiento Al Socialismo".

Si sus declaraciones encarnan lo que siente una parte de ese 55% que votó por la candidatura Arce-Choquehuanca, es posible que Bolivia se encamine en una dirección bien diferente a la que predominó durante los gobiernos de Morales-García Linera y en particular durante el año en el que gobernó Jeannine Añez.

Algo importante parece haber cambiado en el seno del MAS, en particular entre las dirigencias que permanecieron en el país durante un año plagado de incertidumbres y el despliegue de odio racista por parte del gobierno golpista.

Un cambio que se refleja en las palabras de la presidenta del Senado, la masista Eva Copa, sobre el anunciado retorno de Morales: "Nosotros no creemos que sea el momento adecuado, él tiene temas que solucionar todavía, pero nosotros a la cabeza de Luis Arce y como Asamblea (parlamento) tenemos tareas que culminar".

Un resultado transparente

Explicar por qué el MAS, sin Morales como candidato, recogió casi diez puntos más que un año atrás, requiere una doble mirada. Por un lado, la gestión del gobierno de Añez y en particular del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue tan desastrosa que casi todos los analistas la colocan en lugar destacado a la hora de desmenuzar los resultados.

"Añez fue la gran jefa de campaña del MAS", dijo el analista Roger Cortez, y agregó que habría que dar "medallas especiales a los ministros de Gobierno y Defensa". El caso de Murillo enseña los peores rasgos de un gobierno de transición que deseaba quedarse el mayor tiempo posible. El rechazo a Murillo incluyó a varios ministros que renunciaron a sus cargos por desconformidad con sus declaraciones, ya que acostumbraba amenazar a sus oponentes e investigó a periodistas y a otros ministros que lo cuestionaron. El racismo, las posiciones ultraderechistas y un odio visceral sin filtro, enajenaron del oficialismo incluso a las clases medias que se pronunciaron contra Morales en octubre de 2019.

Lo cierto es que el MAS ganó en los cinco departamentos de mayoría indígena: en La Paz y en Oruro superó el 66 por ciento; en Cochabamba votó por encima del 60 por ciento; en Potosí alcanzó el 56 por ciento y en Pando el 45. Un Carlos Mesa sin fibra y muy escorado a la derecha, ganó en Tarija por diez puntos, pero en Beni y Chuquisaca con márgenes ajustados. En Santa Cruz, ganó con holgura el ultraderechista Luis Fernando Camacho, con el 45 por ciento de los votos.

La polarización es evidente, tanto como el crecimiento de una nueva derecha radical y racista. Recordemos que en las elecciones de 2014 el MAS había obtenido casi el 50 por ciento de los votos en Santa Cruz y que ahora obtuvo algo más de la mitad, incluso siete puntos menos que en octubre de 2019, lo que a contracorriente del resto del país.

Para Cortez, el resultado se explica por el predominio de un electorado conservador, no en el sentido ideológico sino pragmático, "por la situación que vive el país, porque conoce las fechorías que hizo el gobierno del MAS pero también sabe y recuerda que los resultados que obtuvo en

materia de pobreza e igualdad". En suma, votó por lo conocido, ya que "Arce tiene mejores posibilidades que sus contrincantes de hacerlo bien".

Sin embargo, no se muestra nada optimista de cara al futuro inmediato. Sostiene que el MAS va a tener en contra enemigos más poderosos que los que tuvo en las elecciones: el coronavirus, ya que se viene la segunda ola; una economía con ingresos decadentes de las exportaciones de gas e inversiones en petróleo que no llegarán.

El factor Choquehuanca

El vicepresidente electo tiene una extensa trayectoria política. Durante el gobierno de Morales fue canciller, hasta que el jesuita Xavier Albó tuvo la ocurrencia de mencionarlo como candidato a la presidencia, ya que el referendo de 2016 había denegado a Evo esa posibilidad.

Mantiene un largo diferendo con el ex vicepresidente Álvaro García Linera (quien lo tilda de "pachamámico" por su apoyo a la espiritualidad ancestral) y fue aceptado como vice a regañadientes por Evo, porque las bases y los movimientos se empeñaron en defender su candidatura.

Pablo Solón, ex embajador ante la ONU por el gobierno de Morales, lo escribió sin matices al día siguiente de las elecciones: "El MAS no ganó por Evo sino a pesar de Evo. Evo quería marginar a David Choquehuanca que es el candidato elegido por las organizaciones sociales principalmente indígenas de tierras altas y los valles. El triunfo del MAS fue aplastante en las áreas rurales de estas regiones en gran medida debido a la candidatura de David".

En esas regiones es donde el MAS recuperó los niveles de votación más altos que tuvo en su historia y que habían caído hasta mínimos en octubre: 48 y 49 por ciento en Oruro y Potosí, 53 por ciento en La Paz, cifras que crecieron entre 15 y 18 puntos en sólo un año. Algo que no puede explicarse sólo por el desastroso gobierno Añez-Murillo.

La conclusión del propio Solón, es lapidaria: "Después de casi una década, las organizaciones sociales indígenas del altiplano y los valles asumieron una determinación democrática desde las bases que hicieron prevalecer a medias frente a Evo, porque su posición original era David presidente. El resultado de las elecciones 2020, muestra que en el 2019 el MAS hubiera ganado las elecciones tranquilamente si dejaba de insistir en la reelección inconstitucional de Evo Morales".

Pero el llamado "factor Choquehuanca" no es un asunto personal, sino un emergente de las relaciones entre la cúpula del MAS (Evo y Álvaro) y las organizaciones sociales. Es probable que en los primeros meses no se repitan escenas de intimidación y cooptación de los movimientos, sino que la pelea interna se focalice en arrinconar al vice, contando con la neutralidad del nuevo presidente.

"Arce está decidido a mostrar otra cara", explica Cortez, "pero la situación interna del MAS es complicada", por lo que vaticina que el actual presiente no cumplirá los cinco años de su mandato, ya que a los problemas internos del partido de gobierno se debe sumar una crisis económica que no dará tregua.

En la línea de Choquehuanca, se sitúan decenas de dirigentes locales en toda Bolivia, que rechazan a los que "nos llevaron a cometer errores", en obvia alusión al intento reeleccionista de Morales, y ni siquiera mencionan a su ex lugarteniente, García Linera, del cuál prácticamente no se habla estos días en Bolivia.

Movimiento y proceso de cambio

El director del periódico Pukara, de orientación indianista, Pedro Portugal, señaló que "cuando Evo Morales renunció al poder, tras las elecciones fallidas de 2019, se vislumbró que sectores populares e indígenas eran contrarios al expresidente o estaban indiferentes a su suerte" (*Página Siete,* 20 de octubre de 2020).

Portugal reúne en su entorno a buena parte de la intelectualidad aymara, en evidente pugna por el relato histórico-político con García Linera, que a su vez lidera lo que los indianistas denigran como "el entorno blancoide" de Morales. Explica que Choquehuanca se movió a sus anchas en el mundo andino durante la campaña electoral. Entre otras cosas, relataba cómo fue discriminado y excluido del gobierno porque los consideraban "representante indígena". El conflicto que tuvo con Linera, e indirectamente con el mismo Evo Morales, le habría servido para congeniar con sectores indígenas que empezaban a tener una actitud crítica al MAS, según Portugal.

Prueba de ello son las charlas que Choquehuanca mantuvo con Felipe Quispe, el *Mallku*, histórico dirigente aymara del Altiplano que asumió el liderazgo en los bloqueos de agosto que forzaron al régimen a convocar elecciones en octubre. Días antes de la elección, Quispe dijo que iba votar por el MAS para respaldar a Choquehuanca. "En estas elecciones tenemos que votar para nuestros propios hermanos que están como candidatos, el caso de nuestro hermano David Choquehuanca" (*Eju.tv*, 15 de octubre de 2020).

Quispe mantuvo tensos enfrentamientos con Morales durante el ciclo de protestas de los años 2000-2005, que se saldó con la llegada del MAS al gobierno. Cuando su hijo Ayar fue asesinado en mayo de 2015 en una plaza de El Alto, acusó indirectamente a su ex compañero de guerrilla, el entonces vicepresidente García Linera, de haber sido el inspirador del crimen (*Correo del Sur*, 3 de junio de 2015).

Lo cierto es que los vientos no corren a favor de los cuadros que encabezaron el gobierno de Evo. Las juventudes del MAS se pronunciaron por el no retorno inmediato del ex presidente apelando a la figura andina de la rotación: "Las 20 provincias hemos propuesto que el hermano presidente Evo Morales no tenía que volver porque él ya ha trabajado" (*Radio Fides*, 19 de octubre de 2020).

Las bases de los movimientos sociales parecen tener claro que no debe repetirse el libreto anterior, en particular en las relaciones con el gobierno. El ex dirigente fabril Oscar Olivera, que fue el referente principal de la

"guerra del agua" en abril de 2000, que dio inicio al ciclo de protestas anti-neoliberal, nos dijo que "la gente confía en reconducir el proceso de cambio", y se mostró favorable a Choquehuanca.

Solón coincide con esta apreciación: "La clave para un relanzamiento del proceso de cambio no está tanto en el futuro gobierno sino en la capacidad de autogestión y autonomía de las organizaciones sociales y su capacidad de retomar un curso de propuestas alternativas a todos los niveles". Además piensa que las demandas de 2003, articuladas en torno a la Agenda de Octubre que inspiro al primer gobierno de Evo, está agotada y es necesaria una nueva estrategia.

Un dato mayor es la casi inevitable repetición de una historia de prebendas a los dirigentes, como viene aconteciendo desde la revolución de 1952. O sea, ese vínculo corrupto ya es cultura política y práctica asentada. Esto viene agravado por lo que Solón denomina como "nueva burguesía" surgida durante los gobiernos del MAS, "asociada a la burocracia estatal, los contratos con el Estado, el comercio, el contrabando, las cooperativas mineras y la producción de la hoja de coca ligada al narcotráfico".

Piensa que estas nuevas élites seguirán incidiendo en el gobierno y en el partido. "El futuro gobierno del MAS es ya un espacio en disputa", porque Morales y su entorno "harán todos los esfuerzos para controlar el gobierno, lo que implica arrinconar o re-cooptar a las organizaciones que respaldan a David Choquehuanca", insiste Solón.

La palabra la tendrán, una vez más, las bases sociales rurales y urbanas, las que llevaron al MAS al gobierno, las que lo dejaron caer al no movilizarse en su defensa y luego pelearon contra la derecha racista hasta doblegarla. Acumulan una larga experiencia y sabiduría, que pondrán en juego en los próximos meses.

14

El pueblo mapuche resiste la guerra

La ofensiva represiva del Estado de Chile contra el pueblo-nación mapuche se ha intensificado durante la pandemia. A mediados de año se produjeron hechos poco frecuentes, como ataques racistas y fascistas a comuneros y comuneras que mantenían una resistencia pacífica en apoyo de las huelgas de hambre, desencadenada por la grave situación del *machi* Celestino Córdova cuando cumplía cien días de ayuno, en julio de 2021.

No es el único caso de violencia anti-indígena, sino que forma una escalada del gobierno de Sebastián Piñera que desemboca en la profundización de la Ley Antiterrorista, heredada de la dictadura de Pinochet y se aplica sólo en el sur de Chile, en los territorios donde las comunidades resisten la forestación extractiva que cerca y ahoga a las comunidades.

Los hechos muestran una inflexión profunda que puede resumirse en una escalada de violencia todo un pueblo. En la noche del 1 al 2 de agosto, civiles armados atacaron a personas mapuche que ocupaban las municipalidades de Curacautín, Ercilla, Victoria y Traiguén. Se trata de militantes de la Asociación de Paz y Reconciliación en la Araucanía (APRA), "organización supremacista blanca de ultraderecha, integrada por latifundistas y empresarios transnacionales, "usurpadores de las tierras mapuche en Wallmapu", como denunciaron 21 organizaciones[16].

Las organizaciones denuncian, además, que el cuerpo de Carabineros dejó actuar impunemente a los civiles violentos que golpearon a los mapuche, quemaron sus vehículos y entonaron gritos de odio y racismo, llegando a colaborar con los agresores racistas.

Recordemos que la crisis actual se desencadena con la huelga de hambre de Celestino que reclama se aplique el Convenio 169 de la OIT, que permite que cumpla la pena de prisión dictada por la justicia chilena en su comunidad. A la huelga de hambre del *machi* Celestino se fueron sumando más de 20 presos de las cárceles de Temuco, Angol y Lebu.

A medida que la salud de los huelguistas se fue deteriorando por más de tres meses de ayuno, varios *lof* (comunidades) comenzaron a movilizarse, en particular en el triángulo Tirúa-Temuco-Ercilla, que es el centro histórico de la dignidad y la resistencia de este pueblo.

Las huelgas de hambre denuncian, además, la represión que están sufriendo los mapuche en todo el país. El ejemplo más lacerante es la persecución contra las vendedoras de hortalizas y de *cochayuyo*, un alga marina de gran poder alimenticio que venden en los mercados. En diciembre de 2018, una ordenanza del alcalde de Temuco prohibió la actividad comercial ambulante en un perímetro de exclusión en torno al mercado. La particularidad es que la ordenanza impone multas tanto a quienes venden como a quienes compran sus productos.

La prohibición y la consiguiente represión recaen sobre dos sectores: un colectivo de 750 pequeños horticultores artesanales de áreas cercanas a Temuco y los vendedores de cochayuyo, uno de los alimentos más apreciados en Chile. En varias ocasiones las vendedoras y los compradores se ha unido para frenar la represión policial.

Hacia fines de noviembre el gobierno de Sebastián Piñera decidió dar un giro a la derecha, por su profundo desgaste luego de la revuelta iniciada en octubre de 2019 que continúa activa, sumada al fracaso de la contención de la pandemia de coronavirus y luego de una derrota parlamentaria que permite retirar el 10% de los ahorros en los fondos previsionales. Esto fue posible por la división en su base de apoyo parlamentario.

Este viraje se concretó en el nombramiento de un pinochetista al frente del Ministerio de Interior, Víctor Pérez. Su primera actividad pública consistió en un viaje a Wallmapu, donde hizo un discurso de orden

y seguridad y no dejó el menor margen para la negociación. No es ninguna casualidad que luego del viaje del ministro se hayan activado los grupos racistas de ultraderecha. El gobierno de Piñera es muy débil, acosado por la calle y por la derecha, y finalmente dejó de lado cualquier tentación dialoguista para recomponer su base de apoyo incorporando al pinochetismo al gabinete.

El Centro de Investigación Periodística (CIPER) difundió días atrás un informe de Inteligencia de Carabineros, de 2015, que individualiza agricultores que estaban formando grupos de carácter paramilitar, pero no se tomó ninguna medida para detenerlos y frenar el desarrollo de esos agrupamientos.

Pese a la brutalidad de la represión y a una escalada de terrorismo de Estado, las principales organizaciones reafirmaron su camino histórico: "Estos ataques, más que amedrentarnos, nos reafirman en nuestra lucha por la restitución de nuestros derechos territoriales y políticos, por la autonomía y la autodeterminación para el País Mapuche" (*CIPER,* 5 de agosto de 2020).

El domingo 9, hubo una masiva concentración de diversas comunidades mapuche en la plaza de Curacautín, donde se leyó un documento que reafirma la solidaridad con los presos en huelga de hambre y denuncia a las empresas forestales y multinacionales demandando que "las 3 millones de hectáreas de las forestales sean repartidas para recuperar el territorio mapuche".

Finalmente, hace un llamado a la organización de los mapuche de la ciudad y el campo para que recuperen la lengua (*mapudungun*), la cosmovisión y la forma de ser tradicionales, "porque lo mapuche no es una raza sino una forma de entender la vida de todos los seres y las cosas" (*Mapuexpress*, 8 de agosto de 2020).

Lo sucesos de Panguipulli enseñan el hostigamiento a todo un pueblo pero también la resistencia imparable. A comienzos de febrero efectivos de Carabineros atacaron a un malabarista callejero que falleció tras recibir múltiples disparos. Panguipulli es una población en la región

de Los Lagos, en la provincia de Valdivia, con poco más de 30 mil habitantes.

Esa misma noche los pobladores quemaron diez edificios estatales y de empresas privadas, entre ellos la municipalidad, el Juzgado de Policía Local, el Registro Civil, varias oficinas municipales y de Correos, entre otros. Las autoridades estatales y municipales lamentaron la destrucción de edificios pero casi no se pronunciaron sobre el asesinato del joven por Carabineros.

Lo que preocupa a las autoridades es que la violencia estatal está siendo respondida por una generación de jóvenes de las comunidades. El "Barómetro de Conflicto" –compilado por los empresarios agrupados en la Multigremial de La Araucanía- indica que en el año 2020 hubo 538 atentados: 306 corresponden a vehículos, 142 a maquinarias y equipos y 90 a construcciones (*El Mostrador*, 11 de febrero de 2021). Según el informe, se trata de un aumento de un 42%.

Si se comparan las cifras de hechos violentos desde los dos últimos años y medio del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, vale decir, desde agosto de 2015 hasta marzo de 2018, resulta que son inferiores en alrededor de dos tercios a las ocurridas durante el actual gobierno del presidente Piñera.

La política represiva ha cosechado numerosos fracasos. Lo sucedido a comienzos de enero con la ocupación militar de las comunidades de Temucuicui, fue para la Comunidad de Historia Mapuche "un operativo político-represivo con el despliegue de 800 policías traídos de distintas partes del país, debidamente artillados y con apoyo aéreo (helicópteros y drones) con la intención de allanar dichas comunidades, generando violencia policial cuya masividad no se veía desde los tiempos de la dictadura de Pinochet" (*Mapuexpress*, 11 de enero de 2021).

Este bien orquestado operativo se realizó con el pretexto de desmantelar redes de narcotráfico y "crimen organizado" en la región de La Araucanía. Sin embargo, los hallazgos policiales para nada constituyen evidencias de la existencia de tales redes organizadas ni de armamento a escala mayor

y dejan al descubierto que se ha tratado de una burda y torpe maniobra política y policial amparada por el actual gobierno chileno para legitimar su persistente política de criminalización de las luchas por los territorios, la autonomía y la autodeterminación del pueblo nación mapuche.

"Casualmente", el operativo se produjo el mismo día en que el Tribunal Penal de Angol emitía el veredicto sobre el caso del asesinato de Camilo Catrillanca, un respetado y autoridad de la comunidad de Temucuicui, sucedido en noviembre de 2018, que incendió el país mapuche (Wall Mapu) y a todo Chile.

Es paradójico que se realice un operativo de esta envergadura y nivel de violencia, señala la Comunidad de Historia, "con un argumento de persecución al tráfico de drogas", cuando jamás las instancias policiales del Estado chileno lo han hecho así en zonas y regiones donde las estadísticas indican que existe un volumen mayor, datos que son de conocimiento público. "Todo esto reafirma que se trata de una acción represiva y mediática tendiente a deslegitimar la justa lucha de nuestro pueblo por sus territorios, pretendiendo instalar a la vez la figura de "narcoterroristas" que los gremios, el fascismo y la terratenencia local vienen enunciando en su estrategia comunicacional".

La Resistencia Mapuche de la Franja Lavkenche emitió un comunicado el 11 de febrero en el que reivindica un conjunto de acciones entre las comunas de Cañete y Contulmo, que dejaron como saldo "numerosos camiones destruidos, ataques armados a la policía y cortes de caminos en distintos puntos de este tramo de 50 kilómetros, estratégico para el transporte de mercancías y materias primas que se explotan en los suelos usurpados de Wallmapu".

La resistencia mapuche en el sur de Chile la protagonizan comunidades, colectivos de mujeres y LGBT, estudiantes y pobladores urbanos, pequeños grupos activos de las nuevas generaciones. Son difusos y enraizados en los territorios, no conforman una gran organización centralizada, no atacan personas sino bienes de las empresas que explotan la tierra. Por eso no es fácil para la policía desarticular la resistencia.

Desde el gobierno de Sebastián Piñera, parecen no aprender de la historia y, sobre todo, muestran que se les han agotado las ideas. A mediados de febrero, el presidente llamó a perfeccionar la Ley Antiterrorista. "Para poder combatir con mayor eficacia estos actos de violencia y estos actos de terrorismo, entre estas leyes necesitamos con urgencia tener una Ley Antiterrorista más eficaz y más útil que la que hoy tenemos" (*Diario UChile*, 22 de febrero de 2021).

NOTAS:

[16] En https://bit.ly/31Ap1aL.

15

Argentina: Masiva toma de tierras de los sin techo

Pelota de Trapo, 24 de setiembre de 2020

Durante la pandemia han arreciado las tomas de tierras por familias que no tienen dónde vivir, ya que fueron expulsadas de sus pensiones o viviendas alquiladas por no poder pagar, o viven tan hacinadas que buscan la oportunidad para construir una vivienda precaria en tierras tomadas.

En los primeros meses de la pandemia se registró un desplome de más del 12% del producto bruto en Argentina, agudizando la pobreza. El epicentro de las ocupaciones es la Región Metropolitana de Buenos Aires que incluye la ciudad de Buenos Aires y 40 municipios que la rodean, con casi 15 millones de habitantes. La zona más pobre y conflictiva son los municipios del sur, donde se han registrado las principales ocupaciones desde la década de 1970. Sólo en la provincia de Buenos Aires se habrían registrado más de 200 tomas de terrenos durante la pandemia.

La Plata es la capital provincial donde se registraron no menos de 22 tomas de terrenos durante el primer semestre de 2020. La mayor ocupación colectiva de terrenos se desarrolló desde el mes de julio en Guernica, perteneciente al distrito Presidente Perón, donde 10 mil personas, incluyendo unos 3 mil niños y niñas, se extienden sobre unas cien hectáreas que tienen orden de desalojo, pero están dispuestas a resistir.

Se trata de lotes que estaban abandonados desde hace muchos años, al punto que los dueños de una parte de esas tierras hace 30 años que no pagan impuestos. Los medios de la derecha y el sector empresarial sostienen que se trata de "usurpación", una figura delictiva que implica violencia, y exigen la rápida respuesta judicial y policial. Sin embargo, fuentes oficiales aseguran que la mayoría de las tomas son

"ocupaciones" porque las tierras no están alambradas y el ingreso se produce de forma pacífica.

Para paliar las necesidades de los sectores más empobrecidos, el gobierno implementó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que perciben los trabajadores informales y monotributistas que no pueden ejercer sus labores durante el confinamiento, y que asciende a 10 mil pesos (unos 60 euros en el mercado paralelo). Alrededor de nueve millones de personas reciben este beneficio, compatible con otros ingresos como la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo.

En Argentina existe una larga tradición de tomas de terrenos, ya sean fiscales o privados, como forma de solucionar la crisis habitacional estructural, ya que faltan cinco millones de viviendas en una población de 45 millones de habitantes.

"A partir de la década de 1990, las estrategias del acceso al hábitat por parte de las clases populares en el Gran Buenos Aires se vieron enfrentadas a nuevos desafíos", señala un informe de la Agencia Red Acción. Se agotó la tierra disponible, sobre todo en el primer cinturón, el más cercano a la capital, por el aumento de la población y el desarrollo de barrios privados que ocupan las mejores tierras.

Un informe del Registro Nacional de Barrios Populares, asegura que existen 4.416 "barrios populares" en los que viven cuatro millones de personas, casi el 10% de la población, que han sido mapeados hasta diciembre de 2016. La mitad están en la provincia de Buenos Aires.

Se considera barrio popular a los que están formados por ocho familias como mínimo, y aquellos donde más de la mitad de la población no tiene título de propiedad, ni acceso por lo menos a dos servicios básicos como agua corriente, energía eléctrica con medidor o red de cloacas. Todos estos barrios han sido ocupados, ya sea por la suma individual de familias (villas) o a través de una organización colectiva (asentamientos).

- - -

Las tomas organizadas de tierras urbanas o periurbanas comenzaron bajo la dictadura militar, como respuesta a la ofensiva para expulsar a las familias villeras de Buenos Aires, para abrir amplios terrenos céntricos a la especulación. El sacerdote Raúl Berardo, impulsor de las primeras tomas, me relató al calor del levantamiento de diciembre de 2001, cómo fue aquel proceso.

Las primeras tomas de tierras se produjeron en Quilmes y Almirante Brown, entre septiembre y noviembre de 1981, dando origen a la formación de seis barrios: La Paz, Santa Rosa de Lima, Santa Lucía, El Tala, San Martín y Monte de los Curas. En esas tomas participaron unas 4.500 familias y 20.000 personas, ocupando un espacio de 211 hectáreas. "En ese momento le llamamos 'asentamientos', como recuerdo del pueblo judío que saliendo de la esclavitud del faraón, se 'asentaron' en el desierto al cruzar el Mar Rojo, para luego marchar a la tierra prometida", sostuvo el padre Berardo en una larga conversación en su casa en el invierno de 2002.

A diferencia de lo que sucedía en las villas, estas ocupaciones son masivas, organizadas y planificadas, se buscan terrenos fiscales y se suele ocupar de noche para disminuir la intensidad del conflicto y resistir mejor la presión y la represión. Cada familia se asienta en un lote, se realiza el trazado de las calles (dándole continuidad al trazado urbano) y se dejan libres los espacios para el equipamiento comunitario.

Esta forma de lucha pudo consolidarse no sólo por el trabajo previo, sino también por el momento en que se lanzaron las ocupaciones. En 1981 el régimen militar estaba en retirada y debilitado, cuestionado internacionalmente por las violaciones a los derechos humanos y contestado también en el país por las Madres de Plaza de Mayo, que contaban cada vez con mayor apoyo popular. La represión ya no se manifestaba con la brutalidad de años atrás, los espacios para la acción colectiva eran mayores.

Antes de llegar a la ocupación, se realizaban talleres de debate y formación, se hablaba de la "tierra prometida", en el mismo sentido que lo hacían en ese mismo momento las comunidades de base en Brasil (donde se realizaban las primeras ocupaciones de lo que más tarde sería el movimiento sin tierra, impulsadas por la Pastoral de la Tierra), en las que participó Berardo meses antes de llegar al conurbano.

En el invierno de 1981 el régimen prohibió la Marcha del Hambre convocada por las comunidades de base y la CGT de Quilmes (donde los sectores críticos eran mayoritarios), registró un dramático empeoramiento de las condiciones de vida de los más pobres. El obispo Novak expresó que toda la zona era "una verdadera ciudad sitiada por el hambre", como recoge el libro *Las tomas de tierras en el sur del Gran Buenos Aires*, de Inés Izaguirre y Zulema Aristizábal.

El cerco policial, el hostigamiento, las enfermedades, en suma, los enormes sufrimientos, los convierten por un tiempo en una "comunidad de destino", fuertemente cohesionada en un momento en el que no había ningún dispositivo de cooptación por parte del Estado ni de los partidos políticos, perseguidos por la dictadura.

Los vecinos estuvieron sitiados por militares y policías unos seis meses. Vivían en tiendas de campaña improvisadas y no se les permitía acarrear agua, comida. El cerco policial se levantó cuando terminó la guerra de Malvinas y eso llevó a que el barrio se bautizara como 2 de abril, día en que se convocó una asamblea de las quinientas familias para definir el nombre.

Ese primer asentamiento de miles de personas, en plena dictadura militar, tuvo un profundo impacto en los sectores populares. Esta acción masiva fue pronto imitada y se extendió en forma explosiva. Militantes sociales de La Matanza, por ejemplo, llevaron a los ocupantes de Quilmes para que relataran sus experiencias y facilitaran la organización.

Ya en 1990, menos de una década después, había en todo el conurbano 109 asentamientos, habitados por unas 173.000 personas, de los cuales el 71% estaban en el conurbano Sur.

A partir de esta apretada síntesis, quisiera hacer algunas consideraciones vinculando aquellas tomas iniciales con la oleada actual.

1.- La dictadura había expulsado violentamente a los habitantes de las villas de la Capital Federal hacia el conurbano, para facilitar el control estratégico de los sectores populares, dispersarlos y romper sus redes de sobrevivencia. Los sectores dominantes intentaron modificar una relación de fuerzas que les resultaba desfavorable, como quedó demostrado en las luchas sociales desde el 17 de octubre de 1945.

En la actualidad, esa acción de dispersión y control la hacen, a dos manos, el mercado y el Estado. El primero encareciendo el precio del suelo, acaparando espacios para barrios privados y especulando con la tierra. El Estado tiene dos manos: con una reprime, amenaza, desparece, viola y violenta. Con la otra ofrece planes sociales que "ablandan" a los más pobres, los disuaden de organizarse para otra cosa que no sea depender de esos planes y busca cooptar todo lo organizado que no controla. Con respecto a la dictadura, la "democracia" está mostrando mucha más eficiencia y la misma indiferencia respecto a la vida.

2.- Por lo menos en la diócesis de Quilmes, en el sur de Buenos Aires, desde 1976 los sectores populares encontraron posibilidades de organizarse. La forma fue la comunidad eclesial de base (CEB). La primera comunidad la creó el sacerdote Berardo, de la parroquia de San Juan Bautista, en San Francisco Solano, en octubre de 1976; en menos de un año ya eran 20 las comunidades y en 1980 llegaban a 60. Eran pequeños grupos de entre 10 y 30 personas, tenían un coordinador elegido por la asamblea, se reunían semanalmente en la parroquia o en casas particulares.

Las organizaciones actualmente existentes, me refiero a la inmensa mayoría de las territoriales, son mucho menos democráticas que las CEBs (aunque quien esto escribe no comulga, ni va a misa). Me refiero a que lazos como la confianza mutua y la camaradería, han descendido varios peldaños en el mundo de las organizaciones populares.

3.- La necesidad es la misma que en la década de 1980. Un informe del Registro Nacional de Barrios Populares, asegura que existen 4.416 "barrios populares" en los que viven cuatro millones de personas, casi el 10% de la población, que han sido mapeados hasta diciembre de 2016. La mitad están en la provincia de Buenos Aires, que sigue siendo el epicentro de las tomas, pero la modalidad se ha extendido a todo el país.

Lo que ha cambiado, aunque no nos guste reconocerlo, es la cultura política y la experiencia vivida por los sectores populares. En cuatro décadas pasaron por la dictadura y la democracia, por gobiernos peronistas, progresistas, radicales y de la derecha. Siguen en el mismo lugar, aunque cada vez más lejos del centro de la ciudad, como lo demuestra la toma de Guernica[17]. En el primer cinturón se agotó la tierra disponible, por el aumento de la población y de los barrios privados.

Cada vez hay más planes sociales, que llegan a más gente, como el IFE. Cada vez hay más pobreza estructural. Cada vez hay más extractivismo y más neoliberalismo, más monocultivos y más minería. Por este camino, no hay arreglo.

Las clases medias altas y altas, la derecha y afines, son cada vez más reaccionarias, más antipopulares y están dispuestas a matar para seguir disfrutando la enorme desigualdad que han generado.

NOTAS:

[17] Las familias que ocupaban en Guernica fueron desalojadas por 4.000 efectivos policiales el 29 de octubre de 2020.

16

El mundo nuevo ya existe en el corazón de los movimientos

Agencia Anred, 23 de octubre de 2020

Entrevista de la periodista y activista social Jessica Visotsky, de Argentina, sobre el libro *Tiempos de colapso. Los pueblos en Movimiento.* Jessica es docente y miembro de la Universidad Trashumante, un colectivo que lleva tres décadas haciendo educación popular

Estás pensado la geopolítica desde los pueblos en movimiento, porque siempre está pensada desde arriba o desde los intelectuales, o desde el poder, pero nunca desde los pueblos. ¿Por qué lo pensaste así?

Vamos a poner el caso de Argentina. Argentina históricamente fue dependiente, en el siglo XIX, de Gran Bretaña y después en el siglo XX de Estados Unidos. Ahora hay una creciente presencia de China en Argentina a través del sistema financiero, de inversiones en energía, de enormes importaciones agropecuarias y con otros proyectos que se están avanzando ahora. Creo que frente al imperialismo yanqui, que ha causado estragos en nuestro continente, me pregunto: ¿es positivo que Argentina se recueste en China?

Tal vez es positivo porque el imperialismo yanqui está muy presente en esta región, es muy ofensivo, muy depredador y todo el sistema financiero que rodea al imperialismo es tremendamente agresivo para Argentina, como puede demostrarse con la trampa de la deuda externa generada y legada por la dictadura militar y ampliada hasta límites sofocantes por los gobiernos neoliberales. Sin embargo, no pensemos que acercarse a China es la solución, porque puede caerse en una dependencia similar.

Mi posición es que si dos patrones se pelean entre sí, como sectores populares tenemos una situación que nos beneficia. Digamos que el conflicto internacional entre Estados Unidos y China, entre Occidente y Oriente, abre grietas en la dominación que podemos aprovechar. Nada más que eso. Ahora cuando abordamos el tema de los criaderos de cerdos que se proyectan en Jujuy, porque China necesita llevar esa producción enormemente contaminante fuera de sus fronteras, ahí aparece un problema grave. Está bien que nuestros países dependientes diversifiquen sus relaciones internacionales, pero China no es la solución, porque es más extractivismo, porque no cambia el modelo sino que lo profundiza.

Desde los pueblos la pelea geopolítica nos abre posibilidades, nos deja márgenes para ser un poco más independientes, pero no nos resuelve el modelo productivo que es el gran problema que tenemos. Entonces estas cosas no se pueden ver en blanco y negro, todo bien o todo mal, creo que aquí es donde estamos necesitando una mirada autónoma, propia, una mirada que no sea dependiente de unos o de otros. O sea, que el tema geopolítico no se resuelve con una mirada simplista, sino que requiere un debate, una profundización de todos los aspectos que estamos discutiendo últimamente, porque la soberanía nacional no nos la va a garantizar China. Sabemos que Estados Unidos es un enemigo y eso es clarísimo, sabemos que Estados Unidos es un imperialismo que ha provocado enormes daños en América Latina, golpes de Estado, invasiones, desestabilización de gobiernos que no les resultaron favorables. Pero eso no se resuelve con apoyarse en China o en cualquier otra potencia.

El centro de tu análisis está el modelo de desarrollo, no en los pequeños beneficios inmediatos.

El modelo es extractivo y depredador del medio ambiente y va a seguir siendo el mismo con China y además no queremos ningún tipo de dependencia: no queremos una dependencia de A, ni queremos una dependencia de Z. O sea es un problema de principios. No me gusta cuando se debate en la izquierda que es mejor la relación con Rusia y

China que con los países occidentales. El debate debería consistir en cómo aumentamos la soberanía de nuestras naciones.

Argentina es el primer país del mundo en aprobar el trigo transgénico, bajo un gobierno que se dice progresista.

Si y eso nos debería llevar a una reflexión de fondo. El gobierno de Menem que fue el que aprobó la soja transgénica en la década de 1990 y ahora Alberto Fernández aparece con el trigo. Son distintos colores en el gobierno, distintas sensibilidades y discursos, pero el fondo es el mismo. Podemos ver cómo con gobiernos de derecha, de izquierda, progresistas o conservadores, el modelo sigue avanzando. El veto a la primera Ley de Protección Glaciares bajo el gobierno de Cristina Fernández, nos muestra las afinidades que hay entre progresistas y conservadores. Tiendo a pensar que un gobierno progresista puede ser menos malo que un gobierno conservador, pero en definitiva el modelo no se toca.

Hablas de la aceleración del colapso como consecuencia de la pandemia. ¿Podrías profundizar las diferencias entre colapso y crisis?

El concepto de crisis se refiere a una situación en la que se registra una caída muy profunda y luego una recuperación. Es un concepto muy ligado a las crisis económicas, entonces creo que el concepto de colapso es otra cosa, aborda otros temas, para decirlo de una manera muy brutal el colapso es como una metástasis. Cuando la enfermedad llegó a un lugar en que es irreversible y el cuerpo colapsa.

A diferencia de la crisis que es una caída y un retorno, en el colapso no hay retorno a una normalidad similar a la anterior. Lo que estamos viendo es que el sistema genera problemas que no se pueden resolver: el sistema capitalista, moderno, occidental, patriarcal, colonial, para ponerle todos los apellidos, ya no tiene solución, no tiene vuelta atrás. Además los dos o tres problemas principales que genera el sistema

hoy, crisis ambiental, agresión estructural a los pueblos originarios y la violencia patriarcal con la permanente agresión hacia las mujeres, no se resuelven con parches, con reformas.

El patriarcado, por ejemplo, no se resuelve con políticas sociales. Es un modo de dominación que hay que desguazar, que hay que deconstruir, no digo derribar como dicen algunas compañeras porque pareciera que fuera una estatua, una cosa, y es una forma de opresión que hay que desarmar, como dice la feminista boliviana María Galindo. El colonialismo es igual, apunta a las mismas lógicas, es un modo que hay que deconstruir, que hay que desmontar. El colapso en el que estamos metidos es fruto de la revolución industrial, de siglos de desarrollo, del colonialismo, del patriarcado, de la modernidad, de la cultura occidental, y tal como se vive hoy, con un consumismo feroz y depredador, todo esto ya no funciona.

En el mejor de los casos podrías conseguir que el sistema lo administren los progresistas de modo más favorable a los sectores populares, pero el colapso no cambia porque las causas de fondo no dependen de quién esté en el gobierno. Claro que si gobiernan conservadores tipo Macri, las cosas van a empeorar rápidamente. Lo que puede cambiar son los tiempos y los modos. Por otro lado, la crisis del capitalismo va a ser igual de profunda porque no depende de quién lo administre, y esto nos coloca ante tareas mucho más complejas que derribar a un gobierno, que cambiar al que está administrando el modelo. Nos coloca ante tareas para las cuales nosotros como movimiento popular no tenemos experiencia. Y te diría que afrontar el colapso es más aún complejo que la crisis del capitalismo.

En la segunda parte del libro utilizas la metáfora de los fuegos sagrados o de la luz al final del túnel que son esas formas de vida alternas que los pueblos han sabido conservar y reproducir como las mingas, el trabajo colectivo. ¿Qué encontraste en los encuentros con compañeras y compañeros de los distintos países, porque leer el libro es como un viaje por América Latina hoy?

Para mi sorpresa, porque estoy más ligado a experiencias como la zapatista o la mapuche, los nasa y el Consejo Regional Indígena del Cauca

están haciendo un trabajo muy interesante que le llaman una minga hacia adentro. Normalmente las mingas son movilizaciones en las cuales, como en la minga del 2008, van recorriendo diversos pueblos, diversos lugares, diversas ciudades con el fin de dialogar, intercambiar e interpelar al poder. En esta ocasión decidieron una minga hacia adentro.

¿Cómo se concreta materialmente? En que 7.000 guardias indígenas armados de chontas, bastones ceremoniales, cierran los resguardos que son los territorios reconocidos constitucionalmente de los pueblos originarios y controlan la entrada y salida de personas. Dentro de los territorios lo que suceden son varios procesos. Uno de ellos, apoyado por las radios comunitarias en lengua originaria, es la armonización que consiste en rituales, asambleas, reuniones, algunas al pie de montañas o lagunas que son sitios sagrados, en los que participan médicos tradicionales, con plantas medicinales, con sahumerios, rituales en que los comuneros y comuneras buscan armonizarse. Ese es un primer elemento para mi importantísimo.

Pero también se armonizan con la naturaleza, porque el medio ambiente está enfermo, lo hemos enfermado y como consecuencia nos ha enfermado a nosotros, como dicen ellos. Me parece que esto es bien interesante porque nos permite ver cómo los pueblos originarios son los primeros que trabajan esa armonización. En segundo lugar desarrollan una intensificación de los cultivos porque saben que van a faltar alimentos y además diversifican los cultivos. En tercer lugar desarrollan ferias y encuentros de trueque anti neoliberales como dicen, donde los pueblos de tierras altas llevan sus cultivos como la papa e intercambian con los pueblos de tierras bajas y templadas que producen frutas, maíz y otros productos, y no intercambian equivalencias, un kilo por un kilo, sino en base a la necesidad de cada quien. Y esto me parece que son prácticas bien interesantes y muy esperanzadoras.

En el terreno urbano me impresionaron mucho las asambleas territoriales en Chile: en Santiago y en Valparaíso se crearon más de 200 asambleas, más de 500 ollas comunitarias y se han creado en algunas asambleas redes de abastecimiento y también redes feministas de abastecimiento que compran directamente a los productores o mayoristas, sin pasar por

supermercados, y las distribuyen a las familias. Algunas compañeras me decían que el 90% de sus compras ya están por fuera del supermercado ¿Por qué esto es importante? Porque son prácticas que buscan desarmar el sistema capitalista de distribución de alimentos que es un sistema de opresión, de explotación. Y lo hacen jóvenes, mujeres, pobladoras de barrios.

Tanto la experiencia del Cauca como las experiencias de las asambleas de Chile, y muchas otras, me parecieron interesantes como para contarlas, porque me parece que tenemos que recoger las experiencias que los medios de comunicación hegemónicos no registran. En ningún medio de comunicación del sistema encontré experiencias como éstas que vengo reproduciendo, porque me parece que pueden ser inspiradoras para otros y otras en diferentes lugares del mundo.

También hay dos relatos que sobre Perú, el "Hasta acá llegó Lima" que plantea el retorno al campo, ese camino inverso al de la migración a las ciudades, que me pareció muy fuerte. Tampoco se conoce ese proceso o al menos yo no conocía ese proceso que se está dando en Perú. Aquí en Argentina, hay pequeñas iniciativas en este intento de retornar al campo. Quienes provenimos de zonas rurales y nos hemos venido a la ciudades para estudiar y nos quedamos, en este contexto uno mira y visualiza lo que implica el campo y la tierra. ¿Sobre esa vuelta al campo en Perú podrías contar un poquito más?

Lo notable es que son personas que habían llegado a Lima hacía poco tiempo, no sólo a Lima, también a capitales de provincias. Cuando aparece la pandemia en marzo se encuentran, como nos pasó a los urbanitas, a estos habitantes de la locura que somos los urbanitas, sin saber qué hacer. En mi caso te digo que uno se siente inútil, no tengo tierra, no sé cultivar y si esto se agrava y no tengo dinero o posibilidad de comprar alimentos no sé qué hacer, tengo que ir a que el Estado me de algo o una empresa me done alimentos. Entonces espontáneamente, naturalmente, la gente empezó a retornar al campo, una parte de las personas lo hicieron incluso caminando, muchas lo hicieron asumiendo grandes riesgos como las mujeres solas con sus hijos.

Esto me lo contó un antropólogo amigo, Rodrigo Montoya, que nació en un pueblo de la sierra andina y ahora vive en Lima. En cierto momento la gente reflexiona: en mi aldea está mi mamá, está mi papá, no tienen muchas comodidades pero tienen tierras, saben cultivar la tierra y tenemos alimentos, gallinas y cuyes, tenemos posibilidad de comer porque lo que está vulnerando la pandemia, el colapso, es la posibilidad de alimentarnos. Entonces teniendo tierra y agua la situación cambia. Familias enteras se han ido de Lima. Lo que impacta es que por primera vez en medio siglo, porque la migración rural-urbana en Perú comenzó fuertemente en las décadas de 1950 y 1960, diversos sectores empiezan a marcar un rumbo de retorno. Yo siempre digo que estas cosas son minoritarias y marginales, pero en un momento van a dejar de serlo. En donde yo vivo, en Montevideo, somos muchos los que estamos mirando de compramos un terreno y salir de la ciudad, algo que ya está sucediendo en forma de goteo.

Muchos argentinos de clase media alta están yendo a vivir a Uruguay porque dicen que la calidad de vida es mejor, o porque los empresarios pagan menos impuestos.

En América Latina el progresismo difundió la idea de que un gobierno progre iba a atender la pandemia mejor que un gobierno de derecha como el de Bolsonaro en Brasil o como el de Piñera en Chile. Pero nos estamos dando cuenta que todos los gobiernos están sufriendo desafíos para los cuales no están preparados, en sociedades que tampoco están ni en lo material ni en los psicológico preparadas para esta situación. El consumismo es para mi un termómetro. ¿Por qué tengo que consumir lo superfluo en una situación de emergencia? Los gobiernos están tomando iniciativas para que la clase media, que ahora gasta menos que antes porque está encerrada, sea de algún modo empujada a usar ese dinero, a ponerlo en circulación porque el sistema necesita ese flujo para seguir funcionando.

Creo que sería necesario profundizar en la cuestión urbana. En el caso de las favelas en Brasil, mencionas el entramado entre la militarización,

el narco, las iglesias evangélicas, que también lo vemos en otra escala en todas las ciudades de América Latina. Aquí en Argentina la presencia de las iglesias pentecostales y de la policía es una constante en los barrios. Son pocas las experiencias de autonomías urbanas como el caso de Cherán que aparece en el libro. ¿Cómo ves las resistencias urbanas en las favelas y las ciudades en general, cómo se pueden enfrentar la militarización, las redes del narcotráfico y las iglesias pentecostales?

En Brasil, en las favelas pasó algo muy curioso. Al principio de la pandemia hubo una masacre de doce chicos en una favela de Río y el Supremo Tribunal Federal decidió suspender el patrullaje policial-militar en las favelas durante un mes. Lo que sucedió es tremendo: las muertes cayeron verticalmente, demostrando quiénes generan la violencia. Estamos en una situación muy clara en ciudades argentinas como Rosario, en la cual la alianza policial-parapolicial-narco es muy potente y es como una soga al cuello para los sectores populares.

Quiero enfatizar lo siguiente: estamos en una situación de militarización estructural, que atraviesa a los gobiernos conservadores y progresistas. Con el gobierno de López Obrador o de Alberto Fernández la militarización no disminuyó sino que creció. Insisto en que estamos ante una cuestión sistémica, estructural, porque hoy el capitalismo necesita militarizar territorios para profundizar el despojo. Uno puede decir: quizás con un tipo de gobierno haya más chance de aclarar las cosas, pero la policía adquirió un estatuto, una autonomía de hecho que la vuelve incontrolable.

Ante esa realidad no queda más camino para los sectores populares que organizarse para asegurar la protección. Ese es el caso de Cherán, una ciudad de 20 mil habitantes en Michoacán, en donde los silbatos de los guardias comunitarios que ejercen el control, señalan cuándo hay una emergencia. Como casi todas las iniciativas colectivas importantes, nacen y crecen primero en las áreas rurales y después con mucha dificultad se trasladan a las urbanas.

Estos días me invitaron a un taller con guardias del sur de Colombia, de la zona donde está el Consejo Regional Indígena del Cauca y lo que

puede ver es algo muy interesante. Empezaron con las guardias indígenas hace más de 20 años para protegerse de los militares, los paramilitares y las guerrillas, para que no llevaran la guerra a sus territorios. Hoy ya hay guardias cimarronas de los pueblos negros y guardias campesinas como hubo en el norte de Argentina con la guardia Washek de los pueblos originarios del Chaco. ¿Por qué? Porque el poder del capital narco-paramilitar-estatal es tan brutal que necesitamos defendernos y ya no podemos confiar en que la policía o las instituciones estatales nos protejan. Esto es terrible, pero es la realidad que estamos viviendo.

En las favelas las iglesias evangélicas tienen una presencia, un peso en los barrios muy fuerte, han hecho un trabajo que muchas organizaciones que tienen trabajo territorial no lo saben hacer o no lo han podido hacer.

Han trabajado mejor que los movimientos populares. Los han desplazado, se ganaron a la gente más pobre, muchas veces porque consiguieron comprender mejor sus necesidades. Lo que veo que pasa en Brasil es que las grandes iglesias evangélicas, las que apoyan claramente a Bolsonaro, buscan domesticar a los sectores populares y éstos buscan negociar con las iglesias: voy a misa y me dan algo de comida. Es un control muy pesado porque tienen el apoyo de la policía militar y la complicidad del narcotráfico.

Sin embargo, durante la pandemia por primera vez en mucho tiempo hubo autoorganización en muchas favelas porque las ayudas del Estado llegaron muy tarde. La gente fue capaz de autogestionar algunas cuestiones como la comida y los insumos sanitarios. Quiero decir que es muy meritorio, porque no son las villas de Argentina donde hay una tradición de organización popular apoyada por la iglesia católica y la izquierda militante.

En Brasil la organización territorial ha sido prácticamente arrasada entre la policía militar y los narcos, casi desaparecieron las organizaciones de base y ahora están trabajando, desde 2013, en un proceso de fortalecimiento y lo poquito que puedan hacer en cada favela es muy

meritorio y muy valorable. En una sociedad como la brasileña que está totalmente avasallada por los poderes, donde la organización popular ha sido marginada y cuenta con muy poca capacidad de movilización, no se van a resolver estas dificultades en poco tiempo. Lo que puedo decir, en síntesis, es que hay una reactivación y reorganización de sectores populares en las favelas.

Mencionas en el libro la experiencia de Universidad Trashumante y la pedagogía que se gesta desde la trashumancia, una pedagogía intimista y desde la autonomía. Entendiendo que hoy el concepto de educación popular es polisémico, lo toma todo el mundo y con intereses muy contradictorios, ¿qué horizonte para la pedagogía, qué educación popular y qué línea dentro de toda esa polisemia estás viendo en esa experiencia de la Universidad Trashumante?

Es muy cierto que la educación popular ha sido en gran medida cooptada, a tal punto que la han tomado como insumo desde los ministerios de Desarrollo Social. Pero también las grandes empresas la utilizan aunque no le llaman educación popular, pero hacen ejercicios y dinámicas de "participación" de sus trabajadores, porque la encuentran eficiente a la hora de conocer cómo piensan y para implicarlos en la empresa.

Lo que a mí me interesa de la Universidad Trashumante, en la que participo como militante, es que ellos han pasado de la clásica educación popular que está enfocada en la clase media, en docentes de clase media, con alumnos de clase media, es el tránsito que han hecho a que la educación se la apropien las personas de los barrios, de los asentamientos, de las villas. Ese es el gran trabajo que están haciendo, correrse hacia ese lugar, con la creación de *escuelitas* (nombre que viene del zapatismo) donde la gente de los barrios se va dos, tres días a un campamento y se forman y debaten. He estado en campamentos con más de 200 personas que durante varios días trabajan intensamente, de forma totalmente autónoma, con sus propios recursos.

Aquí la metodología es lo menos importante, por supuesto tiene su papel pero lo importante es que las personas, las amas de casa, las mujeres de

los sectores populares sin escolaridad, las madres solas con hijos, sean capaces de tomar la palabra en rondas y que los demás escuchemos; de llorar en colectivo, de danzar, de leer poemas y de cantar. La metodología es que la gente exprese lo que siente, lo que es, los dolores y las angustias, las alegrías y las emociones.

Lo que me encontré en el último taller que estuve en Córdoba, fue el tema de los muertos, hijos, primos, hermanos asesinados por la policía. Antes el tema era la falta de empleo, la pobreza, el hambre, la comida, pero en un año, hablo de 2019, el centro pasó a ser la vida y la muerte. Esto es un indicador de la tremenda mutación del sistema y semanas después de ese campamento/taller llegó la pandemia.

A lo que voy, es a la necesidad de superar la educación que ha sido institucionalizada, tanto por parte de ONGs como de los Estados, que están centrados en la pedagogía, en la técnica, y toda la discusión en la educación popular ha venido siendo si hacemos la dinámica del rollo de lana o la dinámica tal o cual, y las dinámicas deben subordinarse a lo único importante: que los sectores populares, los más pobres, se conviertan en sujetos. Entonces los espacios de educación popular tienen sentido en la medida que habilitan, que promueven que los sectores populares (y hoy hablamos básicamente de mujeres y jóvenes), tomen la palabra y se organicen, se conviertan en sujetos. Esa es la diferencia entre una educación popular emancipadora y otra domesticadora. Si para este proceso necesitamos hacer algunas dinámicas, muy bien, pero la dinámica no es el centro, el centro es convertirse en sujetos y sujetas.

Por último quisiera escucharte sobre los zapatistas. Estuve el año pasado y conocí el Caracol Jacinto Canek en San Cristóbal, que es uno de los espacios nuevos. ¿Cómo ves el zapatismo en relación a lo que está pasando en el mundo?

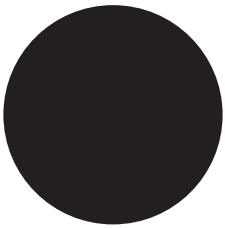
Por un lado diría algo muy parecido de los nasa sobre la minga hacia adentro. El zapatismo es un movimiento fuerte, importante, que marca una diferencia política y ética. En el comunicado de la serie en la que anuncia el viaje a Europa, "Una montaña en alta mar", el subcomandante Moisés

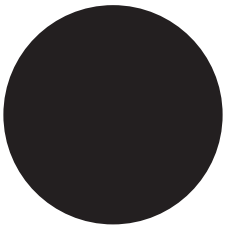
dice: en nuestros territorios hubo doce muertos y nos hacemos cargo de eso, son responsabilidad nuestra. Te lo digo para enfatizar la diferencia política y ética, porque ningún gobierno asume los miles de muertos por la pandemia como su propia responsabilidad. Hablan del Covid como si no tuvieran ninguna responsabilidad.

Lo segundo es que en México pese al gobierno o por el gobierno, hay un crecimiento de los feminicidios, de los crímenes de los paramilitares y en los últimos meses hubo un fuerte incremento de la violencia paramilitar, paraestatal en Chiapas, contra ejidos que forman los nuevos espacios zapatistas. Los paramilitares asesinan a la luz del día, sin cubrirse, y no pasa nada, la justicia no interviene, el Estado no interviene, los militares los apoyan entregándoles armas y el gobierno los apoya con su silencio. Entonces necesitan romper ese cerco y lo hacen buscando una movilización que en primera instancia será en Europa, en un momento difícil tanto para los zapatistas como para los europeos porque la ofensiva es muy fuerte.

Lo que sucede en México conforma una especie de pinza, porque los paramilitares y el Estado con su violencia están abriendo camino a las obras de infraestructuras, al Tren Maya y al Corredor Transístmico. Lo más brutal que sucedió en estos meses fue el crimen de Morelos, el asesinato de Samir Flores un día antes de un plebiscito que convocaba López Obrador para que el pueblo aprobara sus obras. No tuvo el menor problema en seguir con su plan pese a que mucha gente no fue a votar, a que las organizaciones populares le pidieron que suspendiera el plebiscito por este crimen. No le importó nada.

Entonces creo que el viaje de los zapatistas es una iniciativa importante, después de meses de pandemia dicen que aprendieron a controlar la situación y que ahora toca salir. Curiosamente el mismo mes comenzó la minga del CRIC en el Cauca, que salió a recorrer Colombia. Creo que en este momento los pueblos originarios que son los más avanzados de nuestro mundo alternativo, están diciendo que ya aguantaron el golpe y entonces empiezan a recorrer el mundo tejiendo solidaridades, tejiendo mundos nuevos.





TERCERA PARTE
Tendencias y dificultades abajo y a la izquierda

17
De la soberanía a la autonomía alimentaria

Desde marzo de 2020 cuando aterrizó la pandemia de coronavirus en América Latina, la reacción de los pueblos originarios, negros y campesinos, y de una parte de los sectores populares urbanos que habitan las periferias de las ciudades, consistió en intentar resolver sus mayores urgencias, en particular las vinculadas con la alimentación. Los más diversos movimientos comenzaron a organizar la producción, distribución y transporte de alimentos en todos los rincones y países de nuestro continente. Algunos ya estaban trabajando en estos aspectos, mientras otros comenzaron a hacerlo en las primeras semanas de la pandemia. Conocer alguno de estos empeños nos permite profundizar en la idea de "autonomía alimentaria" que, a mi modo ver, describe mejor lo que viene sucediendo en algunos movimientos que el concepto de "soberanía alimentaria".

Desde marzo de 2020 cuando aterrizó la pandemia de coronavirus en América Latina, la reacción de los pueblos originarios, negros y campesinos, y de una parte de los sectores populares urbanos que

habitan las periferias de las ciudades, consistió en intentar resolver sus mayores urgencias, en particular las vinculadas con la alimentación. Los más diversos movimientos comenzaron a organizar la producción, distribución y transporte de alimentos en todos los rincones y países de nuestro continente. Algunos ya estaban trabajando en estos aspectos, mientras otros comenzaron a hacerlo en las primeras semanas de la pandemia. Conocer alguno de estos empeños nos permite profundizar en la idea de "autonomía alimentaria" que, a mi modo ver, describe mejor lo que viene sucediendo en algunos movimientos que el concepto de "soberanía alimentaria".

El Movimiento Sin Tierra (MST), por ejemplo, ha donado miles de toneladas de alimentos a las poblaciones de las periferias urbanas. Durante siete meses asentamientos sin tierra donaron por lo menos dos mil toneladas de alimentos, 270 mil bandejas y 43 mil máscaras y productos de higiene personal en lo que consideran "solidaridad de clase entre trabajadores y comunidades" (MST, 2020). Se trata, como dice el movimiento, de "crear redes del pueblo cuidando al pueblo aún sabiendo que eso no exime al Estado de sus obligaciones".

No se trata de caridad sino de un trabajo político destinado a organizar nuevas camadas de los sectores populares en las barriadas urbanas, donde mayores dificultades presenta la creación de movimientos.

Algo similar sucede en los resguardos indígenas del Cauca, donde el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) decidió una *Minga hacia Adentro*, una de cuyas vertientes gira en torno a la intensificación y diversificación de la producción de alimentos que son donados a periferias urbanas. Los pueblos nasa y misak han llevando cientos de toneladas a ciudades como Cali, Popayán y Bogotá, pero han creado además ferias de trueque, donde confluyen productores de tierras frías, templadas y cálidas e intercambias alimentos sin equivalencias (un kilo por un kilo), sino que cada quien aporta lo que puede y recibe según sus necesidades (Zibechi, 2020).

En ciudades como Popayán se han abierto huertas urbanas, en las que colaboran estudiantes y egresados de agronomía con pobladores

peri-urbanos. En Chile las asambleas territoriales han creado redes de abastecimiento puenteando a supermercados y mayoristas, comprando directamente a los campesinos y haciendo repartos colectivos en los barrios (Zibechi, 2020).

En Uruguay el Mercado Popular de Subsistencia incluye a más de mil familias que hacen una compra mensual a empresas recuperadas, cooperativas y productores rurales, y una parte menor a grandes empresas alimenticias, y distribuyen de forma organizada en más de 50 nodos urbanos (Zibechi, 2020b). La Unión de Trabajadores de la Tierra en Argentina puede ser otro ejemplo de producción y distribución entre las y los de abajo a partir de donaciones de alimentos a sectores populares urbanos, ferias populares y la creación de una red de Almacenes de Ramos Generales donde venden a precios populares alimentos agroecológicos. Son muchos más y se pueden registrar en todos los países, ante las enormes dificultades que tienen los Estados para garantizar la alimentación de los pueblos.

Este conjunto de iniciativas, en las que destacan los pueblos originarios y los movimientos campesinos, son el fruto de luchas de varias décadas para resistir el avance de los agronegocios. En este proceso, los pueblos organizados en movimientos han debido formular resistencias y prácticas, comenzando con el concepto de "soberanía alimentaria", que ha ido mutando al calor de nuevas experiencias colectivas.

Soberanía alimentaria para enfrentar el neoliberalismo

En noviembre de 1996 se realizó en Roma la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, que emitió la "Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial". Los jefes de Estado y de gobierno junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se comprometieron a implementar la "seguridad alimentaria" que gira en torno a la producción de excedentes alimentarios, aumentando los volúmenes de producción y, por lo tanto, de las superficies destinadas a los cultivos con la incorporación de nuevas tecnologías.

Como señala la Declaración de Roma, "el comercio es un elemento fundamental para la seguridad alimentaria mundial" (FAO, 1996), y por lo tanto la producción en base a monocultivos y agroquímicos, siendo el sujeto de la seguridad alimentaria el capital privado en base al marco jurídico y económico promovido por los gobiernos.

De forma simultánea, Via Campesina lanzó el concepto de "soberanía alimentaria" en la misma Cumbre Mundial de Roma, "como condición fundamental para la seguridad alimentaria" (Via Campesina, 1996). Un concepto que luego fue ampliado y profundizado a lo largo de los años, pero que inicialmente tuvo la virtud de poner en cuestión las políticas de ajuste estructural que en esos años "excluyen y discriminan a los pequeños y medianos productores y productoras del mundo".

Sostenía Via Campesina que "soberanía alimentaria es el derecho de cada nación para mantener y desarrollar su propia capacidad para producir alimentos básicos de los pueblos, respetando la diversidad productiva y cultural". La declaración "Soberanía Alimentaria un futuro sin hambre", hacía hincapié en frenar a las multinacionales que en esos años venían imponiendo monocultivos como la soja, destacando que quienes socavaban la soberanía alimentaria son "las instituciones multilaterales y el capital financiero", reclamando que "los campesinos y pequeños productores deben tener una intervención directa en la formulación de políticas agrarias en todos los niveles".

En encuentros posteriores, Via Campesina fue profundizando estas definiciones y las adaptó a los cambios que estaban promoviendo el neoliberalismo y el extractivismo en el mundo. En 2007 la Declaración de Nyéléni, del Foro por la Soberanía Alimentaria, encuentro de más de 500 representantes de organizaciones campesinas de 80 países, destacaba que la soberanía alimentaria "pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y las empresas" (Via Campesina, 2007).

El sujeto pasan a ser los pueblos organizados en movimientos. No es un viraje, en absoluto, sino un camino de enraizamiento. La Declaración

lo dice claramente: "Estamos profundizando en nuestro concepto de soberanía alimentaria, y hemos intercambiado acerca de la realidad de las luchas de nuestros respectivos movimientos para conservar la autonomía y recuperar nuestro poder" (Via Campesina, 2007).

Esta Declaración destaca que en la base de estos procesos están relaciones sociales no capitalistas o de nuevo tipo: "La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre los hombres y las mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones".

Como puede observarse, las referencias al Estado van pasando a un segundo plano o, directamente, desapareciendo. En adelante defienden, como señala Peter Rosset, "circuitos locales de producción y consumo, donde las familias de agricultores vendan sus productos y compren lo indispensable en poblaciones locales" (Rosset, 2004: 2). La agricultura familiar ocupa un lugar destacado.

Hacia el final de la década, Via Campesina define la soberanía alimentaria como un proceso de "construcción de un mundo más justo desde abajo hacia arriba", en base al poder que le otorgó a los pueblos y los campesinos el control del sistema alimentario (ECVC, 2018: 1). El documento destaca que la soberanía alimentaria no enfatiza en soluciones técnicas ni en nuevas tecnologías, sino en procesos de organización de las campesinas y campesinos que apuntan hacia "el control directo y democrático de los elementos más importantes de su sociedad: cómo comemos y nos alimentamos, cómo usamos y mantenemos la tierra, el agua y otros recursos" (ídem: 3).

En resumen, el concepto de soberanía alimentaria surge como respuesta y alternativa al neoliberalismo y a la globalización de las multinacionales, enfrentando el concepto de seguridad alimentaria que defendieron los gobiernos, la OMC y la mayoría de las ONGs en la década de 1990. No sólo eso, por soberanía alimentaria se entiende "construir una nueva realidad (…) mientras retamos las estructuras existentes de poder y control corporativo" (idem: 13).

De la soberanía a la autonomía

Según los propios movimientos, la profundización del concepto de soberanía alimentaria fue posible, y necesario, por la ampliación de las luchas territoriales, por la incorporación de nuevos sujetos colectivos –en particular mujeres y pueblos originarios, negros y tradicionales- que no sólo expandieron el control sobre sus espacios y territorios sino que promovieron una creciente autogestión de ellos.

Ante el avance del agronegocio el MST abandonó la anterior concepción de reforma agraria consistente en el reparto de la tierra y definió una *reforma agraria integral y popular*. "A partir de la realidad agraria actual, dominada por el proyecto del capital, la reforma agraria clásica, bajo la hegemonía de la burguesía, que solo pretendía dividir la tierra para desarrollar las fuerzas productivas del campo y el mercado y servir para el desarrollo del capitalismo, es inviable, ya no es necesaria, a pesar de haber sido muy importante para la humanidad, especialmente en los países donde se ejecutó" (Dos Santos, 2015).

La reforma agraria que defienden a partir del nuevo siglo, está focalizada en la democratización de la tierra, que pasa por "el acceso a todos los bienes de la naturaleza y de la producción en la agricultura", la organización de la producción sin agrotóxicos y una serie de propuestas que giran en torno a la agricultura familiar y la defensa de los bienes comunes. Lo más importante, como lo detalla Marina dos Santos, de la Dirección Nacional del MST, es que las raíces de esta propuesta "brotan y crecen en el enfrentamiento de los sujetos trabajadores contra las fuerzas del capital, que se apropian cada vez más de todos los bienes de la naturaleza, la salud y la cultura popular para convertir todo en lucro" (Dos Santos, 2015).

En los primeros años 2000, se produjo una expansión notable del agronegocio y la minería a cielo abierto que redundaron en una intensificación de la lucha por la tierra, entre las multinacionales y los pueblos. Ese proceso está en la base de la profundización de las definiciones y prácticas de los movimientos. Una de las tendencias registradas en toda América latina, es que las organizaciones campesinas, pueblos originarios

y tradicionales, "comenzaron a ensayar y poner en práctica experiencias de organización productiva y de construcción de mercados alternativos para sus producciones" (García y Wahren, 2016:335).

Se despliegan conceptos como "comercio justo", se construyen "ferias francas" que habilitan el "encuentro directo entre el productor y el consumidor, la recuperación de saberes y tecnologías apropiadas y agroecológicas" (ídem: 335-336). De ese modo, no sólo producen e intercambian por fuera del mercado monopolizado, controlando la cadena que va la producción al consumo de cercanía, sino que consiguen visibilizar los territorios agredidos por el capitalismo neoliberal. El movimiento, aún siendo minoritario, estuvo en condiciones de convocar el Primer Encuentro Nacional de Ferias Francas y Mercados Solidarios bajo el lema "Del productor al consumidor", en junio de 2011 en Misiones (Argentina).

Se trata de un proceso de enraizamiento territorial que se convirtió en una de las estrategias prioritarias de los movimientos rurales y también urbanos para resistir el modelo y, en simultáneo, desplegar relaciones sociales de nuevo tipo que ahondan la diferencia y, por lo tanto, la heterogeneidad de los sujetos colectivos respecto a las culturas políticas dominantes. Incrementando sus diferencias, esos sujetos se vuelven más potentes por su mayor capacidad de trastocar y subvertir las relaciones hegemónicas. Donde el sistema des-territorializa, despejando poblaciones para mejor convertir la naturaleza en mercancías y lubricar de ese modo la acumulación de capital, los pueblos re-territorializan relaciones sociales y modos de vida diversos y diferentes para, sencillamente, seguir siendo.

Las ferias francas argentinas, las ferias de reforma agraria del MST, las ferias de trueque nasa y misak del Cauca colombiano, y tantas otras, no son sólo espacios de intercambio de alimentos, sino espacios de vida, en los cuales danzan, bailan y cantan, intercambian saberes y productos. Podemos leer los lugares de inter-encuentro de los pueblos, como espacio-tiempos de reproducción de la vida colectiva. En ellos las comunidades, asentamientos y familias hacen un doble ejercicio: resisten el modelo extractivista y a la vez exteriorizan el mundo que desean y sueñan.

Así como los primeros años de 2000 registraron un aumento considerable del conflicto por la tierra y la vida, desembocando en una radicalización (más vivencial que metodológica) de los pueblos rurales, la pandemia parece estar operando como acicate para ahondar en el sendero que ya venían recorriendo. En el período de mayor avance del capital contra los pueblos, aprovechando la pandemia y la reducción forzada de la movilidad, los movimientos están reaccionando con más autonomía y mayor capacidad de producir, distribuir y consumir alimentos.

En la mayor parte de los casos se han visto forzados a hacerlo, ya que los Estados y gobiernos no han querido, algunos ni siquiera pudieron, responder a las demandas de poblaciones por alimentos en calidad y cantidad suficientes. Mientras restringen la movilidad de los pueblos dan luz verde a los mega proyectos extractivos que se apropian de territorios desplazando pueblos. De modo que las comunidades debieron afrontar la pandemia con los modos aprendidos construyendo y (re)inventando día a día la autonomía alimentaria.

TEXTOS CITADOS:

Dos Santos, Marina (2015) "Los desafíos de la reforma agraria integral y popular", *ALAI,* 27 de marzo, en https://www.alainet.org/es/articulo/168501 (consulta 28/10/2020).

European Coordination Via Campesina (2018) "Soberanía alimentaria YA", *ECVC*, Bruselas.

García, Luciana y Wahren, Juan (2016) "Seguridad Alimentaria vs. Soberanía Alimentaria: La cuestión alimentaria y el modelo del agronegocio en la Argentina", *Trabajo y Sociedad*, Nº 26, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Santiago del Estero, pp. 327-340.

MST (2020) "Solidariedade de classe reúne trabalhadoras(es) do campo e da cidade", en https://mst.org.br/2020/10/19/solidariedade-de-classe-reune-trabalhadorases-do-campo-e-da-cidade/ (consulta, 27/10/2020).

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (1996) "Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial", Roma, FAO.

Rosset, Peter (2004) "Soberanía alimentaria: reclamo mundial del movimiento campesino", Montevideo, Redes en http://www.redes.org.uy/wp-content/uploads/2008/09/soberania-alimentaria_reclamo-mundial-del-movimiento-campesino.pdf (Consulta 22/10/2020).

Via Campesina (2007) "Declaración de Nyéléni", en https://viacampesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/Food-Sovereignty-a-guide-ES-version-low-res.pdf (consulta 24/10/2020).

Via Campesina (1996) "Soberanía alimentaria un futuro sin hambre", en https://viacampesina.org/es/foro-de-soberanalimentaria-y-reforma-agraria-soberanalimentaria-un-futuro-sin-hambre/ (consulta 24/101/2020).

Zibechi, Raúl (2020a) Tiempos de colapso. Los pueblos en movimiento, Quimantú, Bajo Tierra y Desdeabajo.

Zibechi, Raúl (2020b) "Mercado Popular de Subsistencia, gambeta a los monopolios", en https://zur.uy/mercado-popular-de-subsistencia-gambeta-a-los-monopolios/ (consulta 27/10/2020).

18

Estallidos o levantamientos

La Jornada, 26 de febrero de 2021

Un reciente informe publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) revela que las clases dominantes, a las que el organismo sirve, esperan estallidos sociales en todo el mundo como consecuencia de la pandemia.

El trabajo "Repercusiones sociales de la pandemia", publicado en enero, considera que la historia es una guía que les permite esperar estallidos que ponen de manifiesto "fracturas ya existentes en la sociedad: la falta de protección social, la desconfianza en las instituciones, la percepción de incompetencia o corrupción de los gobiernos" (https://bit.ly/3qVVhAV).

Gracias a sus amplios recursos, el FMI elaboró un "índice de malestar social" en base a un análisis de millones de artículos de prensa publicados desde 1985 en 130 países, que reflejan 11.000 acontecimientos susceptibles de provocar estallidos sociales. Lo que les permite adelantar que sobre mediados de 2022 comenzará una oleada de protestas que se busca prevenir y controlar.

Lo importante es que el organismo financiero le está diciendo a los gobiernos y al gran capital que el período que se abre en los 14 meses posteriores al inicio de la pandemia, puede ser peligroso para sus intereses y que deben estar preparados, pero agrega que cinco años después los efectos de estos estallidos serán residuales y ya no afectarán a la economía.

La ecuación me parece clara: las clases dominantes esperan estallidos, se preparan para afrontarlos y neutralizarlos, porque durante un tiempo pueden desestabilizar la dominación.

Un detalle: el estudio ni siquiera menciona los resultados de eventuales elecciones como riesgos para el capital, quizá porque más allá de quien las gane, saben que los gobiernos surgidos de las urnas nunca han conseguido mellar el poder del capital.

Los movimientos anticapitalistas debemos tomar buena nota de las previsiones del sistema, para no repetir viejos errores y prevenirnos de acciones que, a la larga, nos desgastan sin producir cambios. Propongo diferenciar estallidos de levantamientos, para mostrar que aquellos no son convenientes, pero éstos pueden serlo si son fruto de una sólida organización colectiva.

Los estallidos son reacciones casi inmediatas a los agravios como los crímenes policiales, generan una enorme y furiosa energía social que se desvanece en pocos días. Entre los muchos estallidos, está el sucedido durante tres días de setiembre en Bogotá, ante el asesinato por la policía de un joven abogado que murió en el hospital con nueve fracturas de cráneo.

La represión provocó la muerte de más de diez manifestantes y medio millar de heridos, alrededor de 70 por bala. La justa rabia se centró en los Centros de Atención Inmediata, unidades policiales en las periferias, de las cuales unas 50 fueron destruidas o incendiadas. Luego de tres días la protesta se fue desvaneciendo y no quedaron nuevos colectivos organizados en los barrios más afectados por la violencia estatal.

Ejemplos de estos hay muchos, pero me interesa destacar que los Estados aprendieron a lidiar con ellos. Sobreexponen la violencia en los medios, crean grupos de estudio sobre las injusticias sociales, mesas de negociación para simular interés y hasta pueden separar a algunos uniformados de sus tareas, enviándolos a otras dependencias.

Lo más común es que los gobiernos acepten que hay injusticias, así en general, y que atribuyan la violencia de los estallidos a la precariedad del empleo juvenil y otras consecuencias del sistema, sin abordar nunca las causas de fondo.

Levantamiento es algo diferente. Un cuerpo organizado decide su comienzo, traza los objetivos y los modos, los puntos de concentración y de repliegue, y en diálogo colectivo decide el momento en que el levantamiento finaliza. El mejor ejemplo es el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019 en Ecuador. Duró once días, fue decidido por las bases de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador) y se plegaron sindicatos y jóvenes de las periferias urbanas.

La violencia fue acotada por las guardias de las organizaciones, que impidieron saqueos inducidos por policías infiltrados. Se decidió finalizarlo en enormes asambleas en Quito, luego de que el gobierno de Lenín Moreno anulara el paquete de medidas neoliberales que generó la movilización. El parlamento indígena y de los movimientos sociales creado días después, fue el encargado de darle continuidad al movimiento.

Un levantamiento puede reforzar la organización popular. En Chile, donde prefieren decir revuelta y no estallido, se crearon más de 200 asambleas territoriales durante las protestas, en casi todos los barrios populares.

La acción colectiva masiva y contundente debe reforzar la organización, porque es lo único que puede darle continuidad en el tiempo largo. Las clases dominantes aprendieron hace ya tiempo a capear los estallidos, porque saben que son efímeros. Si nos organizamos, las cosas pueden cambiar, pero nada lograremos si creemos que el sistema caerá con una sola trompada.

19

Pensamiento crítico y pandemia

La Jornada, 4 de diciembre de 2020

Una de las principales características del pensamiento crítico ha sido su incomodidad, su capacidad para perturbar los lugares comunes, cuestionar saberes establecidos y sacudir la modorra de la inercia. Siempre fue un pensamiento a contracorriente, rebelde e insumiso.

Marx se dedicó a poner patas arriba, o boca abajo, la herencia teórica de Hegel. Lenin se empeñó en desobedecer a Marx, que aseguraba que la revolución vencería primero en los países más avanzados industrialmente. Mao y los vietnamitas rechazaron las insurrecciones urbanas por la guerra campesina prolongada. Fidel y el Che fueron también herejes respecto a los partidos comunistas que dominaban el escenario de las izquierdas.

El tan elogiado Walter Benjamin fue implacable con la idea de progreso y, más recientemente, los ecologistas cuestionan el desarrollo, mientras las feministas rehúsan las organizaciones verticales y los caudillos patriarcales.

El EZLN, por su parte, recoge aciertos y evita errores de revoluciones anteriores, por lo que hace a un lado la guerra para seguir transformando el mundo y defendiendo (por todos los medios) los territorios donde el pueblo manda ejerciendo su autonomía.

¿En qué situación se encuentra el pensamiento crítico en plena pandemia? ¿Cuáles deberían ser los puntos centrales de su análisis? ¿Quiénes lo formulan en este período?

Intentaré responder en pocas líneas.

La primera es que el pensamiento establecido, enunciado por academias, partidos y "autoridades intelectuales", está en plena decadencia, un proceso enlazado con las crisis civilizatoria y sistémica en curso. Quizá por ser parte de una civilización moderna, urbana, occidental, colonial y patriarcal. O sea, por haberse rendido al capitalismo.

El grueso de los llamados intelectuales se dedican a justificar los errores y horrores de los partidos de la izquierda electoral, más que a criticarlos, con el triste argumento de que no quieren favorecer a la derecha. Si criticar a la izquierda fuera eso, Marx y Lenin deberían ser despachados por derechistas, ya que dedicaron algunas de sus mejores obras a cuestionar a sus compañeros de ruta.

La segunda es que el pensamiento crítico debe quitar el velo de las causas estructurales y de larga duración de la situación que vivimos. No entretener audiencias con argumentos falaces. Ser capaces, por ejemplo, de vincular la pandemia con el modelo neoliberal extractivo, la brutal especulación financiera y la cuarta guerra mundial contra los pueblos, en vez de atribuir los fracasos, y los éxitos en el combate al virus, a tal o cual presidente o gobierno. A eso le llamo entretener en vez de analizar.

Además, el pensamiento crítico no debe conformarse con diagnósticos. Estamos desbordados de diagnósticos del más diverso tipo, muchos de ellos contradictorios. Años atrás se mentaba el pico del petróleo (*peak oil*) como clave de bóveda del fin de la civilización capitalista. Mucho antes, se aseguraba que el sistema caería víctima de inexorables leyes económicas.

Cada día aparecen diagnósticos que colocan los límites del sistema en el medio ambiente, el agotamiento de los recursos, y un largo etcétera de supuestas "causas objetivas" que no hacen más que eludir el conflicto social como única forma de poner freno y derrotar al capitalismo. Ya lo dijo Benjamin: si el sistema cayera por razones objetivas, la lucha no tendría el menor sentido.

La tercera me parece la más importante. Hasta ahora los encargados de emitir pensamiento crítico eran varones, blancos, académicos y

de clase media-alta. Por supuesto el tipo de ideas que divulgaron eran eurocéntricas, patriarcales y coloniales, aunque debe reconocerse que no por eso estaban todas ellas erradas. Sólo debemos pasarlas por el tamiz de los pueblos, las mujeres y los jóvenes.

Ahora quienes emiten el pensamiento crítico no son ya "personalidades" sino pueblos, colectivos, comunidades, organizaciones y movimientos. ¿Quiénes son los representantes teóricos del pueblo mapuche o de los pueblos indígenas del Cauca colombiano? ¿Quiénes encarnan las ideas de los movimientos feministas y de mujeres antipatriarcales?

Todavía hay quienes creen que el pensamiento zapatista fue obra del subcomandante Marcos y ahora del subcomandante Galeano. Nunca aceptarán que son pensamientos nacidos de experiencias colectivas que son comunicados por voceros elegidos abajo. Nunca aceptarán que el vocero actual es el subcomandante Moisés.

Esta es la realidad del pensamiento crítico actual. Desvaríos arriba; creatividad abajo. Como la vida misma. No hay nada esencialista en esto. El conocimiento vivo surge entre quienes luchan. Sólo quienes están transformando el mundo pueden conocerlo a fondo, entre otras cosas porque les va la vida en ello, porque no pueden hacerse la menor ilusión con los de arriba, mucho más allá del color político y del discurso que emitan.

Benjamin lo dijo con absoluta claridad: "El sujeto del conocimiento histórico es la clase oprimida misma, cuando combate".

20

Posdata: Los mundos nuevos que nos orientan

En América Latina no existe "una" sociedad sino varias, más o menos separadas, entremezcladas y diferenciadas, en cuya formación el hecho colonial parece haber tenido un papel determinante. En esa fractura actúan los movimientos antisistémicos más importantes. El control territorial que ejercen ha sido la clave de bóveda que les permite crear sus pequeños mundos de relaciones sociales no capitalistas y de poderes no estatales en el seno del mundo de los oprimidos.

En cinco siglos los movimientos de los de abajo han transitando un largo camino: de la re-apropiación de la tierra y el espacio a la creación de territorios; de la creación de nuevas subjetividades a la constitución de sujetos políticos nuevos y diferentes respecto a la vieja clase obrera industrial sindicalizada y a los partidos que la representaban; de la desocupación a la creación de nuevos oficios para dar paso a economías contestatarias. Este largo proceso no ha sido, a mi modo de ver, reflexionado en toda su complejidad y aún no hemos descubierto todas sus potencialidades.

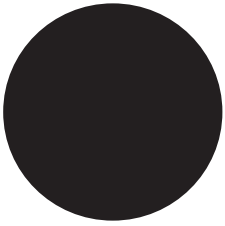
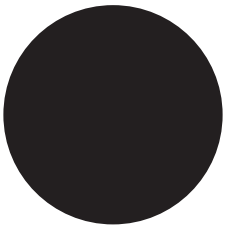
El aspecto central de este debate es si efectivamente existe un sistema de relaciones sociales que se expresan o condensen en un territorio. Eso supone ingresar al análisis de los movimientos desde otro lugar: no ya las formas de organización y los repertorios de la movilización sino las relaciones sociales, los territorios y la reapropiación de los medios de producción. En este tipo de análisis aparecerán nuevos conceptos como autonomía, comunidad, poderes no estatales, entre los más destacados. Porque los movimientos antisistémicos latinoamericanos plantean tanto la superación/destrucción del capitalismo y de los estados nación, como una batalla igualmente importante por la descolonización del pensamiento y, muy en particular, del pensamiento crítico. En este

sentido, los conceptos de movimientos sociales y aún de movimientos antisistémicos podrían ser complementados con propuestas y debates que han nacido al calor de la última oleada de luchas sociales, tales como "movimientos societales" o "pueblos en movimiento". Ambos conceptos buscan dar cuenta del hecho de que en los procesos de la última década lo que se ha puesto en movimiento son relaciones sociales diferentes a las hegemonizadas por el capital y los estados; o sea, no sólo se ha movilizado una parte de la sociedad sino una sociedad distinta, entretejida por relaciones sociales no capitalistas.

Ese mundo "otro" existe ya de alguna manera en el seno de los movimientos antisistémicos. Buena prueba de ello son las juntas de buen Gobierno en chiapas, los asentamientos sin tierra en Brasil, los cabildos nasa, los quilombos y palenques negros, las zonas campesinas y de los pueblos tradicionales, y las cientos de fábricas recuperadas por sus obreros. No estamos ante instituciones formales, sino ante prácticas no hegemónicas que rehúyen los modos capitalistas y, a veces, patriarcales en las relaciones entre las personas. Al parecer, los movimientos latinoamericanos, como lo ha señalado el subcomandante insurgente Marcos, estarían ensayando una nueva forma de hacer política, abajo y desde abajo, por fuera de las instituciones estatales que ya no pretenden ocupar aunque siguen aspirando a neutralizarlas para expandir el mundo nuevo que ya existe en el corazón de nuestros pueblos.

LOS PUEBLOS ROMPEN EL CERCO
es la segunda parte de
TIEMPOS DE COLAPSO

Es por ello que, mediante el presente
código QR, os invitamos a la
lectura de la primera parte.

PRIMERA PARTE

TIEMPOS DE COLAPSO.
Los pueblos en movimiento